

★ **La vergüenza y el hambre. Por Benoît Bréville**

Año XXIII, número 250 ♦ MAYO 2023

Edición chilena

Precio del ejemplar \$ 2.950

LE
MONDE.
diplomatique
Aún Creemos en los Sueños



Nuevo libro:

REFLEXIONES

Humberto Maturana, Annie Ernaux,
Pierre Bourdieu, Noam Chomsky, Federico Kukso,
Jacques Derrida, Noam Chomsky,
Michel Foucault y Noemi Klein

Libro impreso \$4.950 - Libro digital \$2.950

www.editorialauncreemos.cl

Los desafíos sindicales

Por Eric Campos, Claudio Francisco Sagardías, Alejandra Muñoz, Gisel Valenzuela,
Alexis Cortés, Antonio Páez y Naiara Susaeta

Litio por y para Chile

por Libio Pérez

**Las izquierdas ante
el proceso constitucional**

por Álvaro Ramis

**Sociología de la masacre,
a 50 años del golpe**

por Manuel Guerrero

Chile 2019-2022. La memoria del futuro

por Pierre Dardot

Persistencia y trayectorias educativas

por Dante Castillo y Mario Torres

**La importancia de la Ingeniería
en la sociedad chilena**

por Cristian Vargas

La situación en Francia en cinco puntos

por Rodrigo Arenas

**¿Existen universidades privadas
que sean públicas?**

por Marisol Durán Santis



José Venturelli, *Escena* (Acrílico sobre tela), 1972 (Gentileza Fundación José Venturelli)



Textos sobre inteligencia artificial, violencia machista, teatro, literatura, libros del mes, economía, finanzas,
la felicidad y el Estado, China, Turquía, Armenia, Irak, América Latina frente a la guerra en Ucrania...

LE MONDE diplomatique

Equipo

Difusión

EDICIÓN CHILENA

Director:
Victor Hugo de la Fuente

Editor General:
Libio Pérez Zúñiga

Iconografía:
Dominique Monteau

Diseño y diagramación:
Ángela Aguilera

Administración:
Ruth Flores
Freddy Araneda
Librearte, Ivonne Guzmán y
Mario Espinoza

Consultora en administración y
finanzas:
Allende y Montes Asociados Ltda

Colaboradores:
Clara González
Margarita Iglesias
Federica Matta
Ricardo Parvex
Álvaro Ramis
Gonzalo Rovira
María Emilia Tijoux

Le Monde Diplomatique
Edición chilena es una publicación
mensual de la
Editorial "Aún Creemos en los Sueños"

Dirección: San Antonio 434
local 14 - Santiago Chile

Teléfono: 22 608 35 24

E-mail:
edicion.chile@lemondediplomatique.cl

Página web:
www.lemondediplomatique.cl

Venta de ejemplares:
www.editorialauncreemos.cl

Impresión: Copesa

Distribución:
Quioscos: Meta
Librerías: LOM Ediciones

Le Monde Diplomatique (Francia)

Fundador:
Hubert Beuve-Méry

Presidente del Directorio
y Director de la redacción:
Benoît Bréville

Consejero editorial del director:
Serge Halimi

Jefe de redacción:
Akram Belkaïd

Encargada de desarrollo y
ediciones internacionales:
Anne-Cécile Robert

1-3 rue Stephen-Pichon,
75013 París Francia
Tél.: (331) 53 94 96 21
Fax: (331) 53 94 96 26

E-mail:
secretariat@monde-diplomatique.fr

Internet:
www.monde-diplomatique.fr

Ediciones internacionales de
Le Monde Diplomatique

ALBANIA Y KOSOVO. Mensual, editado
por Bota Diplomatike, Eduard Lir, Nr
50, Ap.10, 10000 Prishtina, Kosovo. 500
ejemplares (Friedrich)

ALEMANIA. Die Tageszeitung.
(Friedrichstraße 21, 10969 Berlín);
80.000 ejemplares, supl. mensual.
www.monde-diplomatique.de

BRASIL. Palavra Livre (Rua Araújo
124, São Paulo); 30.000 ejemplares,
mensual.

BULGARIA. Les Amis du Monde
diplomatique. (Rakovski 78, 1.000 Sofia);
6.000 ejemplares, suplemento de Duma.

CHILE. Editorial "Aún Creemos en los
Sueños" (San Antonio 434, Local 14,
Santiago); mensual, 8.000 ejemplares.
www.lemondediplomatique.cl

COLOMBIA. Tebeo Comunicaciones S.A.
(Avenida 19, N° 4-20, Bogotá);
6.000 ejemplares, mensual.

COREA DEL SUR. Sociedad Le Monde
Corea. (Seúl); 5.000 ejemplares,
mensual.

ESLOVENIA. Novinarski Klub. (Tavcarjeva
15, Ljubljana, Eslovenia); 1.000 ej.,
mensual.

ESPAÑA. Ediciones Cybermonde SL.
(Aparisi i Gujjarro N° 5, 2º, 46003,
Valencia); 30.000 ejemplares, mensual.

GRECIA. Avgi. (Agiou Konstantinou
12, 10431 Atenas); 10.000 ejemplares,
suplemento semanal, www.monde-
diplomatique.gr

HUNGRÍA. Edición electrónica difundida
por Közép-Európai Fejlesztési Egyesület,
Múzeum u. 7. Kossuth Klub, Budapest).
www.magyardiplo.hu

INDIA. Hard News. (Gautam Nagar
110049, Nueva Delhi); 40.000
ejemplares, suplemento mensual en
inglés.

IRÁN. Sedaye Adalat. (60/6 rue Sarve,
Ave Vali Asr, Teherán); 5.000 ejemplares,
suplemento mensual.

IRLANDA. Village. (44 Westland Row,
Dublin 2); suplemento semanal en
inglés.

ITALIA. Il Manifesto. (via Angelo Bagnoni
8, 00153 Rome); 49.000 ejemplares,
suplemento mensual.

LUXEMBURGO. Tageblatt. (44, rue du
Canal, 4050 Esch-sur Alzette); 30.000
ejemplares, suplemento mensual en
alemán.

**GRAN BRETAÑA Y MUNDO
ANGLÓFONO.** Edición mensual, 5.000
ejemplares
https://mondediplo.com.

MUNDO ÁRABE. La versión árabe es
editada por la Sociedad Nouvelles Presses
disponible por suscripción
(www.editionarabediplo.com); publicada
en varios diarios de Medio Oriente, el
Golfo y el Magreb.

NORUEGA. Diplo AS. Distribuido en
Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca
por la Sociedad (Le Monde diplomatique
Norge AS, Postboks 33 Grefsen, 0409
Oslo); Mensual 25.000 ejemplares www.
lmd.no

POLONIA. Livres et presse.
(Rue twarda, 60, Varsovia); 10.000
ejemplares, mensual.

PORTUGAL. Cooperativa Outro Modo,
Rua Febo Moniz, nº 13, R/C, 1150-152
Lisboa; 4.000 ejemplares, mensual.

RUSIA. Asociación Le Monde
diplomatique rusa. Kakhovka 9-1-176,
113303, Moscú; ru.mondediplo.com.

SERBIA. Mensual, l'hebdomadaire
Nedeljnik. 20.000 ejemplares.
www.nedeljnik.rs

SUIZA. El semanario WochenZeitung.
(Hardturmstrasse 66, Postfach 8031,
Zurich); 20.000 ej., suplemento
mensual.

TURQUÍA. Suplemento mensual del
diario Cumhuriyet. Empresa Yeni Gün
Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık Anonim
Şirketi, oficina principal Prof Nurettin
Öktem Sok. No: 2 Şişli, Estambul. 50.000
ejemplares.

URUGUAY. Publicado por el medio
independiente La Diaria
https://lemonde.uy

VENEZUELA. (Cuarto av. Res Unión. Torre
B. Local E y F, Caracas),
5.000 ejemplares.

EN INTERNET
Chino: http://cn.mondediplo.com
Esperanto: http://eo.MondeDiplo.com
Inglés: http://MondeDiplo.com
Japonés: www.diplo.jp

Le Monde diplomatique se difunde
en 22 idiomas en sus 31 ediciones
internacionales
https://www.monde-diplomatique.fr/
diplo/int/

Editorial "Aún Creemos en los Sueños"

La Editorial "Aún Creemos en los Sueños" publica
la Edición chilena de Le Monde Diplomatique
Director: Victor Hugo de la Fuente

San Antonio 434 - local 14 - Santiago-Chile
Tél.: (56) 22 608 35 24
E-mail: edicion.chile@lemondediplomatique.cl
www.lemondediplomatique.cl
www.editorialauncreemos.cl

Librería

LE MONDE diplomatique

Atiende de lunes a viernes de 10:00 a 17:30 horas

San Antonio 434 - Local 14 - Santiago

Consultas al teléfono: 22 608 35 24

Ventas por internet:

www.editorialauncreemos.cl



Calendario de fiestas nacionales 1 al 31 de mayo

3	Polonia	Fiesta Nacional	20	Timor Oriental	Independencia	25	Jordania	Independencia
15	Paraguay	Fiesta Nacional	22	Yemen Fiesta	Nacional	26	Georgia	Independencia
17	Noruega	Fiesta Nacional	24	Eritrea Fiesta	Nacional	28	Azerbaiyán	Fiesta Nacional
20	Camerún	Fiesta Nacional	25	Argentina Fiesta	Nacional	28	Etiopía	Fiesta Nacional

Suscríbase a *Le Monde Diplomatique*
y sus libros mensuales



Suscríbase con pago
automático (PAT) y reciba cada mes

Le Monde Diplomatique
más un libro por \$5.500 mensual

Periódico y libro
en versión digital por \$4.300 mensual con
Pago automático con tarjeta

Teléfono: 22 608 35 24

<https://editorialauncreemos.cl/producto/suscripcion-periodico-libro-mensual/>



VISÍTANOS



**DIARIO
USACH.CL**

**MARQUEMOS
LA DIFERENCIA**

La vergüenza y el hambre

por Benoît Bréville*

Antiguamente, se consideraba una virtud. Antes de obtener su ración, los indigentes tenían que sentir el oprobio de la mendicidad. Se los obligaba a abrirse paso a la fuerza frente a las obras de caridad, a esperar en el frío o bajo el ojo despectivo de quienes pasaban. Así, buscarían salir de su condición.

Nadie defiende ya esta “pedagogía de la vergüenza” (1) que conoció su hora de gloria en el siglo XIX. Los servicios sociales y las organizaciones caritativas pretenden actualmente restaurar la “autonomía”, la “dignidad” de los desposeídos gracias a almacenes sociales y supermercados solidarios que ofrecen una apariencia de libertad cuando proponen elegir entre algunos productos poco apetitosos. Hay aplicaciones incluso que conectan solicitantes y comerciantes a fin de “evitar a los estudiantes o trabajadores pobres la estigmatización y la vergüenza que sienten al ir a centros de ayuda alimentaria” –como ponderan dos investigadores que sueñan con lograr la efectivización de una ayuda “socialmente aceptable” (2)–.

Mientras tanto, la vergüenza sigue invadiendo a quienes recurren al sostén alimentario a tal punto que muchos prefieren renunciar a él. Vergüenza de ser asistido, de no poder alimentar a su propia familia, del qué dirán... En 2022, 7 millones de personas pudieron experimentar esa sensación en Francia. Eran 5,5 millones

en 2018, una cifra que ya se había duplicado en diez años. Imaginada como un dispositivo de emergencia, la ayuda alimentaria se hizo común en los países occidentales bajo el efecto del desempleo, la austeridad, el Covid-19, y ahora la inflación. Cada crisis aporta su cuota de postulantes, sin que haya un descenso al nivel previo una vez pasada la tormenta.

Año tras año, los comentaristas se asombran al descubrir un “nuevo público” de “beneficiarios” –estudiantes precarizados, asalariados con un contrato de duración indeterminada, madres solteras, jubilados, quienes se suman a los habitué–. Cuando diferencian antiguos de nuevos pobres, estos comentaristas recuperan, según la historiadora Axelle Brodier-Dolino (3), una “cantinela recurrente a lo largo de los siglos que sólo termina estigmatizando a unos para compadecer provisoriamente a otros, y oponiendo, con consecuencias políticas nocivas, a individuos que están sociológicamente cercanos, sea un poco más acá o más allá del umbral de la pobreza”. Y al hacerlo, sólo acrecientan la vergüenza de todos aquellos que deben dar el paso.

A falta de ser “socialmente aceptable”, la ayuda alimentaria se ha vuelto económicamente rentable. Les permite a los actores de la gran distribución liberarse de sus productos vencidos por medio de reducciones fiscales; a los productores de carne, reciclar sus cortes menos selectos, piel, grasa, cartílagos, para hacer platos



Daniela Montecinos, de la serie *Alfabetos* (Técnicas mixtas), 2012

low cost destinados a las asociaciones caritativas; a los agricultores, vender frutas y verduras no aptas para los comercios... Totalmente integrada al complejo agroindustrial, la ayuda alimentaria constituye lo que le toca al pobre, aquello que nadie quiere pero que ya muchos logran monetizar. ■

1. Benjamin Sèze, *Quand bien manger devient un luxe. En finir avec la précarité alimentaire*, Editions de l'Atelier, Paris, 2023.
2. *Le Monde*, Paris, 18-9-22
3. Axelle Brodier-Dolino, “Pauvretés durables, pauvretés nouvelles : les conséquences sociales de la crise vues des associations”, nota para el Consejo Nacional de Políticas de Lucha Contra la Pobreza de Francia, abril de 2021.

*Director de *Le Monde diplomatique*.
Traducción: Merlina Massip

Litio por y para Chile

por Libio Pérez*

El anuncio presidencial de una Estrategia Nacional del Litio abre una oportunidad, como pocas veces se da en la historia de un país, de proyectar una línea de desarrollo que augura mayor riqueza para Chile y la posibilidad de distribuirla más equitativamente. El modelo propuesto por el presidente Gabriel Boric coloca al Estado en un protagonismo que para unos garantiza que la explotación del mineral y sus ingresos vayan a parar en un alto porcentaje a las arcas fiscales, mientras para otros –lectura sesgada de por medio– obstaculiza la iniciativa y participación de los capitales privados. Un debate que recién comienza, necesario tal vez, pero que deberá resolverse en el corto plazo para así dar curso a la generación de la institucionalidad necesaria para tener competitividad en los mercados que ya demandan el mineral.

La estrategia propuesta por el gobierno supone no solo la extracción del mineral bruto de los salares, sin además generar

la industria necesaria para agregar valor. Sectores empresariales y de la oposición política intentan desconocer que la iniciativa considera la alianza público-privada, al tiempo que menosprecian aspectos centrales que hacen la diferencia con las explotaciones mineras actuales: resguardo medioambiental e integración de las comunidades y pueblos originarios de la zona.

El mineral, esencial para la fabricación de baterías de almacenamiento de energía que se usa para vehículos eléctricos, y por tanto un factor clave para mitigar los efectos del cambio climático, está en los salares del norte que, junto a los de Argentina y Bolivia, constituyen la mayor reserva mundial del llamado “oro blanco”. Una oportunidad, además, de generar alianzas regionales para competir en los grandes mercados. Chile ya es el segundo productor a nivel mundial y sus yacimientos actualmente son explotados por capitales chilenos, chinos y estadounidenses.

La estrategia propuesta para el litio, sumada a la pronta instalación y producción de Hidrógeno Verde, combustibles verdes, energía eólica y solar, pondrá a Chile en la vanguardia en la producción de energías limpias, transformando radicalmente no solo la matriz energética sino también su modelo de desarrollo. Un aporte de envergadura a la batalla por disminuir las emanaciones de gases que provocan el cambio climático.

El desarrollo de estas industrias generará polos de investigación y nuevos conocimientos, impactando también en la formación educativa y tecnológica, lo que a su vez permitirá transformaciones en el campo social, económico y ecológico del país. Los proyectos de desarrollo de estas energías y la propia producción de litio generarán millares de nuevos empleos. Es del todo previsible que las alianzas público-privadas, con eje en el Estado, producirán mejores condiciones para una distribución más equitativa de la riqueza. Por ello, la instituciona-

lización de estas actividades se hace clave. De eso depende que se produzca un círculo virtuoso que permita que las ganancias vayan a inversiones en infraestructura pública (puertos, caminos, puentes, etc.) y a financiar los derechos sociales que deberían quedar consignados como tales en la nueva Constitución, como la educación y la salud gratuita y de calidad, mejores pensiones, viviendas, sistema de cuidados y otros.

La propuesta de crear una Empresa Nacional del Litio deberá pasar por el Congreso, donde el gobierno no tiene mayorías. Será un momento en que se podrá evaluar el “patriotismo” que enarbolan sectores de la derecha, que se oponen a que el Estado incursione en estas industrias, pero que no tienen problemas que lo hagan Estados de otros países o que simplemente se privatice y quede en las mismas arcas de siempre. ■

*Editor general de la edición chilena de *Le Monde Diplomatique*

Las izquierdas ante la elección al Consejo Constitucional

La disyuntiva del 7 de mayo

por Álvaro Ramis*

Es evidente que las distintas corrientes de izquierda y progresistas chilenas van a concurrir fracturadas a las elecciones al consejo constitucional del próximo 7 de mayo. Este quiebre no sólo opera por la competencia entre las dos listas oficialistas que concurren separadamente en este escenario. La más fuerte y clara ruptura es la que se dará entre quienes voten por alguna de esas dos listas y los que anulen, voten en blanco o se abstengan en esta ocasión.

Parece necesario dar cuenta de esta situación porque las consecuencias políticas de esta diferencia de criterio tendrán efectos importantes, tanto en el resultado de la composición del Consejo Constitucional, como en los procesos futuros, que requieren acumular una capacidad política que pueda avanzar en las metas del período y detener a la ultraderecha que se erige en una seria amenaza.

Sin duda abundan las razones del desencanto y la frustración entre quienes apoyamos el Apruebo el 4 de septiembre de 2022. El acuerdo posterior se observa como espurio, en la línea de los consensos limitativos propios de la transición. Se acusa la falta de legitimidad social y participativa en un acuerdo parlamentario que se interpreta como una “cocina” destinada a predeterminar y condicionar todo el proceso de cambio constitucional. Desde esta perspectiva la crítica a la cita electoral del 7 de mayo es más que mera subjetividad, ya que cuenta con amplias evidencias de las carencias en estos aspectos. Pero más allá de esa indesmentible crítica desde los principios, es necesario desplegar un análisis consecuencialista, que vea un poco más allá y tenga en cuenta la responsabilidad ciudadana ante un proceso que tiene su propia facticidad jurídica. Reconociendo la validez y respetando la opción de quienes no voten por ninguna candidatura, es necesario advertir claramente lo que está en juego en esta ocasión.

Las bases constitucionales

El acuerdo parlamentario de diciembre de 2022, que permite este nuevo proceso de cambio constitucional, ha sido calificado como un suceso imprevisible e improbable. Pocos habrían pensado el 5 de septiembre que se hubiera alcanzado. La profunda derrota del Apruebo, más allá de las condiciones injustas y las manipulaciones que lo explica, parecía darle a la derecha todas las armas para cerrar sin mayor trámite esta discusión. Perfectamente se podría haber desechado continuar el debate por un camino incierto y plagado de las complejidades que ha asumido este nuevo ciclo. Algo quedó pendiente.

A la izquierda le cuesta asumir el excedente de fuerza política que supuso todo lo ocurrido desde octubre de 2019. Este impulso excedentario, que dejó en el aire la pregunta por la viabilidad de la actual Constitución, ha generado una innegable necesidad de arribar a una nueva carta constitucional y no mantener la incertidumbre en una materia clave para el funcionamiento del Estado. Si algún acuerdo transversal produjo todo lo vivido es que el actual texto constitucional ya no permite proyectar al país. Se necesita algo más que una mera reforma constitucional.

En ese marco el acuerdo de diciembre es el fruto de una necesidad impostergable. Chile necesita, si desea resolver objetivos de mayor complejidad, un marco mínimo de valores y normas compartidas dentro de una sociedad pluralista, y que capacite al Estado a tomar decisiones frente a problemas comunes. Hoy el país vive un bloqueo fundamental y constante en casi todas las materias que se someten a escrutinio público. En ese contexto, las bases constitucionales a las que se arribó en diciembre poseen un valor innegable ya que en él todas las fuerzas políticas cedieron en cuestiones muy importantes para obtener algo que consideraron especialmente valioso.

Si nos planteáramos la hipótesis de traducir lo más directamente posible las bases constitucionales a un texto armónico y funcional, sin duda estaríamos ante una Constitución superlativamente mejor que la actual. Bastaría con llevar ese acuerdo a la forma de un cuerpo legal capaz de operar, para que el fruto de todo lo demandado desde varias décadas hasta la fecha pueda tener una respuesta mínimamente apropiada. Por supuesto, no tendría la ambición y perspectiva estratégica del texto que se propuso en septiembre de 2022, pero sería una Constitución que al menos garantizaría de manera innegable los siguientes principios:

- El Estado social y democrático de derecho, esto es, uno que garantice -en los hechos- derechos sociales y laborales. Ello implica necesariamente que lo que se ha entendido en Chile por “subsidiariedad” desde 1980 es

incompatible con lo anterior, y por lo tanto la práctica sociolegal que genera esa interpretación debería ser superada.

- Una “constitución habilitante”, por medio de un nuevo quórum para leyes especiales -orgánicas constitucionales y de quórum calificado- y para la aprobación de los nombramientos del Presidente. Se trataría de un quórum más bajo, lo que abre las puertas al Poder Legislativo para que progresivamente, mediante el flujo del propio proceso político, vaya zanjando por mayoría temas pendientes que existen en la actualidad y que hasta ahora están bloqueados constitucionalmente.
- Un proceso de descentralización, que supere un sistema político agotado que descansa en la figura del Presidente, y genera un Estado unitario centralizado y centralizador. Las bases dan pie a la construcción de un Estado eficaz y oportuno, moderno, mejor regulador, garante en lo social, desde un reequilibrio entre las facultades del Congreso y el Presidente.
- El reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos originarios, lo que permite dar respuesta en coherencia al Convenio 169 de la OIT y a otras convenciones y tratados de Naciones Unidas.
- El marco consensuado en las bases permite llegar a constitucionalizar la paridad en los órganos colegiados, los derechos reproductivos, el derecho al cuidado, el reconocimiento al trabajo doméstico y perfectamente puede dar consistencia a un marco de protección ambiental más ambicioso que el actual.
- Una reconsideración del sector privado como proveedor de bienes públicos y sociales valiosos, desde una manera distinta a como lo hace la Constitución vigente, que nos aboca directamente a la mera competencia de mercado. En ese ámbito la izquierda reconoció en la negociación que los privados pueden ser proveedores de servicios públicos, pero bajo responsabilidades más claras y recíprocas ante el Estado, y bajo una lógica pluralista. Desde el criterio que entregan las bases constitucionales se podría comprender lo público como un espacio común, creado por la interacción humana, abierto a múltiples perspectivas y, sujeto a constantes disputas respecto a su forma. Se podría reclamar una apertura equitativa a múltiples perspectivas y condiciones de entrada, más allá de la mera interacción de mercado. Lo que puede abrir la puerta al reconocimiento de la necesidad de asegurar la pluralidad efectiva de los medios de comunicación, la pluralidad de los proyectos educativos, la pluralidad de los campos de reconocimiento de tradiciones cultu-

rales, asociativas y religiosas subalternas, etc. La neutralidad del Estado se podría interpretar desde un rol más activo que la mera regulación del mercado, para pasar a ser un promotor de los aportes de la sociedad civil al interés público.

La barrera de los 2/5

¿De qué depende que lo propuesto en las bases pueda llegar a consolidarse en un nuevo texto coherente y sistemático? El 6 de junio la “comisión experta” entregará al Consejo Constitucional que se elegirá el 7 de mayo un borrador. El consejo podrá hacer enmiendas (sustitutivas, aditivas, supresivas) e incorporar nuevas normas, hasta llegar al pleno donde se requiere de un quórum de aprobación de 3/5, es decir de un 60% del consejo, para arribar al texto que deberá ser ratificado en plebiscito de salida el 17 de diciembre de 2023.

El riesgo, bajo este modelo, es el porcentaje de votación que pueden sacar las fuerzas políticas que no desean llegar a una nueva Constitución, es decir el Partido Republicano y el Partido de la Gente, que se opusieron frontalmente a este proceso constituyente. Si juntas logran 2/5 de representantes más uno en el Consejo, lo que suma 21 convencionales, podrían bloquear el cambio constitucional, e impedir que se respeten de forma sustantiva las bases ya zanjadas. Otro factor para considerar es si ambos partidos logran una votación superior a Chile Vamos, lo que pondría mucha más tensión en el proceso y eventualmente llevarlo a un nuevo rechazo en el plebiscito de diciembre. Y por otra parte si las dos listas “oficialistas” no logran los 2/5 para actuar de contrapeso en este proceso.

El escenario expuesto abre múltiples incertidumbres, donde es perfectamente posible que se llegue a mantener el *status quo* por la vía electoral. Si la ultraderecha (republicanos) junto a la derecha populista (PdG) obtienen un poder de veto de 2/5 pueden torcer el proceso hacia un nuevo maximalismo refundacional, pero de corte conservador y neoliberal. Lo que evidentemente sería la más cruel de las paradojas, luego de los años de lucha y demanda por un marco constitucional postpinochetista.

La responsabilidad política no es una exigencia que sólo ataña a los gobernantes o administradores del Estado. La responsabilidad política también consiste en reconocer y afrontar las consecuencias de las acciones y omisiones en que incurrimos desde la ciudadanía, de lo hecho, de lo no hecho y de lo hecho mal. Que cada cual evalúe y tome sus decisiones de acuerdo con este criterio, asuma seriamente sus efectos y pondere claramente sus secuelas. ■

*Rector Universidad Academia de Humanismo Cristiano

Chile 2019-2022. De la insurrección a la Constituyente. Reinventar la democracia

La memoria del futuro

por Pierre Dardot*

De todos los libros que escribí, éste es sin duda el más personal. En primer lugar porque es el único libro que escribí solo: todos los demás, fueron junto a Christian Laval, desde *La nouvelle raison du monde* (2009) hasta *Dominer* (2020). Pero lo es también porque escribirlo ha despertado en mí un sentido que nunca había ejercitado con tanta intensidad, el de la *empatía política a distancia*. Esta insólita expresión exige una explicación.

Para empezar, mi generación (que en 1973 tenía unos 20 años) quedó marcada de por vida por Chile, a la vez animada por el impulso de la Unidad Popular y traumatizada por el golpe de Estado de Pinochet. Mucho más tarde, a finales de septiembre de 2016, fui por primera vez a Chile, invitado a las “Jornadas Transdisciplinarias de Estudios sobre Gubernamentalidad” en la Facultad de Ciencias Sociales de Santiago. Esta invitación se realizó después de que hubieran recibido el primero de los dos libros antes mencionados, dedicado íntegramente al neoliberalismo. Curiosamente, se mencionaba poco a Chile, que sin embargo fue la primera contrarrevolución neoliberal; porque el enfoque privilegiado era el de la gubernamentalidad tal como Foucault la había elaborado en *Naissance de la biopolitique*: una forma de dirigir a las personas mediante incentivos en lugar de la coerción directa. Esta lectura, sin duda, apropiada para el Chile posterior a los 90, nos impidió hacer plena justicia a la singularidad, premura y brutalidad de la experimentación del neoliberalismo en ese país.

El estallido de octubre de 2019 cambió todo, por su capacidad de rememorar como testigo directo. Cuando llegué, a principios de noviembre, pude participar en varias marchas, entre ellas la del 8 de noviembre en Santiago, que me impresionó muchísimo. El coloquio al que debía asistir el 9 de noviembre se canceló debido a la lesión que dejó ciego a Gustavo Gatica(1). El 13 de noviembre, fui invitado a una mesa redonda sobre la nueva Constitución en la Universidad de Los Lagos, en Osorno. El 15 de noviembre, asistí a un curso de derecho constitucional, dictado en la plaza de dicha ciudad por profesores de la misma universidad. Por su

diversidad, esta experiencia provocó una profunda transformación interior. Algunas páginas de *Dominar*(2), así como el primer capítulo del libro colectivo *Le Choix de la guerre civile*(3), llevan la huella de este cambio. Lo que quedó grabado para siempre en mi memoria, fue la increíble energía colectiva y la alegría de estar juntos que sentían los manifestantes, una alegría que se hacía palpable con las orquestas que tocaban en medio de las marchas, así como por la multitud de banderas mapuche y pancartas feministas, sin ningún emblema de partido.

Cuando regresé a París, no podía dejar de pensar en lo que había vivido tan intensamente. Me esforcé por reunir documentos, artículos de prensa e información. Seguí manteniendo contacto con amigos chilenos, y me alegré con ellos del resultado del plebiscito de entrada, el 25 de octubre de 2020. A partir de julio de 2021, gracias a CIPER Chile, pude seguir la evolución de los trabajos de la Asamblea Constituyente. A pesar de la distancia, o quizás por ella, me he esforzado por dar toda su importancia al punto de vista de los actores de las movilizaciones sociales y al de los delegados de la Asamblea Constituyente, que fueron ellos mismos, en gran parte, provenientes de estas movilizaciones. Quiero precisar hasta qué punto este libro es un libro de intervención política que no pretende ser imparcial. De un extremo a otro, comienza por los movimientos sociales y, si evalúa las posiciones de los políticos, lo hace siempre teniendo en cuenta su posición frente a estos movimientos.

Esto ha tenido un gran impacto en la estructura del libro. En su centro hay un capítulo entero dedicado a los tres movimientos sociales: el movimiento de los mapuches, el movimiento feminista y el movimiento estudiantil. Es-

tos tres movimientos se unieron a partir del 18 de octubre, para alimentar el levantamiento popular y darle un nuevo impulso. Responden a temporalidades muy diferentes, y que sin embargo están estrechamente relacionadas entre sí. El movimiento de los mapuches nos lleva a los fundamentos del Estado-nación chileno producto de la violencia colonial (1860-1883), fundamentos que permanecieron en pie después de 1990; el movimiento feminista destaca la “orientación de transversalidad” adoptada por este movimiento, así como el carácter transnacional debido al impulso dado entre 2015 y 2016 por el movimiento feminista argentino: el título del libro es una forma de rendirles homenaje; el de los estudiantes abarca casi una década (2001-2011), durante la cual su lucha superó rápidamente su carácter estudiantil, para plantear la cuestión transversal de un sistema educativo que responda a las demandas de la sociedad.

Antes del capítulo 2, el primer capítulo pone de relieve el bloqueo político que ha hecho que se perpetúe el sistema neoliberal instalado por la dictadura: el ‘concertacionismo’ definido no como una coalición de partidos DC-PPD, PS (la Concertación), sino como la voluntad de los políticos profesionales de buscar el consenso a toda costa mediante acuerdos entre partidos para impedir cualquier intervención de los ciudadanos. Se trata de la misma disposición que regía el Acuerdo de 15 de noviembre de 2019. Sigue siendo el mismo que se aplicó en los pactos sórdidos entre partidos para negociar puestos en el Consejo Constitucional. El estallido fue en gran medida una respuesta a las promesas incumplidas del concertacionismo e hizo estallar el consenso entre los partidos: “¡No son 30 pesos, son 30 años!”.

Luego, tres capítulos intentan describir la realidad del llamado “proceso constituyente” en sus distintas etapas. Es necesario aclarar aquí el uso de esta expresión. La declaración de los partidos de la oposición del 12 de noviembre habla de un “proceso constituyente abierto por la vía de los hechos”, es decir, por las movilizaciones sociales. Se podría usar la misma expresión para la secuencia abierta por el plebiscito de entrada del 25 de octubre de 2020 y cerrada por el plebiscito de salida del 4 de septiembre de 2022. Pero debemos hablar de “momento constituyente” para designar el carácter singular y específico de la fase de redacción de la Constitución por los delegados de la Convención (4



de julio de 2021 - 4 de julio de 2022). El libro intenta reflejar este notable trabajo colectivo, realizado a pesar de las draconianas limitaciones de tiempo que impuso el acuerdo del 15 de noviembre. Da toda su importancia a la práctica irremplazable de la deliberación colectiva. Por último, retoma las líneas fundamentales de una propuesta constitucional que pretende modificar las relaciones de fuerza en la sociedad: el reconocimiento de la plurinacionalidad y de los derechos colectivos de los pueblos originarios frente a la tutela del Estado nación, la nueva fundación del Estado sobre los derechos, especialmente sociales, contra el dogma de la soberanía del Estado, el impulso magnífico del feminismo de la “igualdad sustancial” y el constitucionalismo ecológico que declara que el agua es un bien común natural e inapropiable.

Debo concluir expresando hasta qué punto estoy en deuda con las ciudadanas y los ciudadanos chilenos que fueron actores del “Chile despertó” de Octubre y que, con sus acciones, abrieron el camino a reinventar la democracia frente al monopolio de los políticos profesionales. ■

1. Según el Colegio de Médicos de Chile, el 9 de noviembre de 2019 se alcanzó un “récord mundial”: 220 personas sufren graves heridas oculares, causadas por disparos policiales de perdigones de plomo. El 21 de noviembre, Amnistía Internacional registró 2300 heridos, 1400 de ellos por armas de fuego.

2. Pierre Dardot Christian Laval, *Dominar*, Gedisa, 2021, p. 693-694.

3. Pierre Dardot, Haud Guéguen, Christian Laval, Pierre Sauvêtre, *Le Choix de la guerre civile*, Lux, 2021, p. 27 à 53 (en fase de traducción en las editoriales Lom, Traficantes de sueños y Tinta limón).

*Filósofo e investigador de la Universidad París-Ouest-Nanterre-La-Défense, Francia. Autor del libro *La memoria del futuro Chile 2019-2022*, editorial Gedisa.

Traducción María Reyes Razeto

Sociología de la masacre, a 50 años del golpe en Chile

La producción social de la violencia

por Manuel Guerrero Antequera*

El modo en que se expresa la violencia sobre civiles en contextos de conflicto agudo tiene amplia variedad. Los reportes descriptivos que realizan las Comisiones de Verdad a partir de los testimonios recogidos así lo evidencian. En el caso de Chile, el *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de 1991*, y el *Informe sobre la Calificación de Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos y de la Violencia Política*, de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación de 1996, entregaron en su conjunto el registro de 3.197 casos de víctimas calificadas por el Estado de Chile como muertos (2.095) y desaparecidos (1.102) en el periodo 11 de septiembre de 1973 al 10 de marzo de 1990.

Las formas de implementación de la violencia homicida variaron desde la muerte por heridas de balas que se disparaban en las calles en forma indiscriminada durante los toques de queda durante, por ejemplo, los primeros cuatro meses de la dictadura militar en los que se concentran más de la mitad de todos los muertos de los 17 años de dictadura; ejecuciones por Consejos de Guerra; muertes por tortura; uso de químicos; prendida de fuego a personas vivas en la vía pública y degollamientos.

A su vez, el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura publicado en febrero de 2005, calificó a 27.255 personas como víctimas de un total de 33.221 detenciones ocurridas durante el mismo periodo que abordaron los otros informes. De las víctimas, 27.153 son mayores de 18 años y 102 menores de edad al momento de su detención, prisión política y tortura. La mayoría de las personas consideradas en estos informes cabe dentro del concepto de población civil, incluyendo a quienes -que constituyen un número reducido de los casos registrados por las respectivas comisiones- participaron en enfrentamientos, pues al momento de su ejecución estaban desarmados o fuera de combate. Para el caso chileno los informes demuestran que lo que hubo no fue guerra, sino masacre.

Recorrer las formas que adoptó la violencia contra población civil que no estaba participando en combates convencionales al momento en que les fue infringida -la mayor parte ocurrió cuando las personas estaban detenidas o se habían entregado voluntariamente- resulta apabullante, y exponerse a los relatos de las personas sobrevivientes, aterrador. La atrocidad, la violencia excesiva, la crueldad y la desnuda brutalidad son expresi-

vas de la barbarie característica al uso de la violencia en los terrorismos de Estado, genocidio y exterminio. Son variadas las teorías que han intentado explicar las causas de estos usos aniquiladores de la violencia que en buena parte consiste en la victimización de los no combatientes directos. Con todo, es posible observar que para que la violencia extrema por parte de los agentes del Estado haya podido hacerse efectiva, se utilizaron técnicas de desconexión moral hacia las víctimas, que implicaron procesos de expulsión de la comunidad moral de iguales. Los mecanismos de deshumanización del otro se hicieron habituales lo que en parte explica la magnitud e intensidad de uso de distintas formas de violencia que, en otros contextos, como el de paz -de periodos de fuerte regulación que llevan a que los conflictos no estallen en el uso de la violencia física intencionada y aniquilatoria sino que se resuelvan de otros modos-, resultarían difíciles de imaginar.

Pero si bien la tesis de deshumanización del otro, de la alteridad negativa, es válida, al revisar los Informes Rettig y Valech llama la atención que una parte importante de los usos de la violencia tuvieron un carácter íntimo, es decir, no deshumanizado, sino por el contrario: quienes desde la población se valieron de la violencia en forma indirecta, por ejemplo mediante el proceso de delación y denuncias, por lo general conocían a sus víctimas, y es porque las conocían que convirtieron su deseo de generar daño -antes reprimido- en una posibilidad que en el nuevo contexto que ofreció la situación de terrorismo de Estado ahora hizo plausible. La violencia de tipo fratricida no es impersonal sino íntima. De ahí que para quienes la vivieron y para los observadores resulta aún más aterradora.

Violencias bárbaras

Si consideramos con Norbert Elias que los procesos de racionalización que llevan a la constitución y evolución de los estados modernos implican una tendencia a lo que Max Weber llamaba el monopolio legítimo de la coacción física, tenemos que considerar que los contextos en que ocurren las violencias antes enumeradas, y que normalmente calificamos de bárbaras, implican un colapso de los controles y autocontroles sociales del periodo "normal", los que ya no operan del mismo modo, por lo que cometer actos antes considerados atroces pasa a ser no solo posible, sino incluso premiado para ascender en jerarquía o ganar estatus en el nuevo contexto marcado por la violencia.

"Sin Dios ni ley" es un ambiente que se puede describir como anómico, del que puede aflorar una cultura del embrutecimiento, que gatilla una espiral de venganzas y violencias grupales de distinto tipo. Exponerse de modo constante a la violencia en un marco de ausencia de controles sociales puede generar una naturalización de la misma; cambiando el umbral de lo tolerable; declinando el coste de la actividad violenta, pues al no correr los mismos castigos de antes lo aceptable se expande; permitiendo "hacer carrera" a quienes tienen mayor inclinación para cometer actos violentos; despreciando las competencias sociales de solución pacífica de conflictos y aprendiendo otras modalidades de acción social, basadas en la violencia física. En definitiva, los mecanismos psicosociales de auto sanción y autocontención de otros periodos dejan de correr, creando la violencia, en su lugar, su orden social, con premios y castigos propios al nuevo periodo que se abre.

De forma inquietante, más allá de las figuras del "perpetrador" y las "víctimas directas", los civiles no combatientes no sólo aparecen en el lugar de víctimas de la violencia que otros perpetraron, sino que muchos de ellos se hicieron parte de ella. La dinámica de la colaboración de los civiles no combatientes operó en forma extendida durante muchos años de la dictadura desde esta faz íntima que fue aprovechada por actores como la DINA o la CNI, quienes, para ejercer su control, requirieron de información cualificada para acertar en sus blancos, individuales o colectivos, y así poder pasar de la violencia indiscriminada y masiva de los primeros meses del Golpe a una selectiva más característica de los años siguientes.

La fuerza y velocidad transformadora de la dinámica de la violencia es una de las causas que desconcierta no sólo a observadores sino a los propios protagonistas de los conflictos. El contexto sociopolítico y de larga duración previo al Golpe sin duda puede entregar elementos de análisis para la comprensión de las

actuaciones de los distintos individuos. Pero se debe considerar e incorporar los efectos de la violencia una vez ocurrido el Golpe en el análisis, aspecto poco estudiado para el caso chileno. La mayoría de la población en situaciones de conflicto agudo atravesado por la violencia tiene una conducta compleja, ambigua y cambiante, distinta a la de una minoría fuerte que se mantiene en el compromiso a toda prueba.

Polarización endógena

El terreno político del conflicto agudizado por el uso de la violencia como recurso cambia y genera sus propios efectos de realidad. Por eso se le utiliza por parte de actores estratégicos, no solo para eliminar al otro, sino para generar control y adhesión. A este respecto, René Girard afirma que por el uso de la violencia en un contexto de polarización endógena -polarización no previa sino producida una vez se ha empleado la violencia-, al agudizarse la rivalidad entre los actores, éstos pueden incluso tender a olvidar el origen del conflicto y las causas de la rivalidad inicial, generándose una suerte de purificación de la disputa que expulsa las razones externas a su propio fluir, generando una fascinación mutua entre los rivales sujetos a la producción de la violencia, que se ponen en juego dentro del nuevo contexto creado por sus propias acciones. La violencia, en este sentido, tiene un carácter fundacional.

Mirar la dinámica de la violencia, una vez esta se desata, nos lleva a poner atención no solo al papel que cumplieron "perpetradores" y "víctimas", sino al rol que nos cupo a la población en general en la producción conjunta de ella. A 50 años del Golpe este es un aspecto a considerar en los análisis, pues la pregunta que se abre es respecto del rol que estamos dispuestos a jugar hoy ante nuevos escenarios cruzados por la violencia: ¿seremos testigos pasivos de ella o nos ple-garemos a su producción o, como fue el caso del Comité Pro Paz y la Vicaría de la Solidaridad, tomaremos un rol activo para registrarla, modularla, detenerla y acaso evitarla?

La pregunta es reflexiva: en su respuesta nos reflejamos a nosotros mismos y lo que queremos llegar a ser. Es el papel de la memoria social del Golpe. Se trata de ponerlo en común, estudiarlo, analizarlo y pensarlo para intervenir en nuestro presente de modo que el Nunca Más no sea solo una consigna, sino un modo de ser de la sociedad toda de la que cada uno de nosotros y nosotras es también diariamente responsable. ■

*Sociólogo y eticista, autor del libro "Sociología de la Masacre. La producción social de la violencia", publicado por el sello Paidós (Planeta).

La nueva controversia del “mercado” de la Educación Superior.

¿Existen universidades privadas que sean públicas?

por Marisol Durán Santis*

Los defensores de la “educación de mercado” están muy activos de cara al debate del proceso constitucional. Recientemente se publicó en medios de comunicación un texto que señala que “identificar solo a las universidades estatales con el concepto de ‘públicas’ no tiene sentido” y se trataría de “una diferenciación impropia”. Se asevera que es una “añoranza del pasado” y “una insistencia equivocada”, pues la calidad de pública no puede reducirse a “la naturaleza jurídica de las instituciones”.

El fondo de este punto de vista es explicado en el mismo texto que señala: “Quizás el aspecto verdaderamente más anómalo del sistema universitario nacional sea el que solo algunas universidades tengan acceso a fondos basales y semi basales”. Es decir, pareciera que no es suficiente “el actual modo de financiamiento de la educación superior y la estructura de la matrícula”.

En ese contexto, resulta de un particular interés el recién publicado libro “La Universidad pública amenazada. 40 años en el mercado chileno de la Educación Superior” (Editorial Universitaria), en el que participaron Ennio Vivaldi Véjar, ex Rector de la Universidad de Chile; María Olivia Mönckeberg Pardo, Premio Nacional de Periodismo 2009;

Alejandra Contreras Altmann, directora ejecutiva del Consorcio de Universidades del Estado (CUECh); Roberto Flores Flores, ex presidente del Centro de Estudiantes de la Universidad de Chile y ex Jefe de Estudios del CUECh; y Yerko Montenegro Ortiz, ex senador universitario.

En la ceremonia de presentación, Vivaldi afirmó que “si tuviéramos que discutir en qué sección de una librería colocamos este libro, sugeriría que lo pusiéramos en la sección ‘semiología’, porque este libro de lo que se trata es de los significados, y lo que quiere mostrar es cómo se intentó tergiversar, deformar, rebajar el significado de lo que es una universidad y cómo desde las universidades públicas fuimos capaces de defender y ganar el significado de las universidades”.

En sus palabras, el ex Rector abordó la discusión actual en torno al concepto de lo público. “¿Se les ocurre a ustedes algún colegio privado del sector oriente que quiera ser llamado liceo público?, ¿Alguna clínica privada que le gustaría ser considerada un hospital público?, ¿Una Isapre que tuviera como su gran eslogan propagandístico que lo van a tratar como Fonasa?”. Así, cuestionó la pretensión de “universidades privadas que quieren ser llamadas públicas”. En esta línea, sen-

tenció que “si se ambigua, se diluye y desaparece el concepto de lo público y todos somos públicos, le estamos dando tardíamente la razón a los Chicago Boys: nadie es público”.

En la oportunidad, el ex senador Ignacio Walker destacó el rol de la educación pública en la construcción de una mejor sociedad. Citó a la autora Sol Serrano, quien en su libro “Ensayo sobre la noción de Estado en el siglo 19 y 20” destina un capítulo a la Educación Pública en el siglo 19 en la conformación de la nación. Indicó también que es necesario hacer “una reflexión, ojalá desapasionada, que nos permita construir un sistema de educación superior mixto, público y privado, pero donde siempre se reconozca la especificidad de lo público-estatal, el cual no puede ser diluido en un concepto de lo público, que tiene muchas acepciones, pero no al punto de desconocer esa especificidad y esa historia en el país”.

En la obra se expone que las transformaciones al modelo educacional chileno, impulsadas durante la dictadura por los tecnócratas de Chicago y los ideólogos conservadores, quedaron en gran medida aseguradas por los múltiples cerrojos definidos en la Constitución de 1980, que estableció el rol subsidiario del Estado. En este contexto, sostiene que el mercado en la educación permeó en tal medi-

da que hoy incluso el concepto de lo público pareciera estar en disputa. “No son pocas las autoridades de universidades privadas que han insistido, especialmente a propósito de la discusión constituyente, en que sus instituciones debieran ser también reconocidas bajo este término, lo que desconoce conceptos jurídicos básicos y los consensos internacionales que identifican como pública solo a instituciones controladas o gestionadas directamente por una autoridad o agencia estatal, o cuyo órgano superior esté conformado en su mayoría por miembros designados por la autoridad o elegidos públicamente”, sostiene.

En la presentación del libro, señala que el trabajo “busca resumir uno de los experimentos más extremos jamás operados en el ámbito de la educación. En consecuencia, es también uno de los experimentos más extremos jamás operados en el ámbito de la política, dado el rol que la educación juega en inculcar el sentido de ciudadanía y en promover la aceptación del modelo de sociedad existente como aquello que resulta esperable y normal”.

En efecto, ello es uno de los aspectos clave del nuevo debate constitucional en curso. ■

*Rectora de la Universidad Tecnológica Metropolitana

Una oportunidad en el proceso constitucional

DOSSIER SINDICAL

Fortalecer el movimiento sindical

por Claudio Francisco Sagardías Yáñez*

En estos tiempos, el movimiento sindical chileno se encuentra frente a una encrucijada histórica; o avanza en la senda de los cambios sociales y de derechos fundamentales del trabajo, esto de la mano de una nueva Constitución, de una legislación laboral moderna y de un diálogo tripartito efectivo, o permanece atrapado en las redes del Plan de José Piñera, que por más de 40 años ha restringido notablemente las posibilidades de mejorar sustantivamente las condiciones económicas y laborales de las y los trabajadores de nuestro país.

Bajo estas circunstancias, vale recordar que distintas fuentes investigativas (Dirección del Trabajo y Fundación Sol, entre otros) coinciden en promediar la existencia de 12.000 organizaciones sindicales con un porcentaje de sindicalización del 21%. Por otra parte, en directa relación con el porcentaje de sindicalización, Chile se encontraría, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) entre los países de América Latina en no alcanzar siquiera el 25% de cobertura de negociación colectiva respecto de la fuerza de trabajo activa.

Lo anterior, demuestra los efectos de un sistema pensado para atomizar la presencia sindical, limitar su influencia social y restringir su capacidad negociadora, por ende, despojarlo de peso político y contractual. En esta lógica, el pensamiento conservador de una

parte de la política y de una parte del empresariado chileno considera que los sindicatos son un factor irascible y beligerante en las relaciones laborales, prejuiciado ideológicamente, un mal innecesario, por tanto, prescindible.

Tesis anacrónica

En cambio, la experiencias comparadas en países europeos principalmente Italia, Francia, Alemania, Inglaterra y en América Latina Brasil, Uruguay y Argentina, desmienten categóricamente esta tesis anacrónica y demuestran que la existencia y desarrollo de un movimiento sindical fuerte y representativo, con negociación colectiva de gran cobertura y una praxis permanente de diálogo bilateral y tripartito, es parte de las soluciones en periodos de crisis (véase la labor cumplida por los sindicatos de base durante la pandemia, ya sea en la protección de los y las trabajadoras como también en la organización del trabajo para cumplir ante la comunidad) y son parte fundamental en periodos de crecimiento económico y social.

Entonces, una sociedad democrática que aspira al desarrollo económico debe reconocer, promover y restituir al movimiento sindical su labor política de representación y su capacidad insustituible de movilización, negociación y acuerdos; ¿qué otra forma tenemos como país para conseguir mejores remuneraciones, igualdad salarial para hombres y mujeres, seguridad social,

no discriminación ni violencia en los lugares de trabajo, etc. ninguna otra que la conciliación de intereses, aunque distintos y a veces muy controversiales pero que, sin embargo, solo las partes involucradas pueden resolver y legitimar al interior de sus respectivas organizaciones.

Desde la Confederación Nacional de Trabajadores de Comercio, Call-Center, Casinos de Juegos y Afines (CONATRA-COPS) con más de 70 mil afiliados, integrante de la Organización Sindical Internacional UNI-AMÉRICAS y de la Agrupación Unidad Por Trabajo Digno (UTD) estamos fuertemente comprometidos con esta visión y vocación negociadora y de diálogo tripartito.

Proceso constitucional

Por ello, estuvimos desde el inicio apoyando la reducción de la jornada laboral semanal a 40 horas, en la ratificación por parte de nuestro país del Convenio 190 de la OIT y, en la actualidad, estamos impulsando el cierre del comercio a las 19 horas, creando una agenda de trabajo con la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y con la Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT) con el fin de tratar materias de interés común que mejoren las condiciones de trabajo, como por ejemplo la conciliación de la vida laboral y familiar, aumentar las edades de hijos e hijas con derecho a sala cuna, y que esta no requiera de un número

determinado de contratación de mujeres para otorgar el derecho, también sigue siendo fundamental la seguridad en traslados al lugar de trabajo, entre otros aspectos.

De igual modo, un paso fundamental para fortalecer el movimiento sindical y mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las y los trabajadores y de la sociedad en su conjunto, es incidir en el nuevo proceso constitucional para incorporar derechos fundamentales como el trabajo digno y decente, el derecho a huelga durante la negociación colectiva y frente al incumplimiento de los instrumentos colectivos que emanen de éstos, el derecho a negociación colectiva ramal, derecho a la seguridad social, reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados, conciliación de la vida familiar y laboral, equidad salarial, creación de un ente autónomo de fiscalización y el derecho de los y las trabajadoras de participar en los directorios de las empresas.

En virtud de lo anterior, como CONATRA-COPS aspiramos y luchamos por un Estado social y democrático de derecho y declaramos que Chile merece trabajo digno y decente, con perspectiva de género. ■

*Presidente Sindicato Nacional CENCO-SUD. Presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Comercio y Servicios CONATRA-COPS.

A 50 años del golpe en Chile

Cuál es el rol de los sindicatos

por Eric Campos Bonta*

A 50 años del golpe militar en Chile, es cada vez menos común hablar de los sindicatos como un espacio de participación fundamental de la sociedad. El surgimiento de otras actorías y la renuncia a la contradicción del capital-trabajo como elemento fundamental de la formación de las organizaciones sociales, explica un poco aquella impresión. Además de que los partidos obreros clásicos, que en Chile se formaron a partir de una estrategia del sindicalismo, han relegado a un segundo y tercer orden su influencia y trabajo político en las organizaciones de trabajadores.

Pero no solo eso cambió. Desde 1973 -incluso desde mucho antes- lo que se viene transformando con una dinámica nunca vista en la historia, es el capital: sus modos de producción, los flujos, su propiedad. Sin lugar a dudas, ello ha impactado en la configuración global de la sociedad y específicamente en las organizaciones obreras o sindicales.

Así, si pensamos en la necesaria revitalización del movimiento sindical y su rol articulador del movimiento social, frente a la crisis de adherencia democrática que enfrentamos y que da lugar al surgimiento de discursos neofascistas entre los trabajadores, es urgente plantearnos cuál es el valor del trabajo en la sociedad actual, cuál es su sentido y qué rol podemos jugar los sindicatos en resolver la crisis democrática que enfrentamos.

En ese mismo sentido, debemos indagar en las propuestas concretas para un Chile que ha transitado, de manera pendular, entre la movilización social callejera - que exigió más derechos y seguridad social - a la necesidad de tener más Carabineros en las calles ante una “crisis de seguridad”. Entonces, para hablar sobre la vigencia del sindicalismo, es fundamental establecer cómo llegamos a este escenario de fragmentación, despolitización e irrelevancia; quiénes fueron los artífices de este escenario, qué rol tenemos hoy y cuáles son nuestras propuestas.

Sin duda, la contradicción capital-trabajo y su relación dialéctica, han sido el motor del desarrollo humano. El trabajo, como espacio y tiempo de desarrollo de la esencia del ser humano, resulta fundamental para la comprensión filosófica y sus sistemas ideológicos.

Los cambios en el “sentido del trabajo” y su importancia en la sociedad, responden a los cambios que ha experimentado el capital, cuya crisis de su estado keynesiano detonó en el surgimiento del neoliberalismo y su sistema ideológico conocido como sociedad del conocimiento - versión cultural e ideológica del neoliberalismo -. De esta forma, entendemos que el lugar secundario en el que ha sido dejado el trabajo, está directamente vinculado con la implementación del proyecto neoliberal.

Es insoslayable la construcción teórica y práctica que existe en la relación del trabajo y las relaciones de producción que se desarrollan en la sociedad del conocimiento y, especialmente, en su etapa de producción posfordista. Es importante para el sindicalismo, pero también para la sociedad, descubrir en qué forma los cambios en la base productiva han influido en la concepción del trabajo como constructo intelectual y práctico de la sociedad. ¿Cuál es la centralidad que sigue teniendo en la construcción histórica? ¿Cómo afecta la subjetividad de la “Clase Trabajadora” o las y los trabajadores?

Lógicas de dominación

En nuestra reflexión es central una definición genérica sobre el trabajo, pero fundante como lo planteado por Engels y Marx, en cuanto a que el trabajo febril era alienante, entre otras cosas, porque quita toda actividad intelectual al obrero y le absorbe toda su atención. Pero Engels no decía como Marx, que el trabajo humano podía ser una vía de autorrealización. Posteriormente, la preocupación para Engels serán aspectos cognitivos e instrumentales. Así, ha existido una tensión permanente respecto de la relevancia fundante en el concepto trabajo como una actividad esencial para definir lo “humano”.

¿Es el trabajo hoy concebido por el sentido común tanto como mediador con la naturaleza, como un medio para la transformación de ella? Podemos decir que el sistema neoliberal, más que una forma sofisticada de producción material, es un sistema de producción cultural capaz de establecer un sistema de valores que condicionan o al menos influye en la subjetividad de los trabajadores y las trabajadoras.

La crítica fundamental a la sociedad del conocimiento consiste en que la vida de los cuerpos está subsumida a lógicas de dominación y a lógicas de dominación total sobre ella, donde la incorporación de las nuevas tecnologías, las mutaciones, las reconfiguraciones del orden del trabajo, de la recomposición orgánica, el capital, la reconfiguración institucional, no hacen más que intensificar una forma de dominación total sobre la vida.

Impactos de los 50 años

Lo primero que debemos preguntarnos es qué intentaron, desde la perspectiva estratégica, los sectores cívico militares que perpetraron el Golpe Militar del 11 de septiembre. Lo evidente es que intentaron derrotar el proyecto político de la Unidad Popular, que ponía al centro de la sociedad al trabajo y a la Clase Trabajadora. Esto último es clave.

De manera muy simbólica, el bando militar declaró ilegal a la Central Única de Trabajadores. Pero antes que cualquier reforma electoral, impulsó el Plan Laboral -elaborado por el creador de las AFPs José Piñera-, en un intento estratégico para derrotar a la Clase Trabajadora como actor fundamental en la construcción del sistema político, económico y social de nuestro país.

La conmemoración de los 50 años del golpe cívico militar nos otorga la oportunidad de recordar cómo operó la dictadura, el golpe militar y el posterior Plan Laboral, para promover un sindicalismo fragmentado y despolitizado.

En junio de 1979, José Piñera logró la aprobación del Plan Laboral (DL 2756, 2757 y 2758) que buscaba, en sus propias palabras, “*reestablecer la libertad y democracia sindical en*



Mono González, 1º de Mayo (Exposición en MAC hasta el 17 de junio)

Chile”. En los hechos, el Plan Laboral tuvo como objetivo debilitar “el poder sindical”, negando las capacidades redistributivas que tiene el sindicato y la negociación colectiva. Entre los pilares fundamentales del plan podemos nombrar:

- Negociación colectiva reducida a cada empresa, sin posibilidad de coordinación entre sindicatos de distintas compañías.
- Huelgas en las que no se paralizaban las faenas y consideraban el reemplazo de los trabajadores y trabajadoras.
- Libertad o paralelismo sindical, que entregaba la posibilidad de formar varios sindicatos con pocos miembros para despojarlos de su carácter único.
- Despolitización sindical, al obligar a los sindicatos a tener como preocupación solo su lugar de trabajo, evitando así que se constituyan como agentes de cambio social.

A 50 años del golpe podemos consignar el profundo cambio que enfrentó la humanidad en el último cuarto del siglo XX. Este proceso significó, en definitiva, la llegada de un proyecto político que tenía por objeto restablecer las condiciones de clase, para garantizar la acumulación del capital y restaurar el poder de las elites económicas. Se estableció una composición de Clase Trabajadora en Chile que modificó el sentido del trabajo y su función social en la construcción de identidad de

clase y su rol en la sociedad, restringiéndolo solo a una categoría de insumo productivo.

A pesar de este escenario, el sindicalismo tiene un horizonte de reconstrucción para volver a jugar un rol en la sociedad chilena. Así lo indican los datos del Barómetro del Trabajo en distintas mediciones realizadas en los últimos dos años, que han entregado información interesante sobre el aumento de la valoración del sindicato como espacio de acción colectiva, frente a la desprotección del gobierno y del Estado en los peores meses de la pandemia.

Es tiempo que el sindicalismo sociopolítico pase de la retórica a la acción sindical, puesto que un sindicalismo despolitizado o meramente gremial, es tierra fértil para el avance de la ultraderecha en el seno de la organización sindical. Del mismo modo, un sindicalismo que se abstrae de la política, es un sindicalismo que erosiona su proyección transformadora.

Por eso, este Primero de Mayo reimpulsaremos una agenda transformadora que nos permita volver a instalar el valor del Trabajo Decente en la sociedad y en la nueva Constitución, devolviendo al sindicalismo al centro del ejercicio democrático de nuestra sociedad. ■

*Secretario General de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT Chile.

La experiencia de organización de manipuladoras de alimentos

Más derechos sindicales para condiciones laborales justas y dignas

por Alejandra Muñoz y Gisel Valenzuela*

Tras la última reforma laboral que entró en vigencia el 1 de abril de 2017, legado del segundo Gobierno de Michelle Bachelet, las y los trabajadores organizados teníamos la esperanza de que el sindicalismo se fortaleciera con el propósito de un mejor bienestar para la fuerza laboral del país. También pensábamos que la tasa de sindicalización nacional aumentaría, pues el objetivo de esta reforma era equilibrar las fuerzas entre empleadores y las y los trabajadores. Sin embargo, y pese a los evidentes esfuerzos por lograr “equiparar la cancha”, el escenario no ha tenido mayores transformaciones y la tasa de sindicalización se ha mantenido en torno a un 20%.

Según los últimos datos estadísticos de la Dirección del Trabajo (DT) al año 2021, la población afiliada a algún sindicato corresponde a 1.201.404 personas de 11.870 sindicatos activos (también hay 2.356 asociaciones). Ese mismo año, el Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que la población ocupada en Chile (trabajando) superaba las 8.600.000 personas.

Ante esto nos preguntamos, si se han avanzado en leyes que buscan fortalecer el sindicalismo, ¿por qué existe aún un recelo a pertenecer a ellos? Obviando las características particulares que puedan tener las organizaciones y sus dirigencias, ¿será que aún no tenemos una base sólida de normativas que garanticen y protejan realmente a las y los trabajadores al momento de, por ejemplo, negociar o ejercer su derecho a huelga? Y aquí nos gustaría detenernos, porque creemos firmemente que hoy en la construcción de una Nueva Constitución para Chile, es fundamental generar esas garantías y esa seguridad para no sentirse amenazados de perder nuestros empleos cuando queremos condiciones laborales justas y dignas para todas y todos.

Cuando se nos habla de economía, del crecimiento del país o del PIB alcanzado, siempre se busca una comparación con otros países de la región y con los pertenecientes a la OCDE, sin embargo, en materia de derechos laborales y sindicales, estamos muy lejos de igualarnos a estos últimos. Si bien, ahora con la ley aprobada y promulgada hace sólo unas semanas que reduce la jornada laboral en 40 horas el país está avanzando, todavía se está haciendo a pasos muy lentos.

Existen deudas gigantescas con las y los trabajadores de Chile. El modelo constitucional de 1980 mira muy de lejos los derechos que son fundamentales para cualquier país, su productividad y desarrollo:

el derecho al trabajo y la libertad sindical. En este contexto, estamos en una situación muy precaria, ya que las escuálidas normas labores desde ahí esgrimidas, tienden a favorecer los intereses de quienes las diseñaron y no de quienes debieran ser sujeto de derechos, es decir, las y los trabajadores.

Solo basta mirar el derecho a huelga, normado y condicionado a favorecer a las empresas y empleadores, haciéndola ver más como una amenaza que como un derecho de las y los trabajadores para generar mejores condiciones.

Sindicalizadas, movilizadas y unidas

En 1928, bajo el primer gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, cuando se instaura en el país el concepto de auxilio escolar al crear la Dirección General de Educación Primaria y las Juntas Comunales de Auxilio Escolar, para promover la alimentación escolar, y ya en 1964 se crea por la Ley la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB). Sin embargo, fue recién en la década de los '80 cuando este servicio comenzó a externalizarse mediante privados para la entrega de prestaciones.

Desde esa época a la actualidad, la alimentación escolar es desarrollada por trabajadoras contratadas por empresas privadas que postulan en licitaciones públicas para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. Este nuevo sistema de trabajo llevó a la precarización de las condiciones laborales de un sector laboral mayormente feminizado; si es que no es completamente desarrollado por mujeres.

Salarios bajo el mínimo, con contratos que sólo abarcaban de marzo a diciembre y con una alta rotación hicieron que muchos de los derechos de las Trabajadoras Manipuladoras de Alimentos se vieran

vulnerados. Los sueldos no reflejaban el esfuerzo y la importancia de la labor que se estaba desarrollando y se desarrolla en la actualidad, los contratos por periodos fijos generaban pérdidas remuneracionales y lagunas previsionales que precarizaban aún más las futuras pensiones para las trabajadoras del sector. Esto sumado a la alta rotación generaba que no existiera una real relación laboral, lo que les permitía a las empresas evitar el pago por años de servicios.

Una situación injusta e indigna por donde se le viera. Muchas de las mujeres del rubro son jefas de hogar o la principal fuente de ingresos de sus familias, pero una vez más, dado la precariedad que se estaba viviendo eran mujeres desprotegidas, vulneradas en sus derechos y con un Estado, que dado su Constitución y sus leyes, no estaban garantizando un mejor bienestar.

¿Qué tuvimos que hacer entonces? Organizarnos, unirnos para poder enfrentar este escenario y luchar por la dignidad y el valor de nuestro trabajo. Así, hace 40 años comenzaron a nacer los sindicatos de Trabajadoras Manipuladoras de Alimentos. El primero se formó en Iquique.

Actualmente somos cinco federaciones (Femach, Femai, Unama, Umafech, Fenasm PAE - PAP) y una Confederación (Confetrap) las que conformamos la red de trabajadoras Manipuladoras de Alimentos organizadas, teniendo una afiliación del 95% de las trabajadoras del sector en el país.

Sin lugar a duda, el reforzar nuestros lazos, el configurar demandas comunes, el conocer nuestras realidades y luchar en torno a una institucionalidad como lo es el sindicato ha hecho que podamos caminar juntas en las mejoras de nuestras condiciones laborales. Claramente aún queda mucho por avanzar, pero el hecho de fortalecernos y movilizarnos juntas ha permitido que podamos instalar nuestras demandas en la agenda pública y política.

El sindicalismo ha sido nuestra ventana de oportunidad para ir inyectándole dignidad y el valor que se merece nuestra labor. Así también hemos generado un mejor bienestar a miles de mujeres trabajadoras.

Lucha contra la precarización

Es así como mediante la organización sindical fuimos logrando avances con la Ley N° 20.338 (2008) y la Ley N° 20.787 (2014). La primera incorporó una norma que obliga a la contratación por los meses de diciembre, enero y febrero, sin embargo, lo establece para las licitaciones futuras, quedando fuera las licitaciones que se encontraban en curso, algunas de ellas hasta por cinco años.

También estableció normas para el despido por necesidades de la empresa cuando se aplica a trabajadoras manipuladoras que tienen más de seis meses de antigüe-

dad laboral y son despedidas antes de febrero de cada año.

Para los contratos indefinidos, por el periodo que dura la licitación en caso de contratos a plazo fijo, estableció que si hubo prestación de servicios continuos por seis meses no podrá ponerse término en los meses de diciembre, enero y febrero, prorrogándose el contrato.

Las bases de licitación fijan un piso mínimo de remuneración, el cual puede ser mejorado por oferta individual de la empresa, o por instrumentos colectivos firmados entre las organizaciones sindicales y las empresas.

Todo esto no hubiese sido posible sin la organización y el compromiso de las trabajadoras sindicalizadas y movilizadas.

Y seguimos trabajando con la misma fuerza, ahora, para que se nos reconozcan las enfermedades que se producen por el trabajo ejercido, como son el llamado “manguito rotador”, el espolón, la artritis, artrosis, entre otras, que, al no estar en la Ley, su recuperación tiene que ser financiadas por las trabajadoras.

Lo que hemos expuesto anteriormente es un ejemplo de cómo la organización sindical puede ser una vía para avanzar hacia menos precarización laboral que afecta mayormente a las mujeres trabajadoras.

Por lo mismo, consideramos que la Nueva Constitución que se está diseñando, y que a fines de este año se someterá a un plebiscito ratificatorio, debe contemplar estas realidades y debe tener como principios fundamentales el derecho al trabajo decente y la libertad sindical (tal como lo expone también la Organización Internacional del Trabajo - OIT).

Derechos como que los sindicatos puedan participar en las decisiones de la empresa, derecho a la libertad sindical, derecho a la negociación colectiva y ramal y el derecho a una huelga efectiva para todas y todos los trabajadores, sin excepción, permitirá –según nuestra opinión– que las y los trabajadores puedan salir del individualismo de sus derechos laborales y construir entornos solidarios y colectivos, que permitan avanzar en comunidad y de manera conjunta en mejores condiciones a través de los sindicatos.

Garantizar estos principios son fundamentales para “equiparar la cancha” entre empleadores, trabajadores y trabajadoras. Son fundamentales para avanzar por medio del diálogo y la negociación hacia una nueva relación laboral que procure el bienestar y las buenas condiciones de trabajo de la fuerza de laboral y un rendimiento productivo de las empresas y/o servicios. ■

*Alejandra Muñoz, presidenta y Gisel Valenzuela, secretaria general de la Confederación de Trabajadoras del Programa Alimentación Escolar (CONFETRAP)

Independencia frente al gobierno de Gabriel Boric

La encrucijada del movimiento sindical chileno

por Antonio Páez*

Para determinar los desafíos de los sindicatos y del movimiento obrero en el Chile actual, debemos considerar los efectos que tuvo el modelo sindical instalado durante la dictadura y el pacto transicional fruto del acuerdo entre la CUT y el gobierno de Aylwin, que subordinó las aspiraciones de la clase obrera a la consolidación de la transición y los intereses de la derecha y los empresarios desde 1990 al 2000.

Fruto del desgaste del ciclo neoliberal, sobre todo luego de la crisis asiática, en los sectores más precarizados de la clase obrera comenzó un proceso de reorganización y lucha que cuestionó el pacto de la transición y sus direcciones. Ejemplo de este proceso fueron las importantes huelgas en sectores estratégicos como el cobre (2005/6), salmón (2007) y forestales (2009). Ante estos procesos el Estado reaccionó con represión y le costó la vida a obreros como Rodrigo Cisternas o Nelson Quichillao. Este fenómeno se extendió a otros sectores claves de la economía como los puertos con el surgimiento de la Unión Portuaria (2009-2012) y tendió a revivir el paro y la huelga en solidaridad como método de lucha.

La Concertación respondió a estos nuevos elementos a través de leyes que profundizaron el modelo y que fueron implementadas casi sin resistencia, en esto la CUT jugó un rol central en su aceptación. La primera ley clave fue la ley de subcontratación (2006), que legalizó una de las formas más brutales de precarización y una de las piedras angulares del Plan Laboral de la dictadura. Aunque la más importante fue la reforma laboral del segundo gobierno de Bachelet, una reforma que se hizo en diálogo con los sectores tradicionales (CUT) y que abrió un proceso de debate de si apoyar o no dicha reforma. Por lo que fue una *prueba de fuego* para quienes hasta ese momento habían sido críticos de la conducción oficial.

Durante el debate de la reforma, un sector de la dirigencia sindical optó por intentar "mejorar" el proyecto, sostuvieron conversaciones con autoridades de gobierno y pusieron sus fichas en dialogar con la Nueva Mayoría.

Esta práctica de compromiso con el gobierno y cercanía al Frente Amplio (2017), que surgió luego de las movilizaciones estudiantiles, consolidó en la mayoría de las direcciones sindicales un camino de subordinación a los tiempos del parlamento, coherentemente con esto, destinaron fuerzas y tiempo a la estrategia del lobby, visitando constantemente los pasillos del Congreso con el objetivo de "convencer" a parlamentarios en vez de fortalecer la base en los sindicatos, transformándolos en herramientas de lucha y organización de la clase trabajadora.



Paula Valenzuela, *Juntar las partes* (Acrílico sobre papel), 2020
(www.paulavalenzuela.com)

Estallido y Unidad Social

Es en este marco en que ocurre la rebelión popular del 2019, que encontró a una sociedad hastiada de los abusos del modelo pero sin una organización fuerte que pudiera darle una conducción clara y unificada al proceso. Tanto los partidos del FA y el PC como los sindicatos, que llevaban años de subordinación a los tiempos del gobierno y el parlamento, se mostraron más como un límite que como una variante progresiva para conducir la crisis.

Lo más ilustrativo de esto es que la CUT no jugó ningún rol significativo durante el proceso, sus direcciones (PC) se limitaron a ir tras los acontecimientos y a mantener un programa mínimo como si solo se tratara de una lucha más y no de un proceso con extensión nacional y masividad suficiente como para tirar abajo el gobierno.

Durante la movilización surgió la Mesa de Unidad Social, que tenía un potencial enorme al configurarse como un espacio de coordinación entre trabajadores, estudiantes, pobladores, etc.

Esto se demostró en la convocatoria a la huelga del 12 de noviembre que logró paralizar el país.

Pero mientras miles de trabajadores protestaban de forma individual, la mayoría de los sindicatos parecían caer en la inercia o inutilidad para el momento de lucha. Esto no es ni casual ni una apreciación subjetiva, sino que fue una condición creada y es el resultado histórico de la despolitización de la organización obrera, además de la lógica que las dirigencias sindicales impusieron limitando la actividad sindical a la negociación económica, mientras se dejaba la política solo para los dirigentes.

A pesar de esto, tendencias a la autoorganización y a romper las barreras corporativas de los sindicatos surgieron al calor de la propia lucha. Trabajadores, sin importar rubro u oficio, fueron parte de asambleas que buscaban organizar y fortalecer la movilización.

Ejemplos como las brigadas de autodefensa, las redes de trabajadores de la salud para atender heridos, las coordinaciones de dere-

chos humanos o el comité de resguardo en Antofagasta se transformaron en referencias para la organización de la lucha.

Pero el llamado a huelga del 12N marcó un punto de inflexión en la situación. La masividad de la protesta y el alcance de la paralización, generó terror en la clase empresarial y sus políticos de derecha y ex Concertación.

Mientras la juventud precarizada, los perdedores relativos y absolutos del pacto neoliberal, se enfrentaban a la represión, en los pasillos del ex congreso nacional, todos los partidos con representación parlamentaria, se sentaron a negociar un "Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución". La burocracia sindical, en vez de enfrentar el pacto, se limitó a intentar incidir desde los "movimientos sociales". De hecho, luego del 12 de noviembre, no existió ningún otro llamado a la huelga general y se quitó de las exigencias la renuncia de Piñera, poniendo así freno a las tendencias destituyentes, dejando de lado las experiencias de coordinación por abajo y favoreciendo así la "vuelta al trabajo". El momento posterior al 12 de noviembre fue, en ese sentido, el momento en que las viejas y nuevas dirigencias del sindicalismo se encontraron jugando un mismo rol, frenar la movilización.

De la rebelión, la gran contradicción fue que la clase trabajadora actuó diluida, y que sus posiciones estratégicas (minería, forestales o puertos) no fueron puntos de apoyo para la coordinación obrera y popular, por el contrario las burocracias sindicales frenaron esa fuerza o la supeditación a una línea de diálogo social como sucedió con la Mesa de Unidad social.

Luchar por la independencia política

De todo lo que hemos revisado, una de las conclusiones que podemos observar es que cada vez que el movimiento sindical ha depositado su confianza en que los cambios vendrán desde el Estado, ha terminado convertido en moneda de cambio de la negociación entre gobierno y oposición.

Hoy, con el giro a la derecha del gobierno de Boric, se ha puesto en la encrucijada a un sector de la burocracia sindical el cual: o rompe su confianza en el gobierno o se transforman en el último eslabón de la política traidora del mismo. La CUT ha tomado hasta el momento esta última posición al justificar las medidas flexibilizadoras que venían junto a la Ley de las 40 horas o al no cuestionar el refuerzo de la represión.

Por esto es más necesario que nunca que los sindicatos tengan independencia política del Estado, el gobierno y los partidos que avalan este régimen político y social. El acomodo del FA y el PC demuestran que son la pata izquierda del régimen. Los sindicatos deben romper cualquier confianza en estos sectores y avanzar a constituir un polo independiente, que pueda poner sobre la mesa las demandas populares más sentidas de la clase trabajadora y enfrentar la ofensiva empresarial.

Recuperar los sindicatos desde una perspectiva clasista e independiente del Estado y en disposición de lucha será clave en el periodo que viene. El ejemplo de la clase trabajadora francesa contra Macron es una muestra de este camino.

Por último, debemos volver a discutir política, para que la clase trabajadora vuelva a ser sujeto de la misma, mostrando que somos alternativa para resolver las demandas sin depender de los partidos tradicionales o los representantes del empresariado. ■

*Presidente del sindicato Starbucks

No todo lo que flexibiliza es oro

Desafíos para el mundo sindical tras la aprobación de las 40 horas

por Naiara Susaeta Herrera*

Hace unas semanas se promulgó la tan anunciada ley de 40 horas. Un proyecto que ingresó el año 2017 en manos del Partido Comunista, que presentaba una disminución de la cantidad de horas por jornada de trabajo, y que se zanjó cerca de cinco años después, en términos sumamente diferentes a los originales.

El nuevo texto, celebrado por el oficialismo, no ha estado exento de críticas tanto de ciertos sectores del mundo sindical, como de académicas y expertos en la materia. Detrás de estas opiniones se encuentra la preocupación porque se haya aprobado una norma que transa horas de trabajo por flexibilidad, y que entrega definiciones claves sobre la distribución de la jornada individual de trabajo a un "acuerdo" entre las partes, que en el derecho laboral no están en una posición simétrica, y a los sindicatos de las empresas.

Aunque pueda sonar bien que se concedan estas decisiones las organizaciones sindicales, en realidad entregar a las directivas la negociación de ciertos aspectos relativos a la jornada laboral de cada persona está lejos de ser una garantía para las y los trabajadores sindicalizados, ya que la fragmentación de las organizaciones sindicales las suele dejar en una posición de debilidad frente al empleador. Esta ley, de hecho, podría generar un incentivo perverso a las empresas para constituir sindicatos que, manejados por ellas, les permitan camuflar decisiones unilaterales como si fuesen pactos de flexibilidad.

Si hemos llegado a un estado tal no se debe a una falta de esfuerzos por parte de la población sindicalizada, sino por el establecimiento institucional del plan laboral de José Piñera y su fortalecimiento por parte de quienes han estado en el poder desde hace treinta años. El escenario político, sin embargo, ha cambiado radicalmente en la actualidad, y la posibilidad de hacer frente al modelo de relaciones laborales de la dictadura está a nuestro alcance. Para ello, son varios los desafíos que el mundo sindical debe enfrentar dentro de los próximos años, y hay dos que son probablemente los más necesarios y urgentes para dar paso al resto.

El primer gran desafío es en materia de género. Hace unas pocas semanas un nuevo informe de la Dirección del Trabajo daba cuenta de que la participación laboral femenina en Chile en espacios formales de trabajo estaba en un 46% al año 2021, lo que representa una baja respecto de las cifras previas a la pandemia que arrojaban una participación del 53%. Es un número preocupante considerando que el mismo estudio da cuenta de una participación del 60% en América Latina.



Carmen Valbuena, de la serie *Diálogo con la Geometría*. *Corazón de mujer* (Óleo sobre tela), 2017 (www.carmenvalbuena.cl)

Estas cifras tienen sentido si consideramos la adversidad que debieron enfrentar las mujeres durante la emergencia sanitaria, que además de una jornada formal, cargaban con la responsabilidad de la mayor parte de los trabajos reproductivos y de cuidado que se dispensaban socialmente. Dicha tarea estaba su cargo no sólo en sus hogares, sino también en los trabajos formales que tienen esa naturaleza. No es de extrañar que su permanencia en estos espacios disminuyera, si observamos las grandes mermas que la doble jornada propiciada por el modelo generó en su productividad y en su salud.

En cuanto a su sindicalización, si bien ha aumentado, resulta preocupante que, según el mismo informe, su cuota de participación en las directivas de sindicatos de empresa sea de un 27,1% siendo que representan el 42,7% de las socias, mientras que los hombres dirigentes son el 72,9% y representan el 57,3% de los afiliados. En este contexto también ocurre que cada cuatro dirigentes, tres son hombres y sólo una es mujer, y que en el resto de los cargos el más feminizado es el de las secretarías. Estas cifras muestran la necesidad de establecer como mínimo un sistema paritario, y develan la insuficiencia de la reforma laboral del año 2016 en esta materia.

Sindicalismo feminista

El desafío de avanzar en construir sindicalismo feminista en Chile es urgente, no sólo por

cumplir con estándares, sino sobre todo porque nuestro país está en medio de procesos de cambio cuyas dinamizadoras, en una gran medida, hemos sido las mujeres. Con encuentros, jornadas de huelga y marchas sucesivas desde el año 2019 que llegan a convocar más de un millón de mujeres, la agenda política no ha podido seguir invisibilizando la organización feminista, y entonces tener dirigentas que ocupen roles con capacidad y poder de conducción no es un asunto nominal, sino sustantivo.

Efectivamente, un sindicalismo que no considere las demandas históricas de las mujeres trabajadoras, cuyas principales representantes y defensoras son éstas, no tiene posibilidad de hacerse un espacio en las disputas políticas que se están dando de manera transversal a nivel nacional. Así, reconocer el rol central de las mujeres y sus luchas en el movimiento sindical, entre ellas, la que reconoce y entrega garantías para los trabajos domésticos y de cuidados, es una necesidad de primer orden si las organizaciones sindicales pretenden recuperar su rol de masas. A su vez, deben enfrentar con seriedad los estereotipos de género y las lógicas patriarcales que se han arraigado a su quehacer, y que aun hoy genera un desincentivo para muchas mujeres interesadas en tomar roles de dirigencia.

El segundo gran desafío que se vislumbra es el establecimiento de un sistema de negociación colectiva ramal. Hace poco menos de

un año, nuestro país terminaba un texto constitucional que finalmente no fue aprobado. El documento final de la propuesta de nueva Constitución del año 2022 contenía una serie de garantías que permitían fortalecer el derecho laboral en su esfera colectiva, y entre ellas, se encontraba el reconocimiento de la negociación colectiva en todos los niveles, incluyendo la negociación por rama. Aunque era una norma sumamente importante para las organizaciones sindicales, que permitía abrir de inmediato uno de los grandes cerrojos que evitan su fortalecimiento, su acuerdo inicial pasó relativamente desapercibido, en una buena medida por la dificultad que tiene el movimiento sindical de posicionar su agenda a nivel nacional.

Se abre una disputa

A ocho meses del rechazo estamos al inicio de un nuevo proceso constituyente, y hasta ahora su desarrollo ha sido sobre todo a través de la comisión de expertos, que tiene la tarea de proponer un primer borrador del texto constitucional. Específicamente sobre negociación colectiva ramal, lo único que se ha planteado hasta ahora es la consagración del derecho a la negociación colectiva, sin especificar que se asegure la negociación colectiva ramal a nivel constitucional. De aprobarse un texto en estos términos, las posibilidades serían dos: la disputa a nivel jurisprudencial para que no se privilegie e incentive únicamente la negociación en la empresa por sobre otros tipos como la negociación a nivel ramal, o bien, la disputa legal.

La primera de ellas se ve atravesada por la ya mencionada dificultad de la mayoría de los sindicatos del país de avanzar de forma transversal y con fuerza en sus demandas, en especial si no se trata de sindicatos con una gran cantidad de recursos o con presencia en varias regiones del país. La segunda, del carácter que pueda tener un eventual proceso legislativo.

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, anunció a fines de febrero que el gobierno está preparando una reforma en este sentido. Siendo aún compatible con una eventual nueva Constitución e incluso con la actual en la opinión de diversos expertos y expertas, la oportunidad de consagrar la negociación ramal se nos presenta como cierta, y esta vez, la urgencia es impulsar un espacio de organización de carácter nacional, por fuera de los partidos del gobierno, que empuje la creación de la ley y participe activamente en la discusión que permita que la reforma llegue a buen puerto. No es posible que el sindicalismo siga considerando como ganadas transformaciones legales e institucionales que en la práctica no permiten cumplir el objetivo para el que se crean. De este modo, la apuesta es por lograr que se legisle sobre negociación ramal en serio y sin trampas, y que se entregue con ello una herramienta para combatir, de una vez por todas, la atomización sindical que tanto daño le ha hecho al mundo del trabajo consiguiendo algo sencillo, pero fundamental: darle a las y los trabajadores herramientas para discutir, a nivel de sus empresas y de la sociedad, sus propios destinos. ■

*Abogada, Presidenta Fundación Defensoría Popular de las y los Trabajadores.

Un momento para dejar atrás el Estado subsidiario

El movimiento sindical y la construcción del Estado Social y Democrático de Derecho

por Alexis Cortés*

“Que todo el mundo trabaje a su gusto y que viva a su gusto. ¿Habrá algo más admirable? ¡Si nos repiten que el trabajo es una virtud, que nadie quede sin gozar de esa virtud!” Este comentario de Luis Emilio Recabarren al proyecto de Constitución de la Federación Obrera de Chile de 1921 refleja la permanente preocupación del movimiento obrero con la construcción de un “Estado Social” y con la valoración social del trabajo.

El movimiento obrero, a través de la organización sindical, fue capaz de dejar su huella en la legislación chilena a lo largo del siglo XX y sus preocupaciones fueron recogidas en la Constitución del '25', la cual buscó hacerse cargo de lo que se conoció como “cuestión social”.

Por eso, no es de extrañar que la dictadura cívico militar, que redactó el texto vigente, tuviera como prioridad el debilitamiento del sindicalismo, sea a través de: la desindustrialización de la economía, la persecución y exterminio de dirigentes sindicales y la implementación del Plan Laboral de 1979 de José Piñera, que despojó a los sindicatos de algunas de sus principales herramientas de organización y movilización. Tales como la facultad de negociar sectorialmente (“negociación ramal”) o de tener derecho a huelga efectivo. La Constitución del '80 además, aunque reconoció la libertad sindical, la negó en su redacción al construirla más bien desde la prohibición: de la huelga en el caso de los funcionarios públicos, de la negociación colectiva al enfatizar los casos en que no se puede realizar y de la participación política de organizaciones sindicales.

Reabierto la posibilidad de redacción de una Constitución hecha en democracia, cabe preguntarse: ¿Qué rol le cabe al sindicalismo chileno en este nuevo proceso constituyente? Hoy la tarea es la redacción de una Ley Fundamental que habilite los cambios democráticos, entregándole al legislador la tarea de poder implementar la gran conquista del largo proceso constituyente: el Estado Social y Democrático de Derecho. Esta categoría supone dejar atrás la lógica subsidiaria desprendible de la Carta Magna de la dictadura que permitió la mercantilización de los derechos sociales.

Los países que han avanzado en la construcción de un Estado Social en democracia y con respeto al Estado de Derecho, tales como Alemania, España o Portugal, pasaron a definir su Estado por los derechos garantizados, otorgándole como tarea el combate a la desigualdad social y la construcción de sociedades más justas y solidarias. Todos esos países y aquellos que en la práctica han devenido en Estados Sociales, como los nórdicos, tienen en común la existencia de movimientos sindicales fuertes que han impulsado las conquistas sociales necesarias para construir sociedades justas e igualitarias.



Mauricio Guajardo, *Entre esquinas* (Granito y Basalto), 2019
(Insta: mauricioguajardoescultor)

De este modo, el sindicalismo chileno debe asumirse, con el concurso de los otros movimientos sociales, como co-productor del futuro Estado Social y Democrático de Derecho. Para ello, deberá contar con herramientas que le permitan implementarlo.

El borrador de texto de anteproyecto que se encuentra en fase de enmiendas tiene la virtud de proponer una nueva relación entre capital y trabajo, al reconocer el trabajo decente en los términos definidos por la OIT y al proponer el derecho a la libertad sindical amplio y también próximo al estándar internacional. Se reconoce el derecho a la sindicalización, a la huelga y a la negociación colectiva.

Sin embargo, el texto incluye una definición restrictiva de la huelga al circunscribirla a la negociación colectiva. Tal como lo ha señalado Álvaro Domínguez, dicha norma va en contra de las recomendaciones internacionales y de la nuestra cultura jurídica. La jurisprudencia sostenida en los últimos 10 años ha reconocido que la Huelga puede ejercerse válidamente fuera de la negociación colectiva, reglada o no reglada, para amparar intereses económicos y sociales de los trabajadores, ya sea para exigir aumentos salariales, como también para amparar intereses sociales laborales, como la denuncia de incumplimientos contractuales o legales del empleador.

Enmiendas necesarias

Ahora bien, la fase de enmiendas permitirá profundizar estos contenidos y corregir este problema. No obstante, este

proceso también puede significar nuevas omisiones en aspectos claves o incluso retrocesos en algunos de ellos. Por eso, es importante el acompañamiento ciudadano de este debate y la elección de Consejeros Constitucionales que comprendan la relevancia del trabajo y la libertad sindical para que la consagración del Estado Social y Democrático de Derechos no sea solo una formalidad jurídica y se vuelva realidad.

Tal como lo han mostrado los trabajos de Rodrigo Medel, en Chile, la conflictividad laboral viene desbordando hace años la restrictiva institucionalidad laboral heredada de la dictadura, sobre todo en lo relativo a las herramientas de negociación colectiva. Ejemplo de lo anterior es el incremento de huelgas extralegales en las últimas décadas, es decir, aquellas que se realizan por fuera de la negociación colectiva reglada. Este ciclo huelguista, por fuera de la ley, ha ocurrido sobre todo en los sectores primario-exportadores de la economía, justamente donde el sindicalismo es más fuerte. Sin embargo, a pesar de las habilidades mostradas por ciertos sectores del sindicalismo chileno para sortear las barreras institucionales, en el ámbito privado en general prevalece la debilidad y la fragmentación. Lo cual se refleja en la escasa cobertura de la negociación colectiva. En conclusión, se hace urgente una nueva institucionalidad laboral capaz de cerrar la brecha entre lo legal y lo factual, y que garantice un acceso institucionalizado a la negociación colectiva para la mayoría de los trabajadores.

Oposición empresarial

En una línea similar, en su reciente libro, el sociólogo Pablo Pérez ha mostrado cómo la existencia de instituciones que protejan efectivamente los derechos sindicales es fundamental para la consolidación de sociedades democráticas e igualitarias. En su libro, Pérez demuestra que, luego del retorno a la democracia, todos los intentos por reformar la institucionalidad laboral heredada de la dictadura han sido infructuosos. Según señala, ello ha ocurrido no sólo porque los sindicatos no han tenido el poder suficiente para empujar reformas progresistas, sino que especialmente porque los empresarios se han opuesto tenazmente a cualquier cambio legislativo que fortalezca la organización sindical. Una de las implicancias centrales del libro de Pérez es que el fortalecimiento de los sindicatos sigue siendo una tarea pendiente en nuestro país; un desafío que puede empezar a ser resuelto a través de una nueva Constitución.

Ahora bien, una condición para que el proyecto de nueva Constitución tenga posibilidades de éxito es que logre hablarle y hacerle sentido a todos los chilenos y chilenas. Para ello, es indispensable insistir en la importancia que tiene el trabajo, comprendido como derecho fundamental y como un deber social que es fuente de realización personal y base de la economía; y los sindicatos, entendidos como las organizaciones que históricamente han representado los intereses de los y las trabajadoras.

Labores de cuidado

Bien vale recordar que el pueblo de Chile ocupa la mayor parte de su tiempo trabajando o preparándose para trabajar. Más aún, actualmente hay trabajos como aquéllos involucrados en las actividades domésticas y de cuidado que ni siquiera son reconocidos como tales. En efecto, si hay algo que le da viabilidad al país, pero que al mismo tiempo está absolutamente invisibilizado es el trabajo doméstico y de cuidados. Algo similar ocurre con los sindicatos, los que siguen estando relegados a ocupar un rol secundario en nuestra vida económica y social, a pesar de su importancia para el bienestar de los y las trabajadoras del país.

La nueva Constitución debe ser capaz de reconocer la importancia de los sindicatos y la existencia misma del trabajo doméstico de cuidados, permitiendo, por ejemplo, que sea parte de la seguridad social. Si la redacción que se proponga no es capaz de cumplir con ambas tareas, probablemente no llegará a buen puerto. ■

*Alexis Cortés es Comisionado Experto del Proceso Constitucional propuesto por la Cámara de Diputados en cupo del Partido Comunista de Chile, es Dr. en Sociología y Académico de la Universidad Alberto Hurtado. Obtuvo el Premio Iberoamericano de Ciencias Sociales otorgado por la UNAM el año 2022.

Niños, niñas y adolescentes en la Educación de Adultos

Persistencia y trayectorias educativas

por Dante Castillo* y Mario Torres**

Antes del estallido social de octubre de 2019 y de los nefastos impactos de la crisis sanitaria, las cifras nacionales de abandono escolar en educación básica y media, si bien no eran altas en comparación con la región Latinoamericana, igualmente daban cuenta de una problemática educativa crítica y no resuelta. Pese a que los datos mostraban una muy leve tendencia a la disminución de estudiantes que abandonaban los recintos escolares.

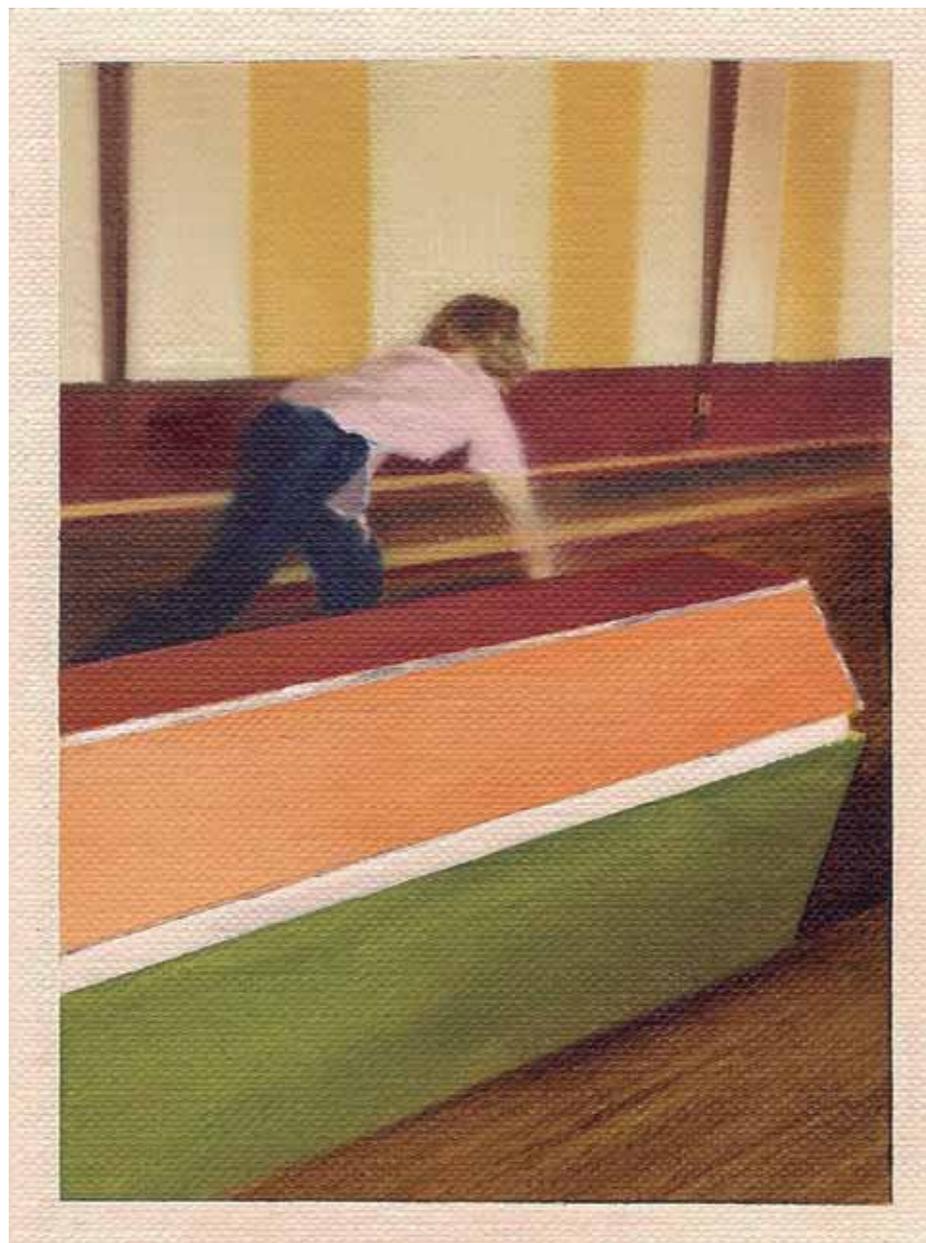
De hecho, anualmente alrededor de 140 mil niños, niñas y adolescentes, que, teniendo edad escolar, se encontraban fuera del sistema escolar regular. Sin embargo, a partir de la educación no presencial y el teletrabajo, las cifras de abandono escolar se incrementaron a 187 mil estudiantes que anualmente dejan de asistir a los centros educativos, tal como se advirtió en el año 2020.

La investigación educativa nacional e internacional ha profundizado la identificación y caracterización de los factores y motivaciones que están asociadas al abandono escolar y al paulatino proceso de alejamiento de la escuela. Pero, contradictoriamente o se ha prestado similar atención a las experiencias educativas de reescolarización de la población infantil y juvenil.

En Chile, desde hace al menos dos décadas, prácticamente todos los programas que apuntan a la reinserción de niños, niñas y adolescentes que, por diversos motivos, han dejado de asistir a la educación regular, han sido incorporados directa o indirectamente a la oferta educativa de la Educación de Adultos que dispone el Ministerio de Educación. Es decir, debido a la ausencia de una modalidad específica que atienda las necesidades escolares de este estudiantado, los programas de Adultos, conocidos como EPJA han debido flexibilizar las edades de ingreso o levantar experiencias piloto para atender las necesidades educativas del estudiantado menor de 18 años que están excluidos del sistema de educación regular.

Es así como, desde el año 2005, el Ministerio de Educación ha implementado variadas iniciativas y estrategias para que esta población infantil y juvenil retome su ciclo educativo. Pese a los esfuerzos desarrollados en estos programas, los antecedentes oficiales muestran que todavía persiste la dificultad casi estructural para que esta población complete exitosamente la escolaridad obligatoria y así cumplir con el mandato del “derecho a la educación”. Este compromiso incumplido trae como consecuencia, dificultades importantes para la inclusión educativa, social, económica y cultural de esta población específica y también para el desarrollo integral del país.

La evidencia existente ha permitido constatar que, por una parte, escuelas y liceos no logran acoger apropiadamente a niños, niñas y jóvenes que se reincorporan al sistema formal; y, por otra, que en los programas de reingreso o reinserción educativa un número



Andrea Breinbauer, *Last round* (Óleo /papel y página de album), 2019
(www.andreabreinbauer.cl)

importante de niños y jóvenes no termina el ciclo de formación, no se reingresa al liceo, o bien, egresa sin adquirir las competencias curriculares definidas en los planes y programas de estudios.

En es en este contexto, que la Universidad Tecnológica Metropolitana, junto al Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación, gracias un al proyecto Fondecyt 1221063, de la Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología, ANID, están implementando una investigación a tres años, con el propósito de analizar las trayectorias, prácticas escolares y la persistencia educativa de los niños, niñas y adolescentes que asisten a los programas de Educación de Adultos en todas modalidades de reescolarización que actualmente se utilizan en Chile.

De esta forma, el propósito de esta investigación es el de representar el proceso de escolarización de esta población, determinando los factores que inciden en la persistencia, en el abandono, en las habilidades de cognición social y en la mediación de procesos de adaptación y retención escolar que se evidencian en esta población infanto-juvenil.

Paralelamente, esta investigación también busca proveer insumos actualizados orientados a fortalecer las dinámicas de inclusión en el sistema escolar chileno, de modo de contribuir al cumplimiento del mandato legal que le asiste al Estado chileno de dar educación obligatoria a todas y todos sus habitantes.

Por lo anterior, este estudio también pretende conocer en qué medida la gestión or-

ganizacional, el trabajo pedagógico, el desarrollo de capacidades cognitivas y la cultura escolar de la educación de adultos, en sus diferentes modalidades, se encuentra preparada para atender satisfactoriamente la población infanto-juvenil que ahora asiste a las aulas de la educación de adultos. Al mismo tiempo, es importante determinar el cumplimiento del mandato de ofrecer oportunidades de educación al estudiantado que desea iniciar, continuar y concluir su proceso educativo.

En este marco, resulta muy relevante abordar distintos espacios insuficientemente tratados en la literatura sobre este ámbito y responder entre otras cosas: ¿Qué diferencias existen en términos normativos, de oferta educativa y de recursos humanos entre los distintos programas de reescolarización que incluyen la educación de niños, niñas y adolescentes?; ¿Cómo se comportan en términos de desempeño académico, de captación de matrícula y de resultados escolares de niños, niñas y adolescentes de distintos programas de reescolarización?; ¿Qué trayectorias educativas desarrollan y qué expectativas poseen los niños, niñas y adolescentes que actualmente son escolarizados en la Educación de Adultos?; ¿Cuál es el rol que poseen las diferentes habilidades de cognición social en la mediación de procesos de adaptación y retención escolar del estudiantado infanto-juvenil que asiste a la educación de adultos?; ¿De qué manera inciden en las experiencias educativas en la persistencia educativa, las diferentes prácticas escolares, culturas, organizacionales y estrategias de retención escolar que dispone la oferta dispuesta por el Ministerio de Educación?

En el plano de los resultados, el estudio iniciado por ambas instituciones espera identificar y caracterizar los factores asociados a la reinserción educativa de jóvenes menores de 18 años y contar con una evaluación empírica de los programas de reinserción y de reingreso educativo.

Junto a lo anterior también se busca elaborar una tipología de modos de escolarización, a partir de los perfiles socioeconómicos, las trayectorias académicas y la participación de padres y apoderados, de niños y niñas que asisten a los programas de reingreso y reinserción de establecimientos educativos del país, determinando al mismo tiempo las relaciones y dinámicas del proceso de escolarización que se advierten en las iniciativas de la Educación de Adultos que atienden a población infanto-juvenil.

Igualmente, estos hallazgos proporcionarán antecedentes y elementos de juicio a la iniciativa que discute el Consejo Nacional de Educación, el Mineduc y el profesorado, para crear una nueva modalidad educativa que atienda a estudiantes de 12 y 21 años, que están fuera del sistema escolar. ■

*Investigador PIIE **Académico UTEM.

Cómo la oposición al presidente Allende se hizo cada vez más dura

Dos hitos decisivos en las relaciones de la UP con la DC

por Jorge Magasich*

La bonanza que viven la Democracia Cristiana y la Unidad Popular durante las primeras semanas del gobierno de Salvador Allende, encarnada con la inscripción en la Constitución de derechos democráticos y sociales, dura poco. Desde mediados de 1971 la DC pasa a una oposición cada vez más dura.

La metamorfosis de la DC del “socialismo comunitario” en 1970 a la constitución de un bloque con la derecha en 1972, hasta redactar con la derecha el documento que legitima el golpe en 1973, con el apoyo de buena parte de su base, es un elemento crucial para comprender el desenlace del 11 de septiembre.

Tal mutación pasa al menos por dos hitos decisivos: el proyecto de reforma constitucional sobre las áreas de la economía asociado a la exigencia de promulgarlo a través de un dudoso procedimiento. Y una negociación con el gobierno en junio de 1972 que, pese a concluir con un acuerdo, será boicoteada.

El viraje demócratacristiano comienza con críticas a la iniciativa de crear tribunales vecinales y a la nacionalización de la banca, pidiendo cooperativas en algunos casos. Poco después la DC acusa al gobierno de nacionalizar industrias “a través de procedimientos de dudosa legalidad”, denuncia actos de “sectarismo” contra demócratacristianos y crea una instancia encargada de registrarlos. Un ejemplo son las amenazas de embargo por los bancos nacionalizados contra los deudores que habían financiado la campaña de Radomiro Tomic.

La derechización se acelera después del asesinato del ex ministro DC Edmundo Pérez, el 8 de junio de 1971, por una pretendida organización revolucionaria (1); las iras se tornan contra el gobierno. En julio la DC presenta, aliada con la derecha, un candidato a diputado a una elección complementaria en Valparaíso. Esto provoca la renuncia al PDC del ala izquierda que constituye la Izquierda Cristiana e ingresa a la UP. Sin ella, la DC pasa a la oposición radical.

La precariedad de la “luna de miel” entre la DC y la UP y las dificultades para conseguir un entendimiento durable, pese a las coincidencias programáticas entre Tomic y Allende, fueron detectadas a fines de 1970 por Joan Garcés y por Frédéric Debuyst, en un estudio comparativo de los tres programas electorales. Concluye que es probable que la DC se desplace a un bloque DC-PN (2).

La crisis institucional

En octubre 1971, los senadores DC Juan Hamilton y Renán Fuentealba presentan un proyecto de reforma constitucional que ratifica las tres aéreas de la economía añadiendo las “empresas de trabajadores” (cooperativas) y reserva al Estado una larga lista de actividades “estratégicas” (3). Pero despoja al Ejecutivo de la facultad de nacionalizar empresas por decreto, transfiriéndola al Legislativo; limita a 180 días la facultad del gobierno de intervenir y requisar empresas; y declara nulos los convenios de compras de acciones celebrados por la CORFO para nacionalizar em-

presas (4). Tal disposición fabrica *a posteriori* un vicio de nulidad para anular un contrato (la compra de acciones), inexistente cuando fue celebrado. Una aberración jurídica.

El Congreso vota la reforma el 19 de febrero, por 103 votos contra 38 y una abstención. Ese día, Hamilton enuncia una peculiar interpretación de la Constitución que creará el principal conflicto institucional del período. Hasta entonces el procedimiento para reformar la Constitución se asemeja al trámite de una ley: si lo aprueba el Parlamento pero lo veta el Ejecutivo, el Parlamento puede “insistir” con dos tercios. Si los alcanza, la reforma es adoptada; si no es abandonada. Pero en 1970 había entrado en vigencia una reforma a la Constitución que permite al Presidente, si lo estima necesario, someter a plebiscito los puntos de desacuerdo de una reforma constitucional.

La posibilidad de convocar un plebiscito –pretende la oposición– deja caduco el veto del Ejecutivo y la mayoría especial de dos tercios. El Ejecutivo sólo puede promulgar lo votado, aunque sea por mayoría simple, o convocar un plebiscito. Tal “interpretación” entrega a la mayoría parlamentaria la posibilidad de modificar la Constitución, transformando el régimen en Parlamentario. Podría, por ejemplo, acortar el mandato presidencial. El Ejecutivo responde, el 6 de abril, vetando los artículos que cercenan sus prerrogativas.

A esta crisis institucional se suman nuevas tensiones. En diciembre 1971 la DC introduce una controvertida acusación constitucional contra el ministro del Interior José Tohá, acusándolo de amparar grupos armados. Luego presenta candidaturas conjuntas con la derecha en dos elecciones complementarias.

El 12 de abril la oposición organiza una gran manifestación cuyo orador único es Patricio Aylwin, en un clima de “creciente proceso de facitización” de la oposición, según Genaro Arriagada (DC) (5). Una semana más tarde la UP replica con otra manifestación tan o más masiva donde Allende anuncia la disposición de su gobierno a “concurrir a una consulta plebiscitaria pero sobre un conjunto de cuestiones fundamentales, a realizarse el próximo año”.

La negociación gobierno-DC

El Presidente Allende resuelve desbloquear la crisis institucional negociando con la DC. Aunque en el gobierno, opina Luis Badilla, nadie, o casi, cree en la posibilidad de un acuerdo, salvo Allende y hasta cierto punto el PR y el PC. El PS se opone a la negociación hasta mediados de junio, pero informa que, aunque considera improbable que pueda fructificar, no pondrá obstáculos.

El ministro de Justicia Manuel Sanhueza establece contactos en marzo 1972 pero debe

ser remplazado después que su Partido de Izquierda Radical (en realidad de derecha) se retira del gobierno y de la UP en abril 1972. Los prosigue el nuevo ministro, el joven abogado radical Jorge Tapia. Dispone de amplios poderes limitados por tres exigencias: mantener las facultades presidenciales; identificar las empresas estratégicas que pasarán al área social y no aceptar reformas constitucionales por mayoría simple.

Jorge Tapia contacta primero al senador DC Tomás Pablo y luego a Renán Fuentealba. La DC, según *Punto Final*, pone un precio a las conversaciones: la entrega de la concesión de la radio Balmaceda. La obtiene por 30 años (6).

El gobierno es representado por Rafael Agustín Gumucio (IC), Sergio Insunza (PC), y a veces por Orlando Millas, ministro de Economía desde el 17 de junio. La DC por su tercer vicepresidente Felipe Amunátegui (quien ya es golpista (7) y por el consejero Sergio Saavedra en contacto directo con el presidente Renán Fuentealba (8).

Los contactos, reservados en mayo 1972 y públicos a partir del 12 de junio, son amigables –recuerda Gumucio–, y se prolongan ya que los demócratacristianos consultan regularmente al consejo de la DC. A fines de junio alcanzan un acuerdo global:

1. Unas 80 empresas pasarán al área social, (sobre 91 propuestas por el gobierno), precisando el mecanismo de indemnización a los propietarios; 13 permanecen en el sector privado, entre ellas la Papelera. Fuentealba señala que el gobierno se compromete a devolver unas 150 empresas requisadas o intervenidas.
2. En lo sucesivo, los eventuales traspasos de empresas al área social o mixta se harán por ley.
3. Las facultades del Ejecutivo de requisar e intervenir empresas quedan limitadas a 90 días prorrogables una vez.
4. Los bancos nacionalizados serán administrados por un director designado por el Estado y cinco electos por sus trabajadores. Fuentealba afirma que se decidió mantener en el área privada a pequeños bancos regionales.
5. Las empresas mixtas serán administradas por el Estado, el capital privado y los trabajadores.
6. No se estatizarán las pequeñas y medianas empresas mineras, industriales, agrícolas y comerciales.
7. Se crean las “Empresas de trabajadores”.
8. Se creará un tribunal encargado de conocer los reclamos sobre discriminaciones en empresas mixtas y privadas.
9. Se destina el 50% de los anuncios públicos a medios de comunicación no estatales (9).

En resumen, la DC consigue lo esencial de sus reivindicaciones; el gobierno obtiene una lista de las empresas que pasarán al área social y una expectativa de “distensión”. Allende propone a la directiva de la DC un acuerdo legislativo (10): la UP con la DC enviarán simultáneamente proyectos de ley incluyendo las empresas nacionalizadas y las “de trabajadores”.

A fines de junio, el Senado debe votar los vetos del Ejecutivo al proyecto de reforma constitucional “Hamilton-Fuentealba”. El presidente de la DC, Renán Fuentealba, debía

instruir a sus senadores de que postergaran la votación ya que el proyecto quedaría caduco una vez aprobadas las leyes concertadas. Todo fue preparado por el Ejecutivo (11).

Pero Eduardo Frei, desde Europa, envía instrucciones perentorias de no llegar a ningún acuerdo (12) ya que, –apunta su biógrafo–, no cree en absoluto en el gobierno y siempre pensó que cualquier negociación con éste era una forma de engaño (13). *Las Últimas Noticias* del 28 de junio titula: “Frei disgustado por diálogo con el gobierno”.

Los senadores DC Juan Hamilton y Rafael Moreno, ignorando los acuerdos alcanzados por la directiva de Fuentealba y alineados con Frei, salen de la sala para evitar el quórum necesario para postergar el voto de los vetos. Igual que Luis Bossay de “izquierda radical”. Lo que marca el fracaso de las negociaciones. Pocas semanas después la DC forma la “Confederación Democrática” con el derechista Partido Nacional.

El boicot al acuerdo revela con elocuencia donde reside el poder en la DC. Pese a la desautorización pública, el presidente del PDC no intenta retomar la negociación ni sancionar a los senadores transgresores. Simplemente se resigna. La célebre sentencia mexicana *aquí vive el presidente, pero el que manda vive enfrente* (14) se aplica a la posición de Fuentealba y de Frei en la DC. ■

1. La VOP, un grupo de menos de 20 miembros. El subdirector de Investigaciones Carlos Toro presenta en sus memorias indicios de manipulación.

2. Garcés Joan, 1971, 1970. *La pugna política por la presidencia en Chile*, Ed. Universitaria.

3. La gran minería del cobre, hierro, salitre, carbón y de otros minerales que la ley señale; seguros; transporte ferroviario, aéreo y marítimo, de pasajeros y de carga; correo y telégrafo; transmisión y distribución de electricidad (salvo cooperativas); producción y distribución de gas natural o licuado; extracción, producción y refinación de petróleo; producción de cemento, acero, salitre y yodo; industria química pesada; y producción de armamentos y explosivos.

4. “Declárense nulos y sin valor alguno los actos o convenios ejecutados o celebrados por el Estado, los organismos o entidades que lo integran, que están bajo su control o que de él dependen, a contar del 14 de octubre de 1971 para adquirir acciones o derechos de o en personas jurídicas de derecho privado con el fin de nacionalizar o estatificar empresas”

5. Arriagada, 1974, 266

6. Punto Final 170, 7/11/72, suplemento

7. Felipe Amunátegui informa el 4 de mayo a Arnold Isaacs de la embajada de EEUU y a Richard Schwartz de USAID, de su plan de lanzar una “campaña intensiva de rumores” atacando la “imagen y credibilidad de Allende como demócrata” (Tania Harmer, 2013, 208.)

8. Gumucio, 1994, 211

9. Tapia Valdés Jorge, 1977, *Sobre la factibilidad y el fracaso de la vía chilena al socialismo, in Chile: lecciones de una experiencia*, <http://blest.eu/biblio/gil/index.html>

10. Garcés, 2013, *Allende y la experiencia chilena*, 283

11. Tapia, 1977

12. Frenz, Helmut, 2006, *Mi vida chilena: solidaridad con los oprimidos*, LOM, 104

13. Gazmuri, 2000, 818

14. Entre 1928 y 1934 México fue gobernado por tres presidentes débiles –Emilio Portes, Pascual Ortiz y Abelardo Rodríguez–, pues el poder real lo detenta el ex presidente Plutarco Elías Calles. Los vecinos, al pasar frente al palacio de Chapultepec, sede del Ejecutivo, pronunciaban esta frase, mirando la residencia de Calles, situada enfrente.

*Historiador. Publicado en la edición chilena de *Le Monde Diplomatique*, mayo 2018.

La importancia de la Ingeniería en la sociedad chilena

por Dr. Cristian Vargas R.*

Revolución tecnológica, producción de energías limpias, energía solar, hidrógeno verde. Escuchamos, desde hace tiempo, hablar de estos temas pero hoy, más que nunca, sentimos que la avalancha se aproxima y que sus características serán absolutamente transformadoras para el mundo y sus habitantes.

Para la ingeniería, estos períodos de cambios ya se han vivido en siglos pasados y han permitido probar las mejores ideas para esos desafíos que, dentro de la historia universal, son percibidas como revoluciones sociales e industriales. Y nuevamente nos toca enfrentar agobiantes irrupciones y consecuencias desconocidas, lo que aumenta la incertidumbre y la desconfianza, tanto en los mercados como en la ciudadanía. Como nunca, la ingeniería debe posicionarse en medio de ambas y proponer soluciones basadas en ciencia y tecnología pero que involucren la componente social, ambiental y económica, para enfrentar los desafíos de los combustibles fósiles, la desertificación, acceso al agua, la desalinización, la automatización y varias aristas más que ya se dejan sentir en diferentes latitudes.

Y en este sentido, la ingeniería siempre ha jugado un papel crucial en la sociedad chilena. A lo largo de los años, el país ha desarrollado un sólido sistema de formación en ingeniería, que ha producido algunos de los ingenieros y empresarios más innovadores de América Latina. La Escuela de Artes y Oficios, la Universidad Técnica del Estado y la Universidad de Santiago son instituciones que han jugado un rol importante en la configuración del panorama de la ingeniería en Chile.

La Escuela de Artes y Oficios, fundada en 1849, fue la primera institución en Chile en ofrecer educación técnica formal en áreas como ingeniería, arquitectura y diseño. Desempeñó un papel fundamental en la construcción de algunos de los proyectos de infraestructura más importantes de Chile, incluido el primer ferrocarril del país. La escuela fue fundamental en el desarrollo de la fuerza laboral de ingeniería del país y en la creación de una cultura de innovación y espíritu empresarial que ha continuado hasta el día de hoy.

En 1947, la Escuela de Artes y Oficios se fusionó con varias otras escuelas técnicas para formar la Universidad Técnica del Estado. Esta nueva institución amplió el alcance de la educación técnica en Chile, ofreciendo títulos en áreas como minería, metalurgia e ingeniería eléctrica. La universidad desempeñó un papel importante en la industrialización del país, creando una generación de ingenieros capaces de construir y operar instalaciones de fabricación complejas. Además, fue un motor de cambio social en Chile. Durante el siglo XX, la universidad jugó un papel fundamental en los movimientos políticos y sociales del país. En las décadas de 1960 y 1970, la universidad era un semillero de activismo político, con estudiantes y cuerpo académico que abogaban por la justicia social y la igualdad. Este activismo, forjado entre ingenieros e ingenieras, vieron en su trabajo una forma de aportar a una mejor calidad de vida de chilenos y chilenas.



Matias Santa María Cea, *Sin título*, 2013 (Insta: @matiassantamariace)

Posteriormente, en 1981 y como consecuencia de la reforma de la educación superior, la casa central de la UTE se convirtió en la actual Universidad de Santiago, una institución que sigue contribuyendo significativamente al desarrollo de la formación en ingeniería en Chile. Los programas de ingeniería de la universidad se encuentran entre los más prestigiosos del país, y sus graduados y graduadas han hecho contribuciones significativas a la sociedad, en campos que abarcan desde la infraestructura, hasta la energía renovable, inteligencia artificial y biotecnología.

Hoy, la formación en ingeniería en Chile está tomando relevancia en otra arista actual y fundamental: crear una cultura de innovación y emprendimiento que ha prosperado en la última década. Observar el entorno, a medida

que los avances tecnológicos continúan, permite identificar necesidades reales y así, la forma en que trabajan los futuros profesionales en las aulas, transforma el rol que la juventud en formación desempeñarán en el desarrollo de nuevas soluciones para enfrentar los desafíos del futuro: sistemas de energía sostenible hasta ciudades inteligentes y transporte autónomo, las y los ingenieros estarán a la vanguardia de la innovación.

Además de los avances tecnológicos, el impacto de la ingeniería en la sociedad se está extendiendo a la responsabilidad social y ambiental y ya está convocando a sus futuros profesionales para que aborden temas relacionados con la sustentabilidad, asegurando que las soluciones que desarrollen sean equitativas y respetuosas con el entorno natural.

El futuro de la ingeniería en Chile es promisorio, con oportunidades de innovar y emprender en diversos campos. El sistema de educación en ingeniería del país ya ha producido una generación de ingenieras e ingenieros talentosos y existe un potencial significativo para el crecimiento y desarrollo continuo. Además, la profesión está madura para crecer en siguientes direcciones, a medida que el país continúa invirtiendo en infraestructura, energía renovable y tecnología. Para aprovechar plenamente el potencial de la ingeniería en Chile, es importante garantizar que la profesión sea diversa, inclusiva e innovadora. Esto requiere invertir en programas de educación y capacitación que promuevan las habilidades STEM y el pensamiento crítico, así como apoyar la investigación y el desarrollo en campos emergentes, como la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías sostenibles.

Promover la diversidad de género en la ingeniería puede tener numerosos beneficios, tanto para las ingenieras y los ingenieros individuales como para la profesión en su conjunto. La investigación ha demostrado que los equipos diversos son más innovadores, productivos y efectivos en la resolución de problemas y se ha avanzado en cuanto a aumentar el número de mujeres ingenieras, lo cual es un estímulo para ayudar a acabar con los estereotipos y los sesgos en la industria, haciéndola más accesible y atractiva para personas de todos los orígenes.

En general, aumentar la diversidad de género y promover la participación femenina en la ingeniería en Chile no es solo una cuestión de justicia social, sino también un imperativo estratégico para el éxito futuro de la profesión. Al crear más oportunidades y sistemas de apoyo para las mujeres en los campos STEM, Chile puede fomentar una profesión de ingeniería más innovadora, inclusiva y sostenible para las generaciones venideras.

Para aprovechar este potencial, es esencial fomentar una cultura de inclusión, innovación y espíritu empresarial dentro de la comunidad de ingenieros e ingenieras. Esto se puede lograr brindando acceso a financiamiento y recursos para nuevas empresas, creando incubadoras y aceleradoras, y promoviendo la colaboración entre la industria, la academia y el gobierno.

En resumen, hoy más que nunca la ingeniería y la ciencia están demostrando que incluir sus miradas es necesario para desarrollar políticas públicas efectivas. Todas estas transformaciones están listas para desplegarse en cualquier sociedad y las ingenieras e ingenieros que estamos formando serán quienes lideren este proceso, desarrollando e implementando los cambios tecnológicos e impactando a la sociedad completa. Nuestra tarea consiste en formarles con la visión de las transformaciones que les tocará enfrentar, dotarlos de las herramientas más avanzadas para que desarrollen capacidades, pero también, ofrecerles ser actores creativos, resilientes, empáticos y éticos. ■

*Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Santiago de Chile.

Francia: un análisis en cinco puntos

por Rodrigo Arenas*

1. Desde principios de 2023, Francia es el escenario de uno de esos movimientos sociales de los que tiene la reputación y el secreto. Movilizados contra (otra) nueva reforma periódica del sistema de pensiones, los ocho principales sindicatos que representan a los trabajadores y los tres principales sindicatos de estudiantes han movilizado a sus afiliados, así como a una mayoría significativa de la opinión pública, en su oposición. Y han sacado a la calle a millones de franceses. Hasta hoy en día, ya se han celebrado en todo el país una docena de jornadas de acción y manifestaciones, ordenadas y pacíficas, para protestar contra el texto de esta reforma, que prevé un aumento de la duración de la cotización a 43 anualidades y el retraso de la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años.

Después, la utilización por la Primera Ministra de un dispositivo constitucional (el famoso “artículo 49.3”) que le permite forzar la decisión del Parlamento poniendo en juego la confianza del Gobierno, provocó manifestaciones espontáneas más violentas. Y desencadenó una espiral de radicalización creciente y mutual, entre un movimiento social, por un lado, que exige que se le escuche y se le haga justicia, y un gobierno, por otro lado, que hace oídos sordos a la protesta popular que denuncia como ilegítima e irresponsable. De la calle a las instituciones, y en el rechazo mutuo de la falta, se ha cristalizado una verdadera “crisis democrática”, crisis que la validación de la ley por el Consejo Constitucional el 14 de abril no ha hecho más que prolongar.

Pero ¿en qué consiste realmente esta reforma de las pensiones que está poniendo a una parte de Francia en huelga y en la calle? Según el Gobierno, se trata de anticipar el futuro deterioro de las cuentas públicas y hacer frente a un futuro déficit de este sistema de pensiones de reparto al que los franceses han mostrado su apego desde principios del siglo XX –y que defienden ferozmente, como en 2019 contra la introducción de un “sistema de puntos” basado en el modelo escandinavo. Sin embargo, el Consejo de Orientación de Jubilación, organismo independiente cuya experiencia es reconocida por todas las partes interesadas, no parece compartir el pesimismo del Gobierno francés. El pasado mes de septiembre, el Consejo estimó que en la mayoría de los escenarios previstos no hay una “dinámica incontrolada de los gastos de pensiones”. En 2021, también consideraba que las pensiones seguían una “trayectoria controlada” hasta 2070.

Aunque se prevén déficits pequeños y temporales en los próximos años, son principalmente consecuencia de reformas anteriores que redujeron unilateralmente la financiación de la seguridad social. Según la opinión de los expertos, y de sus oponentes a derecha e izquierda del gobierno, se trata en realidad de una reforma “paramétrica”. El gobierno disponía de tres variables: el importe de las cotizaciones patronales, el importe de las pensiones y la duración de las cotizaciones. De forma arbitraria y puramente contable, para pagar la reducción de un déficit temporal a partir de 2027, eligió mantener en activo dos años más a las categorías de trabajadores más frágiles: aquellos cuya pensión (ya cuestionada en las reformas anteriores) hace que cada año de trabajo sea más penoso y más costoso; y las mujeres, cuyas carreras son más discontinuas, más incompletas y peor remuneradas.

2. Dramatizando la secuencia por razones tácticas, el gobierno pretende así que esta reforma salvaría al país de la ruina y la quiebra. Una burda exageración de la insostenibilidad de la deuda pública generada por las medidas adoptadas para amortiguar la crisis sanitaria y energética. Pero al desprecio por el ser humano, desencarnado por los agregados estadísticos, y al desprecio social por las clases trabajadoras, convocadas a trabajar más para compensar unos déficits que no son suyos, el Gobierno ha añadido también el desprecio por la democracia, reducida al respeto de unas pocas disposiciones constitucionales y a un respeto por la legalidad desconectado de la legitimidad política de su acción. Esta implacabilidad sólo puede incitar a los observadores a buscar en otra parte que en los

argumentos oficiales las motivaciones profundas de esta reforma. Sin aventurarnos demasiado, podemos sospechar que son exactamente las contrarias de las que se han enunciado. En realidad, sólo se trata de preservar este precioso sistema de reparto, herencia de los modelos bismarckianos inventados por la Europa continental a finales del siglo pasado, cuando la última revolución industrial y el desafío socialista al capitalismo industrial estaban en pleno apogeo.

Lo que realmente está en juego en esta tragedia es una financiarización encubierta. Tras el pretexto del aumento de la esperanza media de vida –cuestionable porque olvida la reciente inversión de la tendencia y la toma en consideración de la morbilidad–, las consecuencias nefastas de este aumento de la edad de jubilación son numerosas. En un mercado laboral francés bajo presión, donde el empleo de las personas mayores ya es uno de los más bajos de Europa, el principal efecto será alargar el periodo de inseguridad entre el empleo y la jubilación. Para las mujeres, cuyas pensiones ya son inferiores a las de los hombres, para los más modestos, para las clases trabajadoras, el espectro de la precariedad se hace más amenazador. Francia, junto con Italia, fue uno de los últimos países en los que el Estado asumió la misión de corregir las desigualdades de estas poblaciones, donde son muy fuertes. Esta reforma podría marcar el fin de una excepción francesa.

La incertidumbre sobre los importes finales de las pensiones, e incluso sobre su pago a largo plazo, mantiene un sentimiento creciente de amenaza a la “vejez”. Ante esta inquietud generalizada, es muy probable que los franceses recurran al ahorro privado y a la capitalización complementaria, sobre todo las clases medias que disponen de medios financieros. Los fondos de pensiones, principalmente estadounidenses, están al acecho desde los primeros pasos de la reforma. No se equivocaron los manifestantes del 6 de abril, que tomaron simbólicamente las oficinas parisinas de la sociedad de inversión americana Blackrock. Aún más sutil que la “estrategia de choque”, asistimos a un artero intento de privatizar el sistema de pensiones “a la Chomski”: debilitar la fiabilidad de la oferta pública en la mente de la gente hasta el punto de hacerla fracasar a los ojos de la opinión pública, con el fin de incitar a la gente a pasarse a alternativas privadas.

3. Esta secuencia de doble crisis democrática y social aporta dos grandes enseñanzas. En primer lugar, al conducir hábilmente a las clases medias a alejarse progresivamente de la solidaridad nacional y, por tanto, del contrato social en el que se basa la República desde hace dos siglos, este gobierno refuerza las relaciones de dominación en el seno de la sociedad francesa. Cuando toda la energía de la vida cotidiana se dedica a perseguir los fantasmas de la precariedad, queda muy poca para la contestación del orden social. Todavía más cuando la doctrina del mantenimiento del orden es cada vez más violenta, lo que hace que las protestas sean tan peligrosas físicamente como costosas económicamente. Heredero de una representación de la sociedad en la que los pobres son responsables de su destino, ya que sólo tenían que “cruzar la calle para encontrar un trabajo”, Emmanuel Macron trona en la cima de una gran pirámide.

Faraón lleno de su propio poder, representa hasta la caricatura esa Francia de la meritocracia, convencida de que sólo debe su éxito y su lugar en el orden político a su propio talento, y desde luego no a las condiciones sociales y culturales en las que ha nacido y se ha educado. Noble provinciano a la manera de M. Homais, el farmacéutico pedante del que Flaubert se burla en *Madame Bovary*, el presidente francés machaca regularmente con su desprecio de clase la Francia de los “Gilets Jaunes”, de las trabajadoras de primera línea y de las procesiones sindicales, este “país que no conoce”. “Heritócrata”, según la bonita fórmula del historiador Paul Pasquali, Emmanuel Macron tiene la sonrisa de una Francia autosatisfecha, segura de su buen derecho, de sus orígenes y de su futuro. Aquella para la que “todo va bien”, porque ha tomado

las decisiones correctas. Tronante en lo alto de la jerarquía de una sociedad con diplomas, esta nueva aristocracia concibe el mundo y las relaciones sociales como una gran cadena alimentaria, mezclada de darwinismo social, donde su dominación es de orden natural. Los más modestos merecen ciertamente consideración y cuidados, pero en forma de caridad que se concede y no como derechos que deben respetarse.

4. La segunda enseñanza es la siguiente: la batalla de las pensiones ya es anticuada, que sea ganada por el movimiento social al final, como lo esperamos, o por el gobierno, como lo tememos. Ésta es un residuo del mundo antiguo y sigue siendo totalmente dependiente de una visión paternalista del Estado e ignora el cambio cultural causado por la revolución digital. La financiarización de las pensiones es una tendencia general de las últimas décadas aunque sea un espejismo. En Chile, por ejemplo, alimentó el neoliberalismo inspirado por los Chicago boys, sin embargo no cumplió ninguna de las grandes promesas de emancipación y enriquecimiento individual que supuestamente debía traer. Después de 40 años, el balance es irrevocable: el trabajador medio cobra apenas el 30% de su sueldo cuando está jubilado, y no el 70% según lo prometido. Casi el 40% de los jubilados chilenos no tienen un plan de pensiones suficiente para vivir y la mayoría de los jubilados viven con menos del sueldo mínimo. Por lo tanto, el Estado debe actuar para paliar estas grandes vulnerabilidades, lo que pesa sobre las finanzas públicas al fin y al cabo –es decir, sobre los contribuyentes, que así terminan pagando dos veces. En resumen, los jubilados no se volvieron más ricos gracias a esta financiarización. La mayor parte de la población ni siquiera benefició de esta y se redujeron las finanzas públicas. Es obvio que solo los mercados de capitales y los gestores de planes de pensiones beneficiaron de la financiarización y que acabaron disponiendo de decenas de miles de millones de dólares de liquidez para participar en el gran casino de las finanzas globalizadas.

Sin embargo, a pesar de los riesgos de pérdidas evidentes desde la crisis de las hipotecas (“subprimas”) en 2008, los chilenos, como muchos otros en el mundo, parecen seguir creyendo en la fábula de un sistema financiero protector contra las violaciones de un Estado corrupto e indigno de confianza, en opinión de muchos. Así, durante la crisis sanitaria, tuvieron la potestad de usar sus ahorros de jubilación a título derogatorio. Esto les permitió individualmente padecer las dificultades financieras causadas por la paralización brutal de la economía mundial. En Alemania, o en Suiza, en donde las reformas de las últimas décadas han aumentado la cuota de capitalización en la financiación de las pensiones, son las personas con los sueldos más altos las que suelen optar por la capitalización, evidentemente.

En este mundo, en el que el poder público resulta globalmente limitado por la influencia de los mercados y puntualmente desacreditado por los comportamientos de quienes lo representan, la financiarización simboliza entonces para las clases medias, e incluso para algunas categorías más modestas, una alternativa verosímil a los dispositivos de solidaridad nacional. Esta ilusión de la salvación individual, sobre todo para los que tienen medios, no es más que otra forma de creencia en la meritocracia, en definitiva. Los más dotados hacen lo que quieren, y los demás, lo que pueden.

El debilitamiento progresivo de nuestros relatos colectivos no se remonta al advenimiento del reino digital. El cuestionamiento de las fuerzas unificadoras que representaban el trabajo, la familia, la patria o la religión se cumplió en nombre de los valores de libertad, igualdad y lucha contra todos los poderes. Las redes sociales y su poder unificador permiten –de manera puntual, es cierto– las movilizaciones colectivas de las pequeñas partículas fundamentales en las que nos hemos convertido –causando aquí y allá las primaveras árabes, las revueltas de los chalecos amarillos o la reunión activa de ciudadanos afectados por las mismas causas. Sin embargo, la digitalización acelerada de nuestras

relaciones sociales durante las dos últimas décadas ha precipitado considerablemente la atomización del cuerpo social. Los estudios lo destacan regularmente: las constataciones son alarmantes.

Todos nos dirigimos cada vez más a nosotros mismos, esclavos de un universo muy amplio y muy estrecho a la vez, del cual somos el centro absoluto. Los grandes cambios causados por la transformación digital del mundo sobrepasan nuestras formas de pertenencia colectiva. Literalmente borran el espacio y el tiempo, contribuyendo a un verdadero aplanamiento del mundo. Dañan nuestras mentes, nuestras representaciones, nuestras realidades íntimas, nuestras relaciones interpersonales, nuestras percepciones, y dañan hasta la carne de nuestros cuerpos, que ya es casi incómoda para navegar en los universos virtuales a los que se nos promete pronto el acceso generalizado –como el Metaverso en el que es posible tener una vida paralela y virtual completa. Pero no es necesario conectarse a la Matriz para notar diariamente esta evolución estructural. La desmaterialización es general y aparece evidentemente en la economía: en la actualidad, más del 90% de las riquezas producidas en el mundo son inmateriales.

5. Este cambio espectacular, por supuesto, no ha terminado. Pero por eso la oposición actual a la financiación de las pensiones es necesaria y ya anticuada. Necesaria, porque cuando un gobierno decide que la sostenibilidad de la solidaridad nacional es la responsabilidad de las categorías populares ya cansadas y la de aquellas y aquellos sin los cuales la economía no funcionaría, la injusticia social no debe ser aprobada. Anticuada, porque mientras persista esta ilusión de que los mercados financieros globalizados podrían cumplir la misión de solidaridad nacional de manera más eficaz que el poder público, los responsables políticos olvidan lo esencial. En la era digital, no es el trabajo extendido de las masas trabajadoras ni los mecanismos del mercado que permitirán establecer una sociedad solidaria estable. Nuestros sistemas fiscales y la organización de la seguridad social siguen girando fundamentalmente en torno a los intercambios y al valor añadido generado en un territorio. Pero, en la actualidad, la creación de riqueza se resbala a los Estados en gran parte. La cuestión que deberíamos plantear colectivamente es ¿cómo permitir al poder público sacar una parte justa de esta riqueza? En una economía mundial dominada por los flujos (financieros, energéticos o de contaminación) las existencias (valor añadido, trabajo, patrimonio inmobiliario) ya no deben ser el fundamento de la base imponible. La idea de un impuesto “Tobin” sobre las transacciones financieras es antigua. Se enfrenta a muchos obstáculos desde el principio. La opacidad del sistema financiero internacional conviene tanto a los bancos, las empresas multinacionales, las redes mafiosas, los servicios secretos de los Estados como a los poseedores de las mayores fortunas mundiales. Para que funcione esta idea, habría que reconsiderar dos aspectos: en primer lugar, basarla en la tecnología de la blockchain, que permite una transparencia total de los flujos y, en segundo lugar, ampliarla a todas las transacciones financieras que se encuentran bajo la jurisdicción nacional de los Estados. Los cálculos de Marc Chesnay, uno de los inventores y promotores de este “micro impuesto” adaptado al reino de la economía inmaterial, sugieren que incluso con un tipo bastante bajo aplicado al conjunto de las transacciones financieras anuales en un país como Francia, o Suiza, se cubrirían todas las necesidades sociales. En otras palabras, ya va siendo hora de mirar más allá de la mera resistencia a las reformas injustas del gobierno de Emmanuel Macron –y de todos los demás. Organización, misiones y financiación: es el Estado en la era digital el que debemos reconsiderar integralmente. Con esta condición, nuestras luchas colectivas como resistencia desesperada podrán convertirse en propuestas concretas para un mundo mejor, para los trabajadores y para la sociedad entera. ■

*Rodrigo Arenas es diputado francés, miembro de La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale (NUPES) franco-chileno.

Una estrategia para deshacerse de la influencia de Estados Unidos

En América Latina, el no alineamiento al servicio de la paz

por Christophe Ventura*

“Tenemos que ver la manera en que Argentina se convierta en una puerta de entrada para que Rusia ingrese en América Latina de un modo más decidido”. Cuando el presidente peronista de centroizquierda argentino Alberto Fernández pronunció esas palabras, al final de su encuentro privado con Vladimir Putin en Moscú, el 3 de febrero de 2022, ignoraba que Rusia estaba a punto de invadir militarmente a su vecino ucraniano, sin ningún reparo por el derecho internacional, en particular por los principios de no agresión, de no recurso a la fuerza en la solución de los conflictos y de no violación de la integridad territorial de los Estados. No obstante, al menos desde 1997, fecha de la primera declaración conjunta de China y Rusia en ese sentido ante las Naciones Unidas (1), Moscú pretende atender a esos principios en el marco de su promoción de un “nuevo orden internacional multipolar”. Una perspectiva que el lado argentino siempre suscribe plenamente.

En América Latina, zona de influencia tradicional de Estados Unidos desde finales del siglo XIX, esta voluntad de refundar un sistema internacional liberado de la influencia de Washington y sus aliados europeos es, en efecto, muy popular. Constituye la hoja de ruta de la mayoría de los gobiernos progresistas de la región desde el comienzo de los años 2000 y, en ese marco de análisis, las capitales latinoamericanas consideran a Rusia como un freno a las pretensiones hegemónicas de Washington.

En febrero de 2022, durante su escala en Moscú en camino a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, el inquilino de la Casa Rosada tenía como exclusiva preocupación sacar a su país de una profunda crisis económica y social, agravada por la pandemia de Covid-19. Fernández no ignoraba que el agravamiento de esta crisis corría el riesgo de comprometer las posibilidades del bando peronista en la elección presidencial de octubre de 2023. En tal contexto, su prioridad era aflojar la presión de una deuda que su predecesor conservador Mauricio Macri contrajo en 2018 con el Fondo Monetario Internacional (FMI) aceptando severas medidas de austeridad. Ahora bien, Fernández lo sabe: quien dice FMI, dice Washington.

Diversificar alianzas

El presidente argentino apuntó por lo tanto hacia Rusia, un país con el que Argentina tiene un acuerdo de “asociación estratégica integral” desde 2015 y gracias al cual sus conciudadanos pudieron recibir las primeras dosis de vacunas (Sputnik V) en diciembre de 2020, en el momento más dramático de la pandemia de Covid-19. Durante ese período, una decena de otros países latinoamericanos también obtuvieron esas vacunas. En ese entonces, Estados Unidos brillaba por su discreción en materia de cooperación sanitaria en la región. Por lo tanto, fue en un clima de acercamiento ruso-argentino que el presidente Fernández declaró a los periodistas presentes, no sin segundas intenciones con respecto a la administración estadounidense: “Estoy empecinado en que Argentina tiene que dejar esa dependencia tan grande que tiene con el Fondo y con Estados Unidos. Y tiene que abrirse camino hacia otros lados. Y ahí es donde me parece que Rusia tiene un lugar muy importante”.

Esta secuencia diplomática en Moscú es un emblema de la naturaleza de los vínculos desarrollados por un gran número de países latinoamericanos con Rusia y con China desde el co-

mienzo de los años 2000. Al igual que muchos otros países del Sur, para ellos se trata de diversificar sus alianzas comerciales, políticas, militares y tecnológicas, para poder jugar unos contra otros y gozar de una relación de fuerzas más favorable en el seno de un sistema internacional del cual cuestionan más la jerarquía de los poderes que las estructuras económicas.

En este contexto, Rusia tiene ventajas sólidas. Desde la época zarista, estableció relaciones diplomáticas con Brasil, que acababa de lograr la independencia (1828), con Uruguay (1857), con Argentina (1885) y con México (1890). En el siglo XX, la crisis de los misiles en Cuba, en 1962 (2), en plena Guerra Fría, constituyó sin dudas la cúspide del acercamiento con la Unión Soviética. Si bien la disolución de esta, en 1991, rompió ciertos vínculos, otros nuevos se tejieron durante los años 2000 gracias a cuatro factores: el giro a la izquierda de América Latina (la mayor parte de cuyos dirigentes desean mantener a Washington a distancia de los asuntos regionales); el relativo abandono de la región por parte de Estados Unidos, atascado en sus guerras en Afganistán y Medio Oriente; la integración de China en la Organización Mundial del Comercio (OMC). Por último, con la llegada al poder de Vladimir Putin, promotor de un proyecto de restauración progresiva del poder ruso en la escena internacional, los vínculos entre los países latinoamericanos y Rusia se estrecharon en varios sectores –infraestructura, explotación minera, sector energético (petróleo, gas, energía nuclear civil), aeronáutico, universitario...–, aun cuando el volumen general de los intercambios comerciales sigue siendo modesto (menos del 1% del total de los intercambios de los países latinoamericanos en el mundo).

Cientes estratégicos

En el ámbito militar, Venezuela (80% de las ventas de armas de Moscú en la región), Cuba y Nicaragua son los clientes estratégicos de Rusia. Pero, en la materia, esta última coopera también con otros países, como Brasil, Colombia o Perú, a quien equipa (helicópteros, aviones, sistemas de defensa). En el plano comercial, Brasil y México constituyen los dos principales socios de Moscú en la región (más del 50% de sus intercambios). Las relaciones con Brasil despegaron en el marco de la organización BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Así, Brasilia se convirtió en el primer exportador latinoamericano hacia el mercado ruso (soja, azúcar, carne, minerales). Moscú asegura al sector agrícola estratégico de Brasil el suministro de una parte determinante de los fertilizantes que necesita. Desde 2015, Rusia también mantiene una relación diplomática oficial con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y sus treinta y tres países miembros.

Como Argentina o Brasil, dependientes de los fertilizantes rusos, hoy por hoy varios países no pueden apartarse de Moscú en ciertos sectores y ámbitos, particularmente desde la crisis sanitaria mundial que precipitó a América Latina en la “peor crisis económica en 120 años”, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (3). Una crisis a la cual se suman las primeras consecuencias del conflicto en Ucrania, los avances inflacionarios y el encarecimiento de los precios de las materias primas. Estos fenómenos contribuyen al aumento de los costos de producción agrícola, así como a los del consumo energético de varios países dependientes de sus importaciones de hidrocarburos

en América Central, en el Caribe y en América del Sur (Chile). El contexto es más favorable para los países productores y exportadores de hidrocarburos o de materias primas (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Paraguay o Uruguay). Por lo demás, al aumentar varias veces desde el comienzo de la guerra sus tasas de interés para frenar la inflación, la Reserva Federal estadounidense (FED) provocó un reflujo de los capitales internacionales desde América Latina hacia los mercados estadounidenses.

En este difícil contexto, Ucrania padece un serio déficit de peso (económico) y de notoriedad (política) con respecto a su adversario ruso... salvo en un tema que no le da una ventaja espontánea ante los gobiernos de izquierda de la región: Cuba. En efecto, desde 2019, Kiev se abstiene sistemáticamente, en el marco de su alianza con Washington, en las votaciones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que exigen el final del embargo impuesto desde 1962 por Estados Unidos a La Habana.

En América Latina, el gobierno ucraniano en realidad no tiene más que un solo apoyo. El de Alejandro Giammattei, presidente de derecha de Guatemala. El 25 de julio de 2022, este último fue a Kiev, convirtiéndose en el primer –y único– dirigente latinoamericano que realizó ese viaje para brindar su apoyo a Volodimir Zelensky. Se trataba sobre todo de enviar un mensaje de lealtad a Estados Unidos en tanto su gobierno está distanciado de la administración estadounidense debido a varios temas (de corrupción particularmente) y se vislumbran las elecciones generales de junio de 2023. Si bien Giammattei cuenta así con recibir los dividendos de su “compromiso”, Washington no encuentra ningún país latinoamericano dispuesto a aplicar sanciones contra Moscú y menos aun a enviar armas a Kiev –a pesar del deseo formulado por la generala Laura Richardson, comandante militar del Comando Sur de Estados Unidos–.

Estos rechazos se expresan hasta en los territorios centroamericanos bajo influencia de Washington. El Salvador, dirigido por el presidente populista-autoritario Nayib Bukele, caído en desgracia en Washington, suma sistemáticamente su voz a los países que, como Bolivia y Cuba –habituales adversarios de Estados Unidos–, se abstienen en las resoluciones de las Naciones Unidas que condenan a Rusia. Hoy por hoy, Nicaragua forma parte del grupo de países que apoyan directamente a Rusia (con Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea, Mali y Siria), tras haberse abstenido durante la votación que se llevó a cabo el 28 de febrero de 2022 en la ONU. Venezuela, por último, no forma parte de esas consultas, dado que no está al día con sus cuotas. Su diplomacia navega entre fidelidad al aliado ruso y recuperación del contacto con Washington con vistas a una hipotética normalización, en el marco de la nueva situación creada por la crisis energética mundial.

Los votos latinoamericanos están determinados por la combinación de varias lógicas. En primer lugar, la fidelidad a sus posiciones diplomáticas tradicionales: respeto del derecho internacional, de la integridad de las fronteras y de la soberanía de los Estados, rechazo del unilateralismo y del recurso a la fuerza en la solución de conflictos, búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos, que conducen a una posición de no alineamiento. Luego, su nivel de desconianza coyuntural con respecto a Estados Unidos y las potencias occidentales. Por último, sus intereses políticos y económicos nacionales, deter-

minados de manera pragmática, en el seno de un orden internacional incierto y en recomposición, en el cual su relación con China constituye una brújula. Sobre estas bases, la gran mayoría de las capitales condenó la invasión rusa en las Naciones Unidas, pero no votó los textos que exigían solidaridad con las sanciones tomadas o contempladas contra Moscú.

No obstante, se torna más difícil apoyar directamente a Rusia en tanto, hoy por hoy, su gobierno pretende utilizar los mismos métodos que Washington para solucionar sus conflictos en su propia zona de influencia histórica... “La invasión de Ucrania encuentra sus antecedentes en la expansión de la OTAN hacia Rusia, pero ello no debe conducir a legitimar la invasión militar de un país por otro”, explica Celso Amorim, asesor especial del presidente Luis Inácio Lula da Silva para las cuestiones internacionales y promotor, a su lado, de una propuesta de creación de un “grupo de países por la paz” entre Rusia y Ucrania, bregando por un cese del fuego y una solución negociados.

Proceso multilateral

Presentada en febrero de 2023 en América Latina, en Washington, en Europa –particularmente en Francia, Alemania, España o Portugal–, en Moscú, en Kiev, en el G20 bajo la presidencia india, en Pekín y en Abu Dhabi, esta iniciativa pretende, para aumentar su poder y alcanzar sus objetivos, iniciar un proceso multilateral que convoque, además de a China, a otros países del Sur miembros del BRICS y del G20 que tengan relaciones con el conjunto de los actores (occidentales y no occidentales) del conflicto. Entre ellos, Indonesia, India (quien asumirá la presidencia del G20 en 2023) y Sudáfrica (anfitrión de la próxima Cumbre del BRICS en 2023 y a cargo de la presidencia del G20 en 2025). En este proceso diplomático, Brasilia anticipa también la presidencia rusa del BRICS en 2024 y la suya del G20 en 2024 y del BRICS en 2025.

Esta iniciativa por la paz, que esquivo al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, podría, según el presidente Lula, desembocar *in fine* en la creación de un “G20 político”, a cargo, a la larga, de diversas problemáticas internacionales (clima, paz, economía, tecnología digital, democracia...). Desde su punto de vista, tal proceso debería permitir el surgimiento de nuevos formatos de deliberación, más favorables a los países del Sur.

¿Logrará tal proyecto suscitar interés en el seno de las potencias occidentales? Hasta ahora, Estados Unidos y la Unión Europea rechazan la legitimidad de una mediación brasileña en la guerra en Ucrania, acusando a Brasilia de ingenuidad y de demasiada cercanía con Moscú y Pekín. Sin embargo, la iniciativa del presidente brasileño es una de las únicas que se diferencian del maximalismo prevaleciente, a costa de la paz mundial, en Bruselas y en las capitales europeas, en Washington, en Kiev y en Moscú. ■

1. “Declaración conjunta ruso-china sobre un mundo multipolar y la creación de un nuevo orden internacional”, 15-5-97, <https://digitallibrary.un.org/>

2. Danielle Ganser, “Retour sur la crise des missiles à Cuba”, *Le Monde diplomatique*, París, noviembre de 2002. Ver también Peter Kornbluh, “La negociación secreta de los misiles en Cuba”, *Le Monde diplomatique*, edición Cono Sur, Buenos Aires, enero de 2023.

3. Eva Vergara, “Pandemia es peor crisis en América Latina en 120 años”, *Cepal*, Associated Press, Nueva York, 16-12-20.

*Director de Investigaciones en el Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas (IRIS, París) y autor de *Géopolitique de l'Amérique latine*, Éditions Eyrolles, París, 2022. Traducción: Micaela Houston

Guerra Fría 2.0

Historia secreta de la inteligencia artificial

por Evgueny Morozov*

¿Quién ganará la batalla mundial de los algoritmos y de las máquinas “que aprenden”? ¿Estados Unidos o China? Detrás de estas preguntas se esconde una realidad más pragmática. Para muchas empresas de Silicon Valley, es una buena oportunidad para captar cientos de miles de millones de dólares de subvenciones públicas a riesgo de profundizar el enfrentamiento entre Washington y Pekín. Entre intensos *lobbies* y reminiscencias de las pasadas confrontaciones entre bloques, la geopolítica de la inteligencia artificial también es un asunto de mucho dinero.

“La Guerra Fría terminó”, proclamaba en 1988 un folleto publicitario para un curioso videojuego proveniente del otro lado de la cortina de hierro. En la parte de abajo de la tapa incluía una posdata: “... o casi”. Invitando a recoger el “desafío soviético”, el documento anunciaba: “mientras que las tensiones Este/Oeste apenas comienzan a apaciguarse, los soviéticos acaban de anotar un punto decisivo contra los estadounidenses”. Con un fondo rojo vivo, arriba de un dibujo del Kremlin rodeado de figuras geométricas, se desplegaba en grandes caracteres amarillos la palabra “Тетрис”, con el símbolo de la hoz y del martillo en lugar de la letra final. En alfabeto latino, daba “Tetris”.

El folleto, actualmente expuesto en el Museo Nacional de Historia Estadounidense de Washington, era obra de Spectrum HoloByte, el distribuidor del juego en Estados Unidos. Este fabricante de software de Silicon Valley, propiedad del barón de los medios de comunicación británico Robert Maxwell, ya había entendido que el tema de la Guerra Fría podía generar beneficios y supo explotar todos sus códigos – desde la música rusa tradicional hasta las imágenes de cosmonautas soviéticos – para hacer de Tetris un éxito fenomenal en el Estados Unidos de Ronald Reagan (1).

Desde entonces, el presidente de Spectrum HoloByte de esa época, Gilman Louie, se ha convertido en una figura central de lo que algunos en Washington llaman eufóricamente la “Guerra Fría 2.0”: la batalla en curso entre China y Estados Unidos por el control de la economía mundial. Ahora bien, el conflicto, que se extiende actualmente al frente tecnológico e incluso militar, ya no gira en torno a Tetris, sino a la inteligencia artificial.

La carrera de Louie es emblemática de una trayectoria a la estadounidense. A inicios de los años 1980, se hace un nombre en los juegos de simulación de vuelos, que se vuelven tan populares que la US Air Force pide conocerlo. Luego, una de sus empresas aparece en el radar de Robert Maxwell, quien la compra enseguida. Entre una cosa y la otra, a fines de los años 1990 Louie se encuentra a la cabeza de In-Q-Tel, el fondo de capital-riesgo de la Central Intelligence Agency (CIA), una entidad sin fines de lucro que tiene como una de sus principales proezas haber apostado a la tecnología detrás de Google Earth. Y cuando la administración Trump comienza a lamentarse del retraso estadounidense en la carrera tecnológica respecto de China, resurge en el seno de la Comisión de Seguridad Nacional sobre la Inteligencia Artificial (NSCAI), una prestigiosa instancia consultiva presidida por Eric Schmidt, ex director general de Google.

En apenas unos años, Louie y Schmidt avanzan hacia una colaboración mucho más estrecha. El primero toma las riendas de un fondo

apadrinado por el segundo, el America's Frontier Fund (AFF), una estructura sin fines de lucro concebida sobre el modelo de In-Q-Tel y que se propone ayudar a Washington a “ganar la competencia tecnológica mundial del siglo XXI”. El AFF pretende encarnar la solución a una cantidad de otros problemas, ya que promete “redinamizar la industria, crear empleos, estimular las economías regionales y liberar el corazón de Estados Unidos”.

La creación del AFF es una respuesta a la creciente influencia de China en lo que se denomina las “tecnologías de ruptura” o de “vanguardia” como la inteligencia artificial o la informática cuántica. “No se construyen tecnologías de vanguardia en su garaje”, proclama el sitio de Internet del fondo, llevándole la contraria al preciado mito de Silicon Valley del genial emprendedor individual. Entre las novelas de Ayn Rand –vocera del capitalismo individualista (2)– y las subvenciones públicas, el AFF elige a las segundas.

Gritos de alarma

Es bastante divertido que Louie, después de haber usado la Guerra Fría 1.0 para publicitar Tetris, ahora use la Guerra Fría 2.0 para publicitar la inteligencia artificial. ¿A menos que esté utilizando la inteligencia artificial para promover la nueva Guerra Fría? En el Estados Unidos actual, estas dos operaciones retóricas son prácticamente imposibles de distinguir. La única cosa de la que podemos estar seguros es que toda esta publicidad se traducirá en plata contante y sonante.

Para adaptarse a la era de la inteligencia artificial, el eslogan de Tetris debería convertirse en “La nueva Guerra Fría llegó... o casi”; un mensaje grato a los oídos de muchos estadounidenses, desde las empresas de tecnología hasta los subcontratistas de la defensa, pasando por los *think tanks* belicistas.

Todo este discurso no debe ocultar la realidad de ciertas evoluciones ideológicas. Los recientes gritos de alarma respecto al retraso de Estados Unidos en la carrera de la inteligencia artificial parecen haber despertado a sus elites políticas, tranquilamente adormecidas en el país encantado del libre mercado. Escuchándolos, se podría creer que abandonaron los dogmas del consenso de Washington –incluso, a veces, que más bien decidieron unirse al consenso de Pekín–.

En un artículo co-firmado por Schmidt y publicado por *Foreign Affairs* (3) –la biblia del *establishment* de la política exterior estadounidense– descubrimos efectivamente un entusiasmo nuevo por la idea de un Estado fuerte capaz de estimular el desarrollo de la inteligencia artificial. A esto se suma una crítica de los errores políticos pasados: no contentos con denunciar una fascinación por la “globalización” que habría alejado durante demasiado

tiempo a Estados Unidos de las “consideraciones estratégicas”, los autores atacan al sector del capital-riesgo por sus elecciones de corto plazo. La solución para permitirle a Washington alcanzar sus objetivos tecnológicos de largo plazo, afirman, cabe en unas pocas palabras: “subvenciones, préstamos garantizados por el Estado y compromisos de compra”. Va de suyo que los subsidios serían probablemente distribuidos a través de entidades como el AFF, que, contrariamente a las compañías de capital-riesgo convencionales, sabría otorgarlos con la mirada puesta en el futuro.

Por momentos, Schmidt está a un paso de hacer un llamado a una política industrial de gran alcance, pero no cruza el umbral ya que el término sigue teniendo “demasiada connotación”. El nuevo consenso de Washington por el momento se limita a reclamar un aumento de la ayuda pública para el sector privado, la principal justificación que se esgrime es el riesgo de que Estados Unidos pierda la próxima Guerra Fría.

Lo que fue erróneamente interpretado por algunos como el surgimiento del “pos-liberalismo” en realidad presenta todos los atributos del keynesianismo militar de antaño, en el que el aumento de los presupuestos de defensa debía asegurar la victoria contra la Unión Soviética y garantizar la prosperidad económica de Estados Unidos.

Innegablemente, los vínculos entre el Pentágono y Silicon Valley se han reforzado. En primer lugar, el Departamento de Defensa creó un puesto de director de la tecnología digital y de la inteligencia artificial que le fue confiado a Craig Martell, antiguamente encargado del aprendizaje automático en Lyft, la plataforma de vehículos de transporte con conductor (VTC).

Presupuestos militares

Además, y digan lo que digan sus empleados, que cuestionan la moralidad de tales relaciones, las compañías de tecnología continúan teniendo un gran peso en el presupuesto de abastecimiento del ejército. Alphabet tal vez renunció a colaborar con el Pentágono en el proyecto Maven –un sistema de vigilancia que provocó protestas entre sus propios ingenieros–, pero eso no le impidió crear poco después Google Public Service, una entidad que, detrás de su inocente nombre, abastece al ejército con servicios informáticos en la nube (*cloud*).

No se trata de un ejemplo aislado. La *expertise* de Silicon Valley es indispensable para el *establishment* militar si pretende poner en marcha su visión de un sistema que integre al conjunto de datos transmitidos por los sensores de las diferentes fuerzas armadas. Analizadas con ayuda de la inteligencia artificial, estas informaciones luego permitirían elaborar una respuesta coordinada eficaz. A fines de 2022, el Pentágono les adjudicó a cuatro gigantes tecnológicos –Microsoft, Google, Oracle y Amazon– un jugoso contrato de 9.000 millones de dólares para desarrollar la infraestructura de este audaz proyecto (4).

Pero ya no estamos en tiempos de la primera Guerra Fría y es difícil saber en qué medida esta generosidad pública puede “gotear”, en el sentido keynesiano, hacia los ciudadanos comunes. En el sector de la inteligencia artificial, la mayor parte de los costos de mano de obra corresponde a los salarios de los ingenieros estrella –que no son millones sino algunos cientos– y a los innumerables subcontratados a bajo costo que trabajan para entrenar a los algoritmos. Estos últimos, en su mayor parte, ni siquiera están ubicados en Estados Unidos. Así, empresas

keniatis le permiten a OpenAI evitar que ChatGPT, su popular *chatbot*, ofrezca contenidos obscenos.

Las repercusiones económicas de la informática en la nube también quedan por demostrar. Construir granjas de servidores (*data centers*) cuesta increíblemente caro y se traduce principalmente en un alza de los precios inmobiliarios. En cuanto a los costos medioambientales de todas estas tecnologías, están lejos de ser insignificantes. En otros términos, el efecto multiplicador de esta lluvia de dólares podría no ser más que ilusorio.

Más que el retorno del keynesianismo militar, la Guerra Fría 2.0 marcará tal vez al advenimiento del “neoliberalismo militar”, un extraño régimen en el que el continuo aumento de los gastos públicos destinados a la inteligencia artificial y a la informática en la nube profundizará las desigualdades y enriquecerá a los accionistas de los mastodontes de la tecnología.

En estas condiciones, no es para nada sorprendente que tantos de ellos estén carcomidos por las ganas de reiniciar la Guerra Fría. Y nadie trabajó tanto para definir este nuevo consenso como Schmidt (5). El ex director de Google, que pesa unos 20 mil millones de dólares, nunca abandonó los cenáculos de Washington desde su campaña por Barack Obama en 2008. Entre 2016 y 2020, se puso a la cabeza de un comité del Pentágono, el Consejo de Innovación en materia de Defensa (DIB) –una función que lo llevó a visitar un centenar de bases militares estadounidenses alrededor del mundo– antes de asumir la presidencia de la NSCAI. También forma parte desde hace poco de la Comisión de Seguridad Nacional sobre las Nuevas Biotecnologías (NSCEB).

Influencia desproporcionada

Schmidt tiene tantas cosas entre manos que es fácil perder la cuenta. Tiene, por ejemplo, su fondo de capital-riesgo Innovation Endeavors, que brinda generosos financiamientos a *start up* especializadas en inteligencia artificial militar como Rebellion AI (6). Dicho de otro modo, mientras que él y sus socios invertían más de 2.000 millones de dólares en compañías de inteligencia artificial, Schmidt dirigía el trabajo de una comisión gubernamental que recomendaba otorgarle más dinero público a esas mismas compañías. Con lo cual se comprende mejor lo que se escondió detrás de sus alegatos públicos.

La senadora estadounidense Elizabeth Warren de hecho le pidió al Pentágono que esclarezca la naturaleza de las relaciones de Schmidt con el gobierno de Estados Unidos, sugiriendo que el Departamento de Defensa podría haber “fallado en proteger el interés público” al acordarle una influencia tan desproporcionada. Su participación en la comisión sobre las biotecnologías cuando justamente invierte en ese sector –a través de otro fondo de capital-riesgo– provocó asimismo muchos fruncimientos de ceño (7).

Y también está Schmidt Futures, una fundación filantrópica que, cuando se la mira de más cerca, en los hechos es una empresa con fines de lucro. Recientemente dio de qué hablar cuando se descubrió que financiaba los salarios de más de una veintena de empleados del gobierno estadounidense, incluidos puestos vinculados con la definición de estrategias de inteligencia artificial y la regulación del sector de las tecnologías (8). Schmidt (e, indirectamente, Schmidt Futures) incluso ayudó a Martell a convertirse en el Señor Inteligencia Artificial del Pentágono.

¿Cómo es posible que una empresa privada pague los salarios de funcionarios gubernamen-

tales? Gracias a una falla legislativa: ciertas organizaciones sin fines de lucro que, en cuanto tales, pueden recibir plata por parte de compañías privadas, están autorizadas a hacerlo. En este caso, la entidad intermediaria es la Federación de Científicos Estadounidenses, un *think tank* muy conocido cuyos orígenes remontan al proyecto Manhattan. Su actual presidente es un cierto Louie, el hombre que hizo la gloria de Tetris.

El golpe más astuto de Schmidt en su operación de comunicación a favor de la Guerra Fría fue sumar a Henry Kissinger a esta causa, un personaje con reputación de no esquivar la compañía de multimillonarios. Tal vez sea debido a la influencia schmidtiana, pero en todo caso Kissinger, hoy de 99 años, se expresa sobre la inteligencia artificial como un joven de 19 años describiría su primer viaje con LSD. “Pienso que las compañías de tecnología abrieron el camino hacia una nueva era de la conciencia humana”, declaró recientemente en una entrevista, antes de establecer un paralelo con “lo que hicieron las generaciones de las Luces cuando abandonaron la religión por la razón” (9). Entonces debemos creer que Schmidt es nuestro nuevo Voltaire.

Discursos alarmistas

En 2021, Schmidt y Kissinger, ayudados por una tercera lapicera, publicaron un libro-manifiesto dedicado a esta nueva era (10). Allí escribieron que las situaciones “profundamente desestabilizantes” a las que puede dar lugar la guerra de la inteligencia artificial son comparables a aquellas “creadas por los armamentos nucleares”. “¿Debemos esperarnos a que terroristas lleven a cabo ataques usando inteligencia artificial? ¿Serán capaces de hacer creer que provienen de Estados o de otros actores?” Los autores no respondieron a estas preguntas, contentándose con repetir una y otra vez los devaluados argumentos sobre el carácter inevitable de un “ciber-11-de-Septiembre” –el grito de adhesión que ya ha sido utilizado por tantos subcontratistas del ejército para captar fondos públicos–. Este discurso alarmista los llevó a una conclusión lógica: el mundo necesitaba de un “control de armamentos aplicado a la inteligencia artificial”. Y eso fue todo. El libro no entraba más en detalles, prefiriendo las grandes generalidades al análisis.

A Schmidt le importa tanto sacar provecho de lo que queda de la reputación del ex secretario de Estado que, el mismo año, fundó el Special Competitive Studies Project (SCSP), un *think tank* dedicado a la inteligencia artificial y calzado de una iniciativa lanzada por Kissinger a fines de los años 1950, en el punto más álgido de la Guerra Fría. En esa época, este último estaba lejos de hacer un llamamiento a cualquier clase de control de los armamentos. Más bien creía que un conflicto militar limitado con la Unión Soviética era prácticamente ineludible –y que probablemente fuera algo bueno para Estados Unidos–.

A pesar del lugar que ocupa esta idea de “control de armamentos” en el libro de Schmidt y Kissinger, SCSP se embarcó en una dirección diametralmente opuesta. Es lo que ilustra su promoción de una estrategia vendida bajo la atrayente etiqueta de Offset-X.

A lo largo de la primera Guerra Fría, las estrategias de defensa llamadas de “compensación” (*offset*) consistieron en apoyarse sobre las últimas tecnologías existentes –armas nucleares tácticas con sensores aeroportados– para compensar la inferioridad numérica estadounidense frente a los tanques, los aviones y los soldados soviéticos. Tres estrategias de este estilo se definieron a partir de mediados de los años 1940, todas las cuales reposaban sobre postulados diferentes.

El que subyace a Offset X es que, en caso de guerra entre China y Estados Unidos, el Ejército Popular de Liberación (EPL) atacaría las redes estadounidenses; Estados Unidos debe estar preparado. Así, un reciente informe del SCSP precisa que “el resultado de una eventual guerra con el EPL va a depender más que nunca de la superioridad y de la resiliencia de

nuestros sensores, redes, programas, interfaces humanos-máquinas, logísticas y, por sobre todas las cosas, de los sistemas que los vinculan o los hacen funcionar todos juntos” (11). Cuando menos, realmente esto no se parece a un control de armamentos.

Para los no-iniciados, semejante perspectiva puede parecer aterradora pero estas líneas harían bostezar de aburrimiento a cualquiera que haya participado en las decisiones del Pentágono durante la última década. Es porque no hacen sino retomar las grandes líneas de la tercera estrategia Offset, desplegada entre 2014 y 2018 y dirigida particularmente por el secretario adjunto de Defensa de la época, Robert Work, que precisamente resurgió en el seno del consejo consultor del SCSP.

Los informes del SCSP no se dirigen a los militares, sino al gran público. Es a este a quien se debe convencer de la necesidad de aumentar los fondos que la defensa dedica a la inteligencia artificial. Para ello hay que demostrarle, por un lado, que China está ganando la carrera hacia la supremacía en esta tecnología de punta y, por otro lado, que tal victoria significaría una derrota militar para Estados Unidos. La segunda hipótesis hoy por hoy es ciencia ficción, pero ¿es exacto que China esté tan cerca de triunfar? Al contrario, parece que aún está lejos de ello (12), a juzgar por su incapacidad para presentar un competidor creíble para ChatGPT –la presentación catastrófica de su Ernie Bot por parte de Baidu derivó en un derrumbe en la cotización de sus acciones–.

El liderazgo de Silicon Valley en los modelos lingüísticos de gran escala (Large Language Models), es decir las técnicas de aprendizaje profundo utilizadas por ChatGPT, deriva en parte de la hegemonía cultural de Estados Unidos. Si OpenAI domina a tal punto la competencia, es principalmente porque puede entrenar su modelo a partir de un gigantesco corpus de textos en inglés de los que la web está llena. Hay allí mucho menos contenido en mandarino.

Guerra fría o caliente

Para quien ya se alarmaba del imperialismo cultural estadounidense, ChatGPT brinda nuevas razones para inquietarse, ya que bien podría imponerse como el recurso por defecto para responder a todas las preguntas del mundo –y, por si fuera poco, brindando las respuestas más insípidas y más políticamente correctas que existan–. Todos corremos el riesgo de convertirnos en prisioneros de las guerras culturales de Estados Unidos.

Por fuera del campo específico de los modelos lingüísticos, se podría sin embargo pensar que el avance tecnológico de China continúa yendo a buen ritmo. Según una investigación publicada por un importante *think tank* australiano, el país estaría a la cabeza en 37 tecnologías esenciales sobre 44, la lista incluye áreas tan variadas como la defensa, el espacio, la robótica, la energía, el medio ambiente, las biotecnologías, la inteligencia artificial, los materiales avanzados y las tecnologías cuánticas clave (13).

El problema de las evaluaciones de este tipo es que a menudo se apoyan –y excesivamente– en criterios como las *performances* relativas de las instituciones universitarias, la cantidad de publicaciones o el número de investigadores universitarios. Esto puede servir como indicador para identificar una posición dominante en un sector determinado, pero todos estos trabajos de investigación no valen nada sin la facultad de aplicar sus conclusiones.

Y es en este punto donde los esfuerzos de Washington para combatir el ascenso de China dan sus frutos, ya sea que se trate de acabar con el dominio de Huawei sobre el 5G o de impedir que Pekín logre la autosuficiencia en la fabricación de microchips avanzados.

Sobre este tema, las empresas de tecnología y los subcontratistas del ejército no siempre están de acuerdo. La mayoría de los primeros desea conservar su acceso al mercado civil chino, aunque más no sea debido a su tamaño, y por ende se oponen vehementemente a una Guerra Fría to-

tal. Los segundos no tienen esas restricciones ya que generalmente no están comprometidos por contratos civiles y que colaborar con el ejército chino está fuera de cuestión, so pena de poner fin a su colaboración con el Pentágono. Ellos quieren la Guerra Fría 2.0 –y la quieren ya–. Algunos de hecho no tendrían inconveniente en que se transforme en guerra caliente.

La política de la administración Biden, fundada en un paciente pero fructuoso estrangulamiento del rival chino, refleja el difícil compromiso entre los dos bandos. Washington intenta convencer a aliados como Países Bajos, Corea del Sur y Japón de dejar de vender sus tecnologías esenciales a China. También usa instrumentos jurídicos heredados de la Guerra Fría, entre ellos la disposición llamada Foreign Direct Product Rule, que permite prohibir a compañías extranjeras exportar hacia China productos fabricados con ayuda de tecnología estadounidense.

China en dependencia

La idea es que el costo del desarrollo de la inteligencia artificial aumente, pero sin volverlo prohibitivo, con el fin de que las aspiraciones chinas de autonomía puedan traducirse en beneficios para las firmas estadounidenses. Además, al frenar el ímpetu de Pekín, las medidas de Biden le permiten a Estados Unidos ganar tiempo para solucionar sus propios problemas de inteligencia artificial (mayormente relacionados con el hecho de que tienen demasiados huevos en la canasta de los microchips taiwaneses). Al menos, ya nadie en Washington esconde que el objetivo explícito es mantener a China en la dependencia y sacar provecho de ello –la actitud que denunciaban en su época los teóricos de la dependencia como André Gunder Frank o Ruy Mauro Marini–.

La incógnita sigue siendo la capacidad de Pekín para liderar una coalición internacional, sea cual sea su forma, para que sus intereses progresen. Porque Washington, por su lado, no actúa solo. Explota o dirige varias iniciativas internacionales como el Global Partnership for Artificial Intelligence (Asociación Mundial sobre Inteligencia Artificial) o AI Partnership for Defense (Asociación de Inteligencia Artificial para la Defensa). Hace poco, el AFF de Schmidt anunció la creación de un fondo conjunto con India, Japón y Australia bajo los auspicios del Quadrilateral Security Dialogue (Diálogo de Seguridad Cuadrilateral), una agrupación de defensa entre estos cuatro países que apunta a contener el entusiasmo chino.

La mayor parte de estas operaciones se llevan a cabo bajo la bandera de la defensa de la democracia y de la paz en el mundo, aunque sea al precio de un incremento de los presupuestos militares y de un creciente enriquecimiento de las compañías de tecnología y de sus accionistas.

En medio de toda esta agitación, Europa brilla por su ausencia. La razón es evidente: en el área militar, sigue a Estados Unidos. Cuando se producen cambios, generalmente son de alcance mínimo, como cuando la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) anunció elegir a Países Bajos como sede de la empresa gestora de su nuevo fondo de innovación dotado de mil millones de euros –una nimiedad si se tiene en cuenta de la escala de lo que está en juego–. Aun cuando la guerra en Ucrania llevó a los países europeos a aumentar sus gastos militares, es seguro apostar a que serán empresas estadounidenses como Palantir, dirigida por Peter Thiel, las que se llevarán la mejor tajada de esta nueva ganancia inesperada para la inteligencia artificial.

En este punto, el hecho de que los gigantes estadounidenses aún no hayan acelerado a la velocidad máxima se debe en mayor medida a las leyes europeas sobre la protección de la vida privada que a políticas públicas activas. Si bien ChatGPT fue prohibido en Italia y un tribunal alemán declaró inconstitucional el uso del programa de análisis de los datos de Palantir por parte de las fuerzas policiales para prevenir los

delitos antes de que sean cometidos, nadie sabe cuánto tiempo resistirán estos bastiones.

Si creyéramos en recientes declaraciones ampliamente difundidas por la prensa, la retórica de Washington sobre la Guerra Fría 2.0 hace eco en ciertos miembros de la Comisión Europea. Podemos suponer que esto resultará en una degradación de las relaciones entre la Unión Europea y China, a la vez que empujará en mayor medida a la primera hacia los brazos de la *tech* estadounidense. Evidentemente, sería más prudente que Bruselas pusiera a un bando contra el otro, como ya intentó hacerlo en el pasado en otras cuestiones.

En 2014, la politóloga Linda Weiss sostenía que el liderazgo tecnológico de Estados Unidos se debía en mayor medida a los esfuerzos de la defensa que a los de Silicon Valley (14). Señalaba que, privado de un rival de Guerra Fría, el Pentágono había perdido su capacidad de producir innovaciones revolucionarias y se preguntaba incluso “por qué China aún no se había transformado en un competidor motor de la innovación, a imagen de la Unión Soviética y de Japón”. Era sólo cuestión de tiempo.

Weiss estimaba entonces que, si quería seguir a la cabeza de la carrera tecnológica, Estados Unidos debía superar su obsesión por aquello que ella llamaba el “financiamiento”, poner de lado los intereses de Wall Street y concentrarse en la reconstrucción de su industria. Naturalmente, la obsesión por las finanzas nunca retrocedió, sino que surgió un fenómeno mucho más extraño. A pesar de que efectivamente estamos asistiendo a un inicio de relocalización de los microchips, es aún imposible saber si Estados Unidos va a reencontrarse en líder mundial del sector.

Contra todo pronóstico, tal vez sea menos el retroceso de Wall Street que el ascenso de Silicon Valley, determinada a capitalizar el auge de la inteligencia artificial, lo que sacó a Estados Unidos de su letargo, colocando al mismo tiempo a China en el lugar de enemigo estratégico como antaño lo era la Unión Soviética.

¿Y si todo esto hubiera empezado con Tetris? La nueva Guerra Fría comienza. O casi ■

1. La improbable historia de este juego, proveniente de la Unión Soviética y que aterrizó en las computadoras del mundo entero, es contada en *Tetris*, una película de Apple TV+ estrenada el 31 de marzo de 2023. *The Tetris Effect*, de Dan Ackerman (PubliAffairs, Nueva York, 2016) sigue siendo un libro indispensable sobre el tema.
2. François Flahaut, “Ni Dios, ni amo, ni impuestos”, *Le Monde diplomatique*, edición Cono Sur, Buenos Aires, agosto de 2008.
3. Eric Schmidt e Yll Bajraktari, “America could lose the tech contest with China”, *Foreign Affairs*, Nueva York, 8-9-22. Bajraktari dirige SCSP, el *think tank* de Schmidt dedicado a la inteligencia artificial.
4. Defensescoop.com, 7-12-22.
5. Kate Kaye, “Inside Eric Schmidt’s push to profit from an AI cold war with China”, Protocol, 31-10-22, <https://www.protocol.com>
6. Jonathan Guyer, “Inside the chaos at Washington’s most connected military tech startup”, Vox, 14-12-22, <https://www.vox.com>
7. CNBC.com, 13-12-22.
8. Alex Thompson, “Ex-Google boss helps fund dozens of jobs in Biden’s administration”, Politico, 22-12-22, <https://www.politico.com>
9. *Time*, Nueva York, 5-11-21.
10. Henry A. Kissinger, Eric Schmidt y Daniel Huttenlocher, *The Age of AI: And Our Human Future*, Little, Brown and Company, Nueva York, 2021.
11. “The Future of Conflict and the New Requirements of Defense. Interim Panel Report”, Special Competitive Studies Project, octubre de 2022, <https://www.scspp.ai>
12. Gabrielle Chou, “¿Pierde China la batalla de la inteligencia artificial?”, *Le Monde diplomatique*, edición chilena, abril de 2023.
13. Jamie Gaida, Jennifer Wong Leung, Stephan Robin y Danielle Cave, “ASPI’s Critical Technology Tracker: The global race for future power”, Australian Strategic Policy Institute, 2-3-23, <https://www.aspi.org.au>
14. Linda Weiss, *America Inc.? Innovation and Enterprise in the National Security State*, Cornell University Press, Ithaca, 2014.

*Fundador y editor de The Syllabus, plataforma de conocimientos sin fines de lucro. “The Santiago Boys”, su podcast sobre el legado tecnológico de Salvador Allende saldrá a mediados de 2023. Traducción: Micaela Houston

Hace veinte años, Estados Unidos ocupaba Irak

“Castigar a Francia, ignorar a Alemania”

por Serge Halimi*

El 1º de mayo de 2003, el presidente George W. Bush anunciaba –erróneamente– que las tropas de su país habían cumplido su “misión” en Irak. Sin embargo, al menos en un punto, la victoria de Estados Unidos fue real. Ninguna sanción siguió a su agresión. Y los que defendieron la guerra (incluidos los periodistas) continúan impulsándola en las relaciones internacionales.

Los Estados culpables de una agresión no son sancionados de la misma manera. El Tratado de Versalles (28 de junio de 1919) fue calificado como una *diktat* impuesto por Georges Clemenceau a un país vencido, Alemania. Veintiún años después, al tomar su revancha, Berlín insistió para que la derrota de Francia, el 22 de junio de 1940, se plasme en el Bosque de Compiègne, en el mismo lugar y en el mismo vagón que aquél en el que Alemania había debido firmar el armisticio, el 11 de noviembre de 1918. Mejor no perder tiempo buscando una simetría de las formas tan absoluta en el caso de Irak y Estados Unidos, quienes, por su parte, también se enfrentaron en dos guerras separadas por un intervalo corto...

Durante la primera, que enfrentó a Bagdad con las potencias occidentales, Saddam Hussein fue el agresor: el 2 de agosto de 1990, sus ejércitos ocuparon un Estado soberano, Kuwait, lo anexaron y lo convirtieron en la décima novena provincia de su país. La condena internacional de Irak fue unánime en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Una expedición militar fulminante, principalmente occidental, autorizada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), obligó a las tropas iraquíes a abandonar el emirato tras tres semanas de bombardeos intensivos y de combates terrestres. Tras lo cual Irak sufrió un embargo y sanciones implacables. En el transcurso de los diez años siguientes, varios cientos de miles de civiles, a menudo niños, murieron por falta de agua potable y de medicamentos.

Sin embargo, ni siquiera ese calvario fue suficiente. Tras el 11 de septiembre de 2001, el presidente George W. Bush decidió atacar nuevamente ese país. En esta ocasión, para prevenir nuevos atentados en Estados Unidos –los que se acababan de cometer contra el World Trade Center y el Pentágono habían tenido como autores a 15 sauditas y ningún iraquí–, que se realizarían con “armas de destrucción masiva”. Se trató de una invención de los servicios de inteligencia estadounidenses, inmediatamente propagada por la Casa Blanca, los principales medios de comunicación occidentales (*The New York Times*, *The Economist* y *The Washington Post* a la cabeza), sin olvidar una mayoría de parlamentarios, republicanos y demócratas (entre ellos Joseph Biden, entonces senador de Delaware), así como un puñado de opositores iraquíes en el exilio.

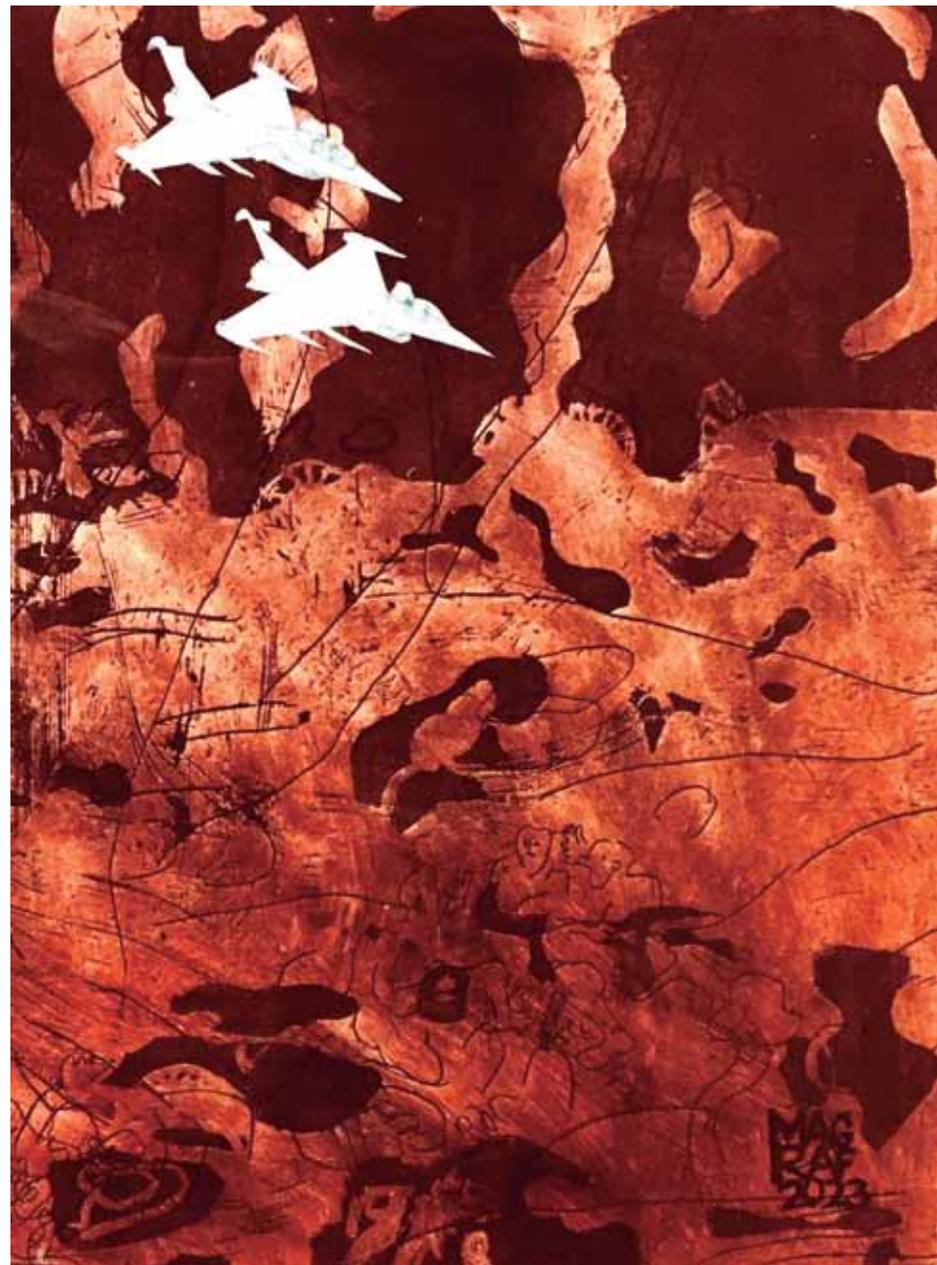
En marzo de 2003, sin mandato de la ONU, con un pretexto tan falaz como el que Rusia presentará diecinueve años más tarde para invadir a su vecino ucraniano, una coalición anglo-estadounidense con un total de 48 Estados –entre ellos Polonia, Italia, Ucrania, España, Georgia y Australia– atacó entonces a Irak. Poco antes, el secretario de Estado Colin Powell hizo valer que, “independientemente del resultado de las negociaciones en el Consejo de Seguridad”, el presidente de Estados Unidos dispone de “la autoridad y del derecho de actuar para defender al pueblo estadounidense y a nuestros vecinos” (1). Y cinco años antes, su predecesora demócrata Madeleine Albright había advertido: “Si debemos usar la fuerza, es porque somos estadounidenses. Somos una nación indispensable. Nos mantenemos firmes y vemos más lejos en el futuro” (2).

Cuando Francia y Alemania se opusieron a la expedición militar occidental, *The Wall Street Journal*, órgano de los neoconservadores, les explicó, muy molesto, que existían a partir de ese momento dos maneras de solucionar los asuntos mundiales: “la vía tradicional, a menudo confusa, del compromiso internacional y del consenso, que a menudo privilegian los europeos; y otra, menos burocrática y más rápida, que Washington prefiere: Estados Unidos toma unilateralmente las decisiones más importantes y luego intenta reunir coaliciones” (3). ¿Con qué propósito exactamente? El presidente Bush lo resumió solemnemente dos años más tarde: “La política de Estados Unidos es apoyar los movimientos y las instituciones democráticas en cada nación y en cada cultura, con el objetivo final de poner fin a la tiranía en el mundo” (4).

En el momento de esta delirante proclamación, Irak ya había sido destruido, la guerra estadounidense continuaba, varios cientos de miles de personas habían muerto en consecuencia, millones se convirtieron en refugiados o desplazados. Sin embargo, la caída en el infierno del país no había terminado. Culminó en 2014 cuando la organización del Estado Islámico (EI) tomó el control de una parte del territorio.

Derrotismo y cobardía

Ya que este resultado no es cuestionado actualmente (con la excepción de algunos fanáticos), ni lo es la ilegalidad de la guerra desatada por Estados Unidos, ¿qué sanciones derivaron de semejante avalancha de calamidades y de una violación tan absolu-



Rafael Monreal y Magdalena Vial, *Dislocación 3* (Aguafuerte intervenida), 2023

ta del derecho internacional? Ninguna. Ni embargo, ni congelamiento de bienes, ni exigencia de reparaciones, ni procedimientos de la Corte Penal Internacional (CPI), ni cierre de McDonald’s, ni boicot de Coca Cola... No sólo nadie reclamó nada por el estilo, sino que prevaleció la inquietud contraria tan pronto como Bagdad cayó en abril de 2003. Todos buscaron entonces aplacar la furia del agresor quien, escandalizado porque dos de sus aliados lo contradijeron, deseó, según una famosa fórmula atribuida a Condoleezza Rice, entonces asesora de Seguridad Nacional del presidente Bush, “castigar a Francia, ignorar a Alemania y perdonar a Rusia” (5).

Castigar a Francia... Maurice Gourdault-Montagne, asesor diplomático del Eliseo en-

tre 2002 y 2007, relata que, cuando se reunió en Washington con Paul Wolfowitz, secretario adjunto de Defensa estadounidense, algunas semanas antes del inicio de la guerra, “fue sin duda uno de los momentos más desagradables de mi larga carrera diplomática. [...] Todo en su actitud, su mirada, sus gestos, su dedo que me apuntaba, señalaba la poca estima que tenía por Francia y sus dirigentes, que a sus ojos encarnaban el derrotismo y la cobardía” (6). En sus *Memorias*, Jacques Chirac relata otro encuentro entre Gourdault-Montagne y, esta vez, Condoleezza Rice. Poco después de la caída de Bagdad, el emisario del Eliseo propuso que Francia coopere con las autoridades de ocupación. Rice respondió con una negativa: “Pagamos esta victoria con nuestro dinero y con la sangre de nues-

tros soldados. No necesitamos de ustedes” (7). Como recuerda Gérard Araud, entonces director de Asuntos Estratégicos en el Quai d’Orsay, Estados Unidos “no retrocedía ante ninguna baja para hacernos sufrir afrentas en todos los recintos en donde podía castigarnos por nuestra actitud, en las organizaciones internacionales se oponía al nombramiento de franceses [...], daba a entender que Francia había enviado armas a Saddam Hussein” (8).

No obstante, rápidamente la aventura militar que había parecido triunfal se salió de control: se multiplicaron los saqueos y los atentados, el caos se generalizó, sunnitas y chiitas se enfrentan, mueren soldados estadounidenses. En estas condiciones, la “comunidad internacional” vilipendiada algunas semanas antes vuelve a serle útil a Washington. Llega el apaciguamiento: “Los estadounidenses no tardaron en darse cuenta de que necesitaban de Francia para hacer votar las resoluciones de posguerra en Irak en el seno del Consejo de Seguridad –explica Gourdault-Montagne–. A partir de junio de 2003, Condoleezza Rice me llamó antes de cada debate en el Consejo de Seguridad para unificar las posiciones de nuestros dos países. Trabajaremos juntos en la adopción unánime de todas las resoluciones presentadas sobre el tema”. Así, la resolución 1511 del Consejo de Seguridad, unánime, incluidas Francia, China y Rusia, endosó el protectorado estadounidense de Irak y la violación de la Carta de las Naciones Unidas.

De manera que no hubo castigo alguno para el culpable. E incluso una infinidad de premios... Primero, Estados Unidos se reservó los contratos petroleros más jugosos de Irak. Algunos de los miembros del equipo más cercano al presidente estadounidense, él mismo ex gobernador de Texas, supieron apreciar la cuestión en tanto conocedores: el vicepresidente Richard Cheney presidió la empresa de ingeniería petrolera Halliburton, Rice ejerció sus talentos durante nueve años al servicio de Chevron. Otra coincidencia providencial, muchas de las empresas favorecidas por el ocupante donaron plata para la campaña presidencial de Bush (9). Finalmente, ya que Irak fue a la vez destruido y estaba bajo tutela estadounidense-

se, Washington reclamó que los acreedores de Bagdad, Francia a la cabeza, renunciaran al reembolso de la deuda contraída por Saddam Hussein. Gourdault-Montagne relataba: “Tras las gestiones efectuadas en las capitales por [el ex secretario de Estado estadounidense] James Baker, facilitaremos el tratamiento de la deuda iraquí (que se elevaba a 80.000 millones de dólares respecto de Francia), convencidos de que esta decisión [...] podía contribuir a retomar el diálogo con nuestros aliados”. Y comentaba: “Aun cuando los hechos nos daban ampliamente la razón, evitábamos proclamar que habíamos estado en lo correcto”. Los aliados de Estados Unidos supieron ser magnánimos cuando era Washington quien causaba estragos.

Limar asperezas

Sin embargo, en Francia, la hostilidad sin equívoco a la invasión de Irak por parte de Jacques Chirac, líder de lo que entonces se llamó el “bando de la paz”, fue plebiscitada por sus conciudadanos. Según una encuesta publicada por *Le Figaro* el 28 de abril de 2003, el 84% de los franceses (contra el 14%) consideraban que el presidente de la República tuvo “razón de oponerse a Estados Unidos”. Como Chirac reveló luego, “es del lado de las élites o de las que se presumen tales, que se alzan las voces discordantes. En algunos de nuestros diplomáticos, una inquietud silenciosa pero perceptible tiende a propagarse, en cuanto a los riesgos de un aislamiento de Francia. Desde el MEDEF [Movimiento de Empresas de Francia] y de ciertos dirigentes del CAC 40, me llegan mensajes más insistentes, en los que me recomiendan hacer prueba de mayor flexibilidad respecto de Estados Unidos, so pena de hacer perder a nuestras empresas mercados importantes. [...] Las corrientes más atlantistas, tanto en el seno de la mayoría como en la oposición, no se quedan atrás” (10).

Gracias a las revelaciones de WikiLeaks y a Julian Assange, descubrimos más tarde que François Hollande y Pierre Moscovici estaban entre esos “atlantistas de la oposición”. Efectivamente, en 2006 se dirigieron a la embajada de Estados Unidos en París para informar a Washington que en caso de re-sultar electo un socialista en el Eliseo al año

siguiente, Bush ya no debería temer críticas demasiado vehementes a su política.

Buscar limar asperezas con el amo estadounidense, incluso defender su política, también fue la elección de los medios de comunicación franceses, menos diplomáticos cuando los agresores no eran los comandantes de la OTAN. En Francia encontramos entonces diligentes relevos de las críticas de la prensa estadounidense contra el Eliseo. Así, poco antes de que el semanario *U.S. News and World Report* escribiera: “En Europa, la cobardía y el apaciguamiento de Hitler en los años 1930 se parecen a la lamentable *performance* de Francia y Alemania en la actualidad. [...] En ambos casos, Francia tenía un líder débil, insensible al creciente peligro proveniente del exterior y al aumento del antisemitismo en Francia” (11), Pascal Bruckner había propuesto esta misma analogía. Arremetiendo contra *Le Monde diplomatique*, culpable de haber titulado “El Imperio contra Irak”, escribía: “Si el desembarco de junio de 1944 sucediera hoy, podríamos apostar que el tío Adolf gozaría de la simpatía de innumerables humanistas y radicales de la extrema izquierda con el argumento de que el Tío Sam intentaría acabar con él” (12).

Sin embargo, en ese entonces el bando pro-estadounidense superaba al trío de exaltados compuesto por Bruckner, Romain Goupil y André Glucksmann, al que se unían Dominique Moïsi, Jean-François Revel, Bernard Kouchner, Stéphane Courtois, Gérard Grunberg y Françoise Thom. El director de *L’Express*, Denis Jeambar, mascullaba que “el mundo occidental, demasiado cómodo, ya no quiere tomar el más mínimo riesgo. Ni siquiera el de luchar para defender sus ideales” (6 de marzo de 2003) mientras que Claude Imbert, editorialista y fundador de *Le Point*, creía haber descubierto la verdadera razón de la hostilidad de Chirac respecto de esa guerra: “En Francia, tenemos que tomar en cuenta la inmigración islámica. Y la política árabe [...] sigue siendo sacrosanta en el Quai d’Orsay” (21 de marzo de 2003). Imbert concede que Estados Unidos “cometió errores previsibles en su reacción”, pero recuerda que “es bajo su ala que nuestras libertades y nuestros bienes son protegidos” (4 de abril de 2003).

La idea de que Francia debía ayudar a Washington a normalizar su presencia en Irak será retomada por *Libération* (Serge July), *Le Nouvel Observateur* (Laurent Joffrin), France Inter (Bernard Guetta) y muchos más. Se debía, estimaba Bernard-Henri Lévy, “salvar a los soldados Bush y Blair de ese desastre” para combatir “el ascenso del terrorismo internacional”. Luchar también contra el “sentimiento anti-estadounidense que Dominique de Villepin alimentó” (Kouchner), dejando “a su paso un antisemitismo que se expresa abiertamente” (Serge July). El 4 de abril de 2003, Guetta declaraba: “No hay duda. Por supuesto que cada demócrata desea la victoria de Estados Unidos”. Su amigo Joffrin no disintió: “Sería mejor que Bush tenga éxito”.

Tanto en Francia como en Estados Unidos, la mayor parte de los halcones de la guerra de Irak tuvieron brillantes carreras y apoyaron otras guerras. Bush incluso se convirtió en el ídolo de los demócratas desde que le hizo frente a Donald Trump. Sin embargo, a veces comete nuevos errores. Como en mayo pasado, cuando el ex presidente criticó, antes de rectificarse un poco avergonzado, a Vladimir Putin y su “brutal y totalmente injustificada invasión de Irak”... ■

1. Citado por Phyllis Bennis, “The UN, the US and Iraq”, *The Nation*, Nueva York, 11-11-02.

2. Entrevista con NBC, 19-2-98.

3. “How France, Germany United to Undermine U.S. Designs on Iraq”, *The Wall Street Journal*, Nueva York, 26-3-03.

4. Discurso inaugural, 20-1-05.

5. Palabras atribuidas a Condoleezza Rice, entonces asesora de Seguridad Nacional del presidente Bush.

6. Maurice Gourdault-Montagne, *Les autres ne pensent pas comme nous*, Bouquins Éditions, París, 2022.

7. Jacques Chirac, *Le temps présidentiel, Mémoires*, Nil, 2011.

8. Gérard Araud, *Passeport diplomatique. Quarante ans au Quai d’Orsay*, Grasset, París, 2019.

9. Ibrahim Warde, “El Dorado, pero para unos pocos”, *Le Monde diplomatique*, edición Cono Sur, Buenos Aires, mayo de 2004.

10. Jacques Chirac, *op.cit.*

11. John Leo, *U.S. News and World Report*, 17-3-03.

12. *Le Monde*, París, 4-2-03.

*De la redacción de *Le Monde diplomatique*, París. Traducción: Micaela Houston

Problemas en el paraíso

por Pierre Rimbert*

Está dentro de las normas básicas de la buena educación no abordar temas delicados durante una cena familiar por miedo a generar malestares, disputas o una batalla campal. Pero en el caso del sabotaje de los gasoductos Nord Stream el pasado 26 de septiembre, la educada moderación de los líderes europeos roza el silencio cobarde. Después de todo, un ataque perpetrado frente a las costas de Dinamarca, Polonia y Suecia, países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) o candidatos a la adhesión, probablemente por una potencia estatal, contra una infraestructura que pertenece principalmente al conglomerado ruso Gazprom pero también, en el caso del Nord Stream 1, a un grupo de empresas energéticas alemanas, holandesas y francesas, bastaba para despertar la furia investigadora combinada de los medios de comunicación y las autoridades. Sin embargo, en ambas partes, un inexplicable pudor obstaculiza la expresión de la habitual diatriba antiterrorista.

Tras la publicación del periodista estadounidense Seymour Hersh de una investigación que incrimina a Estados Unidos y a los servicios de inteligencia noruegos (Substack, 8 de febrero), las pesquisas de la Fiscalía Federal alemana se orientan hacia otra pista, digna de una película de la OSS 117 próximamente en cines con el título “Problemas en el paraíso”: una banda de seis espías vinculados a Ucrania, disfrazados de turistas, alquilan un yate en Rostock y se ponen discretamente sus trajes de baño para colocar 500 kilos de explosivos a 80 metros de profundidad en el Mar Báltico, según *The New York Times* (7 y 16 de marzo) y un consorcio de medios alemanes (8 de marzo). ¿Una distracción? Este guion, que sin duda atraería a un público mayor que la última película de Bernard-Henri Lévy sobre Ucrania (1.024 en total en Francia), deja perplejo a *The Washington Post*: el

periódico (4 de abril) indica que la atención de los investigadores alemanes fue deliberadamente atraída hacia este yate por “un servicio de inteligencia occidental”, que habría proporcionado a su homólogo alemán “un dato muy concreto”, pero que parece haberse desinflado –sin duda hay muchos en este caso–. Astuta, la Fiscalía Federal se pregunta ahora si el barco no “era un señuelo, puesto en el mar para desviar la atención de los verdaderos autores”.

En el fondo, esta neblina le conviene a todo el mundo. “Algunos dirigentes occidentales no tienen mucho apuro por identificar al autor del ataque –prosigue *The Washington Post*–. En las reuniones de los líderes políticos del Viejo Continente y de la Alianza Atlántica, los funcionarios han adoptado una rutina, dijo un alto diplomático europeo: ‘No se habla del Nord Stream’. No ven el interés de indagar demasiado a riesgo de encontrar una respuesta incómoda, continuó el diplomático, haciéndose eco de los sentimientos de muchos de sus homólogos de otros países que preferirían no enfrentarse a la posibilidad de que Ucrania o sus aliados estén involucrados. [...] ‘Es como un cadáver en medio de una reunión familiar’, precisó esta fuente, recurriendo a una sombría analogía: todo el mundo lo ve, pero actúa como si no pasara nada. ‘Es mejor no saberlo’”.

¿Un Estado implicado en un atentado se escondería en “nuestro bando”? ¿Imposible! Parafraseando a Hubert Bonisseur de la Bath: “Un Estado terrorista es cuando la gente ya es rusa”. ■

*De la redacción de *Le Monde diplomatique*, París. Traducción: Emilia Fernández Tasende

Azerbaiyán exige a Ereván nuevas concesiones territoriales

Armenia en busca de apoyo

por Léon Constant*

Fortalecido por el apoyo de Turquía e Israel, Azerbaiyán alterna ofensivas militares y demostraciones de fuerza contra Armenia. Su objetivo: la reintegración en su seno del Alto Karabaj, un enclave armenio inserto en su territorio que Bakú reconquistó parcialmente en 2020. En Ereván temen que las pretensiones territoriales del presidente Ilham Aliyev se extiendan al sur del país.

A cuatro horas en auto de Ereván, capital de Armenia, la pequeña ciudad de Goris vive una agitación inusual. Esta puerta de entrada a la región de Syunik, en el sur del país, recibe, a comienzos del mes de enero, cientos de habitantes del Alto Karabaj. Este enclave, poblado de armenios y situado en territorio azerbaiyano, se encuentra desde hace cerca de tres meses aislado del resto del mundo. El 12 de diciembre de 2022, unos presuntos militantes ecologistas llegados de Azerbaiyán instalaron su campamento en medio del corredor de Lachín, la única vía que une al Alto Karabaj con Armenia. Se oponen supestamente a la explotación de una mina ilegal de oro, pero la operación sirve en realidad de excusa para un bloqueo apoyado por los militares azerbaiyanos.

La primera guerra

En la parte alta de la ciudad se erige el hotel Goris. Cerca de la recepción, hay bolsos apilados al lado de las familias que esperan ser transferidas hacia otro hotel. Las noticias que llegan de sus parientes prisioneros del enclave atestiguan de una crisis humanitaria alarmante: las autoridades locales implementaron allí tickets de racionamiento para alimentos y reparten a cuentagotas los consumos de electricidad, de gas y de Internet para hacer frente a los cortes regulares que impone Bakú (1). La mayor parte de las escuelas cerraron. Con un pie enyesado, sentada en un sofá de cuero en la entrada, Mariana, una habitante de Stepanakert, suspira: “No veo la hora de volver”. Una pareja de ancianos quiere creer que “la ruta va a reabrir pronto”. Los altoparlantes pasan música tradicional armenia para levantar el ánimo de las tropas durante el almuerzo.

El cerco se cierra alrededor del Alto Karabaj, que Bakú pretende reintegrar en su seno. Durante el período soviético, esta región gozaba de un estatuto de autonomía en el seno de la República Soviética de Azerbaiyán. En 1991, cuando la URSS implosionó, el Alto Karabaj proclamó su independencia, provocando la primera guerra armenio-azerbaiyana (1991-1994). Al ocupar siete distritos adyacentes del enclave, Ereván se puso entonces en situación de protector de la entidad secesionista, ejerciendo al mismo tiempo *de facto* una tutela sobre su gobierno local. Bakú denunció una violación del derecho internacional, que reconocía las fronteras soviéticas como base de los nuevos Estados independientes. Pero tras años de estancamiento del proceso de paz y valiéndose del apoyo militar de Turquía, Bakú decidió en septiembre de 2020 lanzar su ejército a la reconquista de los territorios perdidos.

Bajo la presión de Moscú, el presidente azerbaiyano Ilham Aliyev renunció a apoderarse de Stepanakert, capital del Alto Karabaj. El 9 de septiembre de 2020, un acuerdo tripartito de cese el fuego, firmado entre Armenia, Azerbaiyán y Rusia, autorizó el despliegue de una fuerza de intervención rusa alrededor del enclave, con un tercio de su superficie amputada. Moscú despachó 2.000 soldados, para proteger entre 55.000 y 120.000 armenios del Alto Karabaj (2) y asegurar la seguridad del corredor de Lachín. Un golpe maestro para Moscú, que reafirmó así su posición de gendarme en el Cáucaso, a la vez que marginó al Grupo de Minsk (copresidido por Rusia, Estados Unidos y Francia), hasta ese entonces a cargo de la solución del conflicto.

Este *statu quo* es actualmente cuestionado. Para el primer ministro armenio Nikol Pashinián, la política de Bakú se asemeja a un “intento de limpieza étnica”, tras declarar las autoridades azerbaiyanas que “la ruta no está cerrada para aquellos que no quieren convertirse en ciudadanos de Azerbaiyán”. Por ahora, sólo los vehículos de la Cruz Roja Internacional entran y salen del enclave. Muchos temen que el corredor no se abra más que como un boleto de ida sin retorno hacia un exilio definitivo. “Los azerbaiyanos van a continuar haciendo presión hasta que la población salga a cuentagotas, los más vulnerables primero”, analiza Valentin Mahou-Hekimian, coordinador regional del Cáucaso Sur para la asociación Médicos del Mundo.

Retrosceso de soberanía

El bloqueo de Lachín tiene como telón de fondo la negociación de un acuerdo de paz global. Por esa vía, Azerbaiyán busca torcer el brazo de Ereván con respecto a otro corredor, el de Zangezur, nombre con el cual los azerbaiyanos se refieren a la región de Syunik. Este corredor extraterritorial que atraviesa el sur de Armenia permitiría conectar Azerbaiyán con su enclave de Najicheván, y, más allá, con Turquía, su aliado más cercano. “Vamos a implementar el corredor de Zangezur, ya sea que Armenia lo quiera o no”, advirtió Aliyev en 2021 (3). Para Taline Papazian, investigadora en Ciencias Políticas en Sciences Po: “el objetivo de Azerbaiyán es obtener un corredor creando una equivalencia artificial entre el enclave de Artsaj [nombre armenio del Alto Karabaj] y el de Najicheván”. Así, el desbloqueo de uno estaría condicionado por las concesiones de Ereván sobre el otro.

Bakú exigió primero que los guardas fronterizos armenios se retiren del futuro tramo en beneficio de las fuerzas rusas, un retrosceso de soberanía al cual Ereván se rehúsa, por temor de ver a Bakú profundizar la ventaja. Porque el asunto supera la cuestión del desenclave de los dos países. Para la exdiputada Tatev Hayrapetyan, doctora en Historia, el corredor está “vinculado a las reivindicaciones territoriales de Turquía y de Azerbaiyán sobre el Syunik. Por cierto, Ankara y Bakú llaman a ese territorio Azerbaiyán del Oeste”. En febrero, Bakú flexibilizó su posición, aceptando el establecimiento de *check-points* armenios, pero sin levantar el bloqueo del Alto Karabaj, cuya reintegración constituye hoy por hoy su prioridad.

Este giro no modifica en nada la situación general: desde el primer ataque en mayo de 2021, Bakú se liberó de los objetivos limitados de la guerra de 2020, a saber, recuperar su soberanía sobre las regiones perdidas en 1994. El 13 de septiembre, el ejército azerbaiyano atacó la ciudad armenia de Jermuk, en el centro del país, provocando la muerte de 200 personas en dos días. Tiros de artillería, morteros y drones le permitieron desplegarse sobre 200 km a lo largo de la

frontera. Bakú se apropió de puntos elevados a lo largo de la frontera, permitiéndole una vista aérea sobre los 200.000 armenios que viven en las regiones del sur del país, Gegharkunik, Vayots Dzor y Syunik, que su ejército puede ahora aislar del resto del país. Una espada de Damocles que Bakú agita para lograr un acuerdo de paz con sus condiciones. Ereván reclama, sin éxito, derechos políticos y culturales para los armenios del Alto Karabaj, así como garantías para su seguridad, con la desmilitarización de la región y presencia internacional. Bakú responde que se trata de una cuestión interna, excluida por consiguiente de las negociaciones, y consigue progresivamente imponer un diálogo directo con los representantes del Alto Karabaj (4).

En diciembre, Azerbaiyán y Turquía llevaron a cabo ejercicios militares conjuntos en la frontera con Irán. “Quieren poner a prueba la reacción de Irán en caso de ataque militar contra Armenia, en particular en la región de Syunik”, explica Hayrapetyan. Irán, que alberga una minoría azerí estimada en 17 millones de personas, muestra inquietud por las voces belicistas que se alzan en el país vecino, llamando a la reconquista del “Azerbaiyán del sur”. En enero de 2022, el embajador iraní en Armenia advirtió: “La seguridad de Armenia es la seguridad de Irán”. Irán también llevó a cabo amplios ejercicios militares a fines de 2022. En enero pasado, los atentados contra la Embajada de Azerbaiyán en Irán avivaron esas tensiones: Bakú acusó directamente a Teherán. El nerviosismo de Irán se explica también por el refuerzo continuo de la cooperación militar entre Israel, su peor enemigo, y Azerbaiyán. Un artículo reciente del diario *Haaretz* reveló su amplitud, incluso por medio de entregas de armas durante los episodios de enfrentamientos de los últimos meses (5).

Un sentimiento de abandono

Los armenios constatan con amargura que su alianza militar con Rusia no les aportó ninguna de las garantías de seguridad prometidas. La Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), que Moscú quería convertir en el equivalente de la OTAN en el espacio postsoviético, no apoyó a Armenia, uno de sus miembros fundadores en 1992 (junto a Bielorrusia, Kazajistán, Tayikistán, Kirguistán y Rusia). En 2020, Moscú subrayó que las cláusulas de la alianza no se aplicaban a los territorios pertenecientes a Azerbaiyán desde el punto de vista del derecho internacional. Tras los ataques de 2022, que todos en Ereván califican como actos de guerra, Rusia mantuvo la misma reserva, esta vez so pretexto de que la frontera entre los dos países todavía no estaba delimitada. Mientras tanto, el Kremlin lanzó todas sus fuerzas contra Ucrania...

Un sentimiento de abandono invadió a una parte de la población. Hecho inusual en un país tradicionalmente rusófilo y económicamente vinculado con Moscú, una manifestación hostil al Kremlin reunió a varios cientos de personas en la capital en noviembre de 2022, en paralelo a un desplazamiento del presidente ruso a Ereván. “Rechacen a la OTSC como han prohibido a Margarita Simonyan”, podía leerse en un cartel, en referencia a la prohibición de entrada en el territorio aplicada a la directora del medio de comunicación Russia Today (RT), de origen armenio, después de que ella calificara a Pashinián de “traidor” y llamara a los armenios que critican a Rusia a “cortarse la lengua”. En la plaza central de la Ópera, los protestantes agitaban banderas ucranianas. No obstante, Kiev recibe estas señales de solidaridad sin gran reciprocidad, dado

que apoya a Azerbaiyán en el conflicto. Apegada al respeto de las fronteras surgidas del período soviético, Ucrania compara las pretensiones armenias sobre el Alto Karabaj con la anexión de Crimea por parte de Moscú.

Al concluir la Cumbre de la OTSC en Ereván en noviembre de 2022, Pashinián rechazó firmar la declaración final de la organización. Ante las cámaras, subrayó que “la ausencia de una evaluación política clara de la situación puede no solamente significar que la OTSC abandona sus obligaciones en materia de alianza, sino que también puede ser interpretada por Azerbaiyán como un permiso de la OTSC para una nueva agresión contra Armenia, lo cual contradice no solamente la letra, sino también el espíritu y el sentido de los documentos fundantes de la OTSC”.

En su desesperación, Ereván se vuelca hacia los occidentales. En plena guerra en Ucrania, a estos últimos no les desagrada atacar indirectamente a Moscú. A pedido del gobierno armenio, la Unión Europea desplegó una misión de observación en octubre de 2022 por dos meses. Ya en la zona desde el 20 de febrero, el contingente de una segunda misión incluye un centenar de agentes, 50 de ellos armados, particularmente con gendarmes alemanes y franceses basados en el norte, en el oeste y en el sur del país. Unos días después del anuncio de la misión europea, la Embajada de Rusia en Ereván respondió por medio de un áspero comunicado: “Los intentos de la Unión Europea de poner un pie en Armenia a toda costa y de frenar los esfuerzos de mediación de Rusia podrían perjudicar los intereses fundamentales de los armenios y de los azerbaiyanos en sus esfuerzos por retornar al desarrollo pacífico de la región”. La visita de William Burns, director de la CIA (julio de 2022), y luego la de Nancy Pelosi, entonces presidenta de la Cámara de Representantes (septiembre de 2022) y ex secretaria de Estado, fueron percibidas por el Kremlin y por Bakú como provocaciones.

El recrudescimiento de la competencia ruso-occidental en la gestión del conflicto no conmueve a Azerbaiyán, que dispone de influencia tanto en Moscú como en Bruselas. En febrero de 2022, el presidente azerbaiyano Ilham Aliyev y su homólogo ruso Vladimir Putin firmaron un Tratado de Cooperación y de No Agresión, una manera para Rusia de comprometerse a no tener injerencia en los asuntos azerbaiyanos, a cambio del reconocimiento de su rol de líder en el espacio postsoviético y de una garantía de neutralidad de Bakú en el conflicto ruso-ucraniano. En cuanto a los europeos, también piensan cuidar su relación con Bakú por razones energéticas. En efecto, Bruselas pretende acceder a los recursos gasíferos del país para compensar el embargo sobre los productos energéticos provenientes de Rusia. Conforme al acuerdo firmado en julio entre la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen y Aliyev, Azerbaiyán aumentó en un 30% sus entregas de gas en 2022 y apunta a su duplicación de acá a 2027. Algo que satisface a los europeos, y ello a pesar de las sospechas de reexportación de gas de origen ruso vía Bakú. ■

1. Bashir Kitachayev, “What’s next for the Azerbaijani blockade of Nagorno-Karabakh?”, *OpenDemocracy*, 25-1-23.

2. Las estimaciones varían. No se realizó ningún censo desde el fin de la Unión Soviética.

3. “What will become of the Zangezur corridor? Comments from Azerbaijan and Armenia”, *Jam News*, 21-4-21.

4. “Azerbaijan-Karabakh dialogue is happening”, *Eurasianet*, 2-3-23.

5. Avi Scharfy Oded Yaron, “92 Flights From Israeli Base Reveal Arms Exports to Azerbaijan”, *Haaretz*, 6-3-23.

*Periodista.

Traducción: Micaela Houston

Riesgo de fraude electoral y unión de la oposición

La democracia turca en suspenso

por Ariane Bonzon*

Este 14 de mayo, cerca de 60 millones de turcos están convocados a votar para designar representantes y elegir cuál será su Presidente por los próximos cinco años. Tres meses después del doble terremoto devastador y en un contexto político marcado por un autoritarismo creciente, Recep Tayyip Erdoğan debe enfrentar al candidato de una oposición heterogénea pero unida. ¿Al punto de manipular una elección que corre el riesgo de perder?

Nunca, en los últimos veinte años, la oposición a Recep Tayyip Erdoğan en Turquía habrá estado tan cerca de derrotarlo en una elección presidencial. Candidato a un tercer mandato sucesivo, el *reis* parece estar desde hace varios meses en un aprieto, aun cuando la diferencia con su rival, Kemal Kılıçdaroğlu, sigue siendo ajustada. La mala situación económica desde 2021 y luego la conmoción por el doble terremoto del 6 de febrero pasado –al menos 50.000 muertos, en gran parte debido a la política de urbanización, clientelista y especuladora del gobierno, así como a su gestión deficiente de los servicios de emergencia– explican en gran parte el rechazo del cual es objeto el Presidente (1).

Favorito en las encuestas, Kılıçdaroğlu, de 74 años, es una figura antitética del número uno turco. Sin gran carisma, pero no desprovisto de malicia, este plácido economista fue director de la seguridad social en la cúspide de su carrera. Tiene el perfil de muchos funcionarios de izquierda, soberanistas y nacionalistas, que durante mucho tiempo constituyeron la columna vertebral del Estado, antes de ser progresivamente excluidos de su seno por el Partido de la Justicia y del Desarrollo (AKP), en el poder desde el año 2002. De origen modesto, nacido en la rebelde región de Dersim, Kılıçdaroğlu pertenece a la comunidad aleví, donde se practica un culto heterodoxo y sincrético inspirado a la vez en el islam chiíta, el misticismo, el zoroastrismo e incluso el cristianismo. Un rito que Erdoğan, sunnita tradicionalista, estigmatiza a menudo con la voluntad manifiesta de polarizar a la sociedad turca.

Diputado, y luego presidente del Partido Republicano del Pueblo (CHP, partido “histórico”, que dio origen a la fundación de la República), Kılıçdaroğlu se hizo conocido por el público en general al denunciar, no sin cierto éxito, varios casos de corrupción que implicaban a personas cercanas al poder. Y luego, en 2017, a los 69 años, al encabezar una marcha por la justicia que unió a Ankara con Estambul contra las purgas masivas llevadas a cabo por el gobierno a raíz del fallido intento de golpe de Estado militar de julio de 2016 (2). Si “mañana las autoridades judiciales lo citan en algún lado, no se sorprenda”, lo reprendió entonces Erdoğan. “Si pruebo que tú y tu gobierno dieron órdenes a los tribunales, ¿renunciarás como un hombre honorable?”, replicó el opositor. Eso marcó el tono, que subiría con el correr de los años. Así, la campaña presidencial exhibe al candidato republicano conminando a su rival a que explique su responsabilidad respecto de la amplitud del desastre que siguió a los dos terremotos de febrero de 2023.

A lo largo de toda esta misma campaña, el dirigente del CHP, a quien le gusta definirse como socialdemócrata, usó la carta de la unión. Kılıçdaroğlu logró establecer y mantener unida la Alianza de la Nación, un grupo heterogéneo de seis partidos que va desde la extrema derecha ultranacionalista hasta la izquierda moderada, pa-

sando por el islam político y el liberalismo conservador (3). Una mezcla de agua con aceite que no parece convencer completamente a los votantes frente a la Alianza popular dirigida por el presidente turco (4). Porque la Alianza de la Nación “no corresponde tanto a una convergencia ideológica sino a una voluntad común de los partidos que la componen [de] unir las listas con vistas a las elecciones legislativas, pero también para apoyar a un candidato común en la elección presidencial”, escribe el investigador Aurélien Denizeau (5).

Una piedra en el zapato

A fines de enero, esta “Mesa de los Seis” hizo público un programa de gobierno compuesto por grandes principios, más que por medidas detalladas: el regreso a un régimen parlamentario equilibrado; la lucha contra la inflación para mejorar la situación económica; y el respeto de los derechos humanos y de las normas democráticas (6). En cambio, nada dice sobre la cuestión kurda. No obstante, Kılıçdaroğlu se presentó cuidadosamente en escena como el hombre de la reconciliación: con las mujeres con velo (durante mucho tiempo estigmatizadas por los partidos laicos), con los nacionalistas conservadores, pero también con el Partido Democrático de los Pueblos (HDP, kurdo autonomista, izquierda), a cuyos copresidentes recibió. Una piedra en el zapato en el seno de la Alianza de la Nación, donde el Partido Bueno (IYI, extrema derecha ultranacionalista) sigue una línea dura y sin concesiones respecto del HDP, contra el cual por cierto se inició un procedimiento de disolución por vulneración de “la integridad indivisible del Estado” y por los vínculos con el Partido de los Trabajadores del Kurdistan (PKK). Sin embargo, la estrategia de reconciliación del candidato republicano dio sus frutos: bajo la influencia de su ex copresidente, Selahattin Demirtaş, encarcelado desde 2016, el HDP decidió no presentar un candidato a la elección presidencial. Es un apoyo tácito a Kılıçdaroğlu, para quien los votos de los simpatizantes de esta organización bien podrían revelarse como decisivos.

Sin embargo, muchos turcos piensan que el presidente turco será reelecto. Sin dudas recuerdan las numerosas irregularidades que salpicaron las elecciones anteriores: corte de electricidad casi general en el momento del recuento final en 2014, sobres no sellados en 2017, etc. Este año se suman algunas consecuencias indirectas del terremoto, que podrían perturbar la adecuada celebración de esta convocatoria electoral. Primero, porque la campaña se desarrolla bajo estado de emergencia, decretado al día siguiente del terremoto en los diez departamentos afectados por la catástrofe, de los 81 que tiene el país. Una situación que los turcos ya conocen, porque en 2017 y en 2018 tanto el referéndum constitucional como la elección presidencial y las legislativas se desarrollaron también en estado de emergencia.

“Al decidir el estado de emergencia antes que el estado de catástrofe natural, que podría haber sido considerado más apto –explica Élise Mas-

sicard, investigadora del Centro de Estudios y de Investigaciones Internacionales (CERI)–, el Ejecutivo optó por dar muchos más poderes a las autoridades públicas, como el de prohibir las manifestaciones o el control de los medios de comunicación en esas regiones extremadamente pobladas, aumentando las críticas que se escuchan desde hace varios años, según las cuales el aparato de Estado no es más neutral, trabaja para el AKP y hace un uso partidario de los recursos públicos”.

El segundo efecto del terremoto sobre las elecciones podría generar aun más cuestionamientos. Las listas de votantes se establecen a partir de su domicilio, con la condición de que residan allí desde al menos tres meses antes de la elección. Con más de 3,5 millones de desplazados, pero también millones de jóvenes, *a priori* menos favorables al poder establecido, y en muchos casos votantes primerizos, que debieron dejar las residencias estudiantiles –cerradas para alojar allí a las víctimas del terremoto–, el registro de los votantes constituye un verdadero desafío administrativo. En función de la orientación política del electorado de tal o cual circunscripción, no es posible excluir juguetas y un celo variable para inscribir nuevos votantes o hacer desaparecer a aquellos que se mudaron sin dejar rastro. “Millones de votos están en juego, y eso puede influir en el resultado final. Ciertas circunscripciones son más decisivas que otras para las legislativas, y esta elección legislativa podría desempeñar de rebote un rol decisivo para la segunda vuelta de la presidencial –precisa Massicard–. Las autoridades son conscientes de que la inscripción en las listas puede plantear un problema, y que no ganan nada con hacer trampa. Pero es cierto que los movimientos masivos de población como resultado del terremoto generan posibilidades de manipulación. La coalición de la oposición lo considera una cuestión esencial”.

Incitación al pesimismo

Pero Erdoğan podría privilegiar otros tipos de maniobras. “Si bien la derrota parece inminente, los jueces y los oficiales a cargo de las elecciones que permanecieron leales al Presidente bien podrían invertir la situación, como intentaron hacerlo al anular los resultados de la elección municipal de Estambul en 2019. Recep Tayyip Erdoğan puede incluso acudir a la policía y a las Fuerzas Armadas”, advierte el profesor Sinan Ciddi (7).

Tras haber aumentado sustancialmente el salario mínimo (que implica al 60% de los turcos) y el sueldo de los funcionarios públicos, tomado medidas electoralistas que permiten a dos millones de personas jubilarse a partir de ahora, el presidente repitió las promesas de reconstrucción de varias decenas de miles de viviendas destruidas por el terremoto.

El propio contexto incita a los turcos al pesimismo en cuanto al cambio de inquilino del lujoso palacio presidencial de Ankara. Con cerca del 90% de los medios de comunicación bajo la influencia del gobierno, varias decenas de periodistas y de mandos políticos del HDP en prisión, la amenaza de disolución de ese partido, un proceso abierto contra Ekrem İmamoğlu, el popular alcalde de Estambul perteneciente al CHP, así como una nueva ley que controla estrechamente las redes sociales, la campaña está lejos de haber sido equitativa.

Además, el proceso electoral sigue estando bajo el control directo del régimen: así, el politólogo Cengiz Aktar destaca que el poder nombra a los presidentes de las comisiones electorales departamentales y de los distritos y a los once jueces del Consejo Electoral Supremo (YSK), cuyas decisiones no son apelables. Es una opinión que Élise Massicard matiza: “Por supuesto, todos los jueces con asiento en el Consejo Electoral Supremo fueron nombrados bajo el AKP, pero los

principales partidos políticos están representados en él, aunque no tienen derecho a voto”.

Las elecciones de 2023 podrían también significar el regreso de las iniciativas de la sociedad civil, como durante las elecciones de 2014 y luego de 2015, en particular en Estambul y en Ankara –con militantes tirados durante horas sobre los bolsos que contenían las boletas, a la espera de que los resultados del recinto electoral que ellos supervisaban fueran por fin contabilizados–. Estas operaciones de observación, y de lucha contra eventuales fraudes, eran entonces testimonio de la creatividad, de la energía y del compromiso democrático de una parte de la juventud. No obstante, se redujeron durante los años siguientes, bajo las presiones y amenazas del gobierno. Sin embargo, sumados a los pocos observadores extranjeros, de los cuales aproximadamente 350 son enviados por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), estos observadores ciudadanos no deberían cubrir más del 10% de los 180.000 lugares de votación.

En cambio, a lo largo de los años, los partidos políticos de la oposición adquirieron competencias y juegan un rol cada vez más importante en la supervisión y el recuento de la votación. “La oposición está mucho mejor organizada que antes; los asesores y fiscales aprendieron y están atentos –destaca Massicard–. El problema es que, en ciertas regiones, el plantel de los partidos no les permite enviar fiscales a todos los lugares de votación. Como la oposición está constituida por varias organizaciones que tienen bases electorales diferentes, es posible que se repartan ese trabajo en función de cada una de sus bases territoriales”.

A Erdoğan le gusta repetir que “la democracia comienza en las urnas y se manifiesta a través de las urnas”. Por ello, la politóloga turca Aslı Aydıntaşbaş (8) piensa que el presidente turco que “construyó su legitimidad sobre las elecciones no podrá impugnarlas si la victoria de la oposición es clara”.

En todo caso, lo que está en juego en mayo en Turquía va mucho más allá de una competencia electoral clásica. En 2014, los turcos se burlaron de las palabras del ministro de Energía, un cacique del AKP, según el cual los numerosos cortes de electricidad que habían interrumpido el recuento de los votos en 35 ciudades del país se debían a la intrusión de un gato en un transformador eléctrico. Nueve años más tarde, no es seguro que, en la misma situación, los votantes den prueba del mismo sentido del humor. Porque si la oposición perdiera por muy poco, su fracaso sería necesariamente interpretado bajo el prisma de las manipulaciones y de los fraudes reales o supuestos del partido en el poder. Traería el germen de la desconfianza, incluso del desinterés por los procesos electorales democráticos venideros, e incluso tal vez el germen de futuras violencias. ■

1. “Podrá volver a ganar Erdoğan”, www.eldiplo.org, marzo de 2023.

2. Sümbül Kaya, “La puesta en vereda del ejército turco”, *Le Monde diplomatique*, edición Cono Sur, Buenos Aires, octubre de 2016.

3. Es decir, el CHP, el Partido de la Democracia y del Progreso (DEVA), el Partido del Futuro (Gelecek), el Partido Demócrata (DP), el Partido Bueno (IYI), Saadet.

4. Es decir, el AKP, el MHP, el Partido de la Gran Unidad (BBP), el Nuevo Partido del Bienestar (YRP) y el Partido de la Causa Libre (HUDA-PAR).

5. Aurélien Denizeau, “Les coalitions politiques en Turquie à la veille des élections de 2023”, Instituto Francés de las Relaciones Internacionales (IFRI), París, abril de 2023, www.ifri.org

6. Véase Seren Selvin Korkmaz, “Turkey’s Visionary Opposition: A Proposal for New Government and Policymaking Structures”, German Marshall Fund, 29-3-23, www.gmfus.org

7. Citado por Jamie Dettmer, “It’s going to be hard to get rid of Turkey’s Erdoğan”, *Politico*, 18-3-23, www.politico.eu

8. Aslı Aydıntaşbaş, “Letter from Istanbul: Turkey has difficult years ahead”, *Brookings*, 4-4-23, www.brookings.edu

*Periodista, autora de *Turquie, l’heure de vérité*, Empreinte temps présent, París, 2019.

Traducción: Micaela Houston

En Francia, sobran leyes y faltan recursos

Violencia machista: reprimirla no basta



Bruna Truffa, *Serie Caminantes Matrix* (Fragmento - Figuras caladas en ploter sobre MDF), 2023 (Gentileza Espacio O)

Desde su primer mandato, el presidente francés Emmanuel Macron ha convertido la violencia machista en una prioridad nacional. Parece corroborarlo el mayor número de condenas a maltratadores en los tribunales, y la cuestión también figura en la agenda política y mediática de otros países europeos, entre ellos España. Sin embargo, en la persecución de este tipo de crímenes sucede como en las demás cuestiones de seguridad: se privilegia la política de cifras, de aparente intransigencia, descuidando la protección efectiva de las víctimas.

por Elsa Johnstone y Vincent Sizaire*

A pesar de avances reales, la dominación masculina continúa estructurando la mayoría de las relaciones de género, así como las representaciones que se les asocian. En ese sentido, las diferentes formas de violencia sufridas específicamente por las mujeres –desde ataques contra la integridad física hasta violaciones, pasando por el acoso y las agresiones sexuales– y, todavía más, la forma en que las autoridades reaccionan frente a ellas, constituyen el mejor indicador para medir la progresión de la igualdad real entre hombres y mujeres. Sancionar la violencia machista con un rigor a la altura del daño que provoca en la cohesión social es una de las maneras de hacer retroceder la dominación masculina. Dicho de otro modo, aunque las campañas de prevención y educación feminista desempeñan un papel importante, no pueden reemplazar la acción represiva y protectora que debe desarrollarse paralelamente.

Pero, aunque el nivel de represión de la violencia contra la mujer nunca ha sido tan elevado, el sentimiento de su impunidad sigue siendo particularmente intenso. Así, en un comunicado del 5 de octubre de 2022, el Alto Consejo para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (HCE, por sus siglas en francés) lamentaba que “las denuncias aumentan, la violencia no disminuye y su tratamiento (*sic*) permanece en gran parte impune”. ¿Cómo explicar semejante disonancia? El análisis detallado de la evolución del arsenal legislativo y de la actuación penal en las últimas décadas nos enseña que los poderes públicos privilegian un enfoque represivo que, aunque hegemónico, sigue presentando un carácter esencialmente espectacular y fragmentario.

Medidas y penas más duras

En Francia, en 1989 se impulsó la primera campaña nacional de información y se crearon las primeras comisiones departamen-

tales de acción contra la violencia machista, iniciativas continuadas en cinco planes interministeriales de prevención y lucha. Treinta años después, se han aprobado no menos de trece leyes –y más decretos y “circulares de aplicación”–: endurecimiento de ciertas penas (1992, 2007, 2010, 2020); creación de nuevas penas, como asistir a programas de intervención para maltratadores (2010, 2014, ley de 2019); ampliación de determinadas circunstancias agravantes, en particular para los cónyuges del pacto civil de solidaridad (PACS, unión civil francesa) (2006, 2010, 2018); creación de nuevos delitos, como el “acoso moral en la pareja” (2010, 2018, 2020) o nuevos dispositivos, como el “Téléphone grave danger” (2014) –un dispositivo de protección para las mujeres víctimas de violencia machista cuya atribución corresponde a la fiscalía– o la pulsera de seguimiento para maltratadores (2019). Sobre el papel, el sistema normativo destinado a luchar contra la violencia machista es, por tanto, uno de los más sólidos.

Semejante activismo normativo podría ser la prueba del compromiso del legislador frente al fenómeno. Desgraciadamente, una reforma sigue a otra sin una evaluación previa de las anteriores. Esta huida hacia adelante represiva desconoce la realidad sobre el terreno, en particular las dificultades propias de la comprobación y persecución de este tipo de delitos, dado el contexto íntimo en que suelen producirse. En ese sentido, el delito de acoso moral conyugal ilustra hasta qué punto las iniciativas del legislador erran el blanco. Desde 2005, el derecho positivo francés permite sancionar la violencia que no implique ningún contacto físico pero que haya provocado “un *shock* emocional” o una “perturbación psicológica” (1). No obstante, en 2010 el legislador decidió crear un delito específico para sancionar actitudes que no sean manifiestamente graves pero que, repetidas, caracterizan una situación de dominación en la pareja.

Una exhibición permanente

Ahora bien, mientras que el acoso en el ámbito del trabajo es más fácil de caracterizar debido a la naturaleza *a priori* profesional y más codificada de las relaciones laborales, las dinámicas, íntimas y complejas, de las relaciones de pareja complican el trabajo del juez. ¿Cómo fijar los límites de lo aceptable en materia de vejaciones sin caer en una penalización excesiva? La práctica rápidamente puso de manifiesto las numerosas dificultades de aplicación de ese delito debido, en particular, al carácter demasiado inaprensible de sus elementos constitutivos (2). Por lo tanto, ese delito se utiliza poco en los tribunales franceses. Sin embargo, el legislador sigue endureciendo las penas, introduciendo agravantes: “cuando un menor ha estado presente y sido testigo” (2018), “cuando el acoso en la pareja ha llevado a la víctima al suicidio” (2020).

Con todo, a consecuencia de esta hipereactividad normativa, el nivel de persecución y condena judicial de la violencia contra la mujer ha aumentado considerablemente. Definida como una prioridad por todas las circulares de política penal general desde hace más de diez años, la persecución de la violencia en la pareja ha pasado de 52.800 casos en 2012 a 81.300 en 2020, con un “índice de respuesta penal” cercano al 88% y un número de condenas que ha pasado de unas 22.200 condenas en 2017 a

alrededor de 33.800 en 2020 (3). A este aumento cuantitativo se suma un endurecimiento de las sanciones: por violencia con incapacidad total laboral superior a ocho días, las prisiones incondicionales decretadas pasaron del 44% en 2017 al 50% en 2019, con una media de trece meses de prisión incondicional. Y la justicia penal declaró culpable al 95% de las personas procesadas por violencia de género (4) mientras que, en el plano civil, la concesión de órdenes de protección aumentó un 110% en 2020.

En fin, la institución judicial es constantemente requerida para que implemente, sin los medios adecuados, las incesantes innovaciones del legislador. Así, cuando los “Téléphones Graves Danger” experimentaban un auge masivo, con más de 3000 dispositivos desplegados a finales de 2021 (frente a los 330 de marzo de 2019), los juzgados fueron conminados, desde finales de 2020, a implantar las pulseras para maltratadores, sin embargo menos adaptadas: el consentimiento de la víctima es obligatorio pero aún no existen cauces oficiales para recabar su opinión, las víctimas estarían sometidas a un importante estrés vinculado a la activación intempestiva de las alarmas, las interferencias serían frecuentes en el medio urbano (5)... Por no hablar del último capricho del Ministerio de Justicia, que se ha embarcado en el desarrollo de un programa de realidad virtual aplicado a maltratadores, financiando a la joven *start-up* Reverso que, según su sitio web, ofrece “soluciones inmersivas que te permiten ponerte en el lugar de los demás, lo que genera empatía”. Concretamente, los agresores se ponen cascos de última generación y ven una película de diez minutos “a 360°” con el objetivo de combatir la reincidencia. Se hacen patentes así los límites de una actuación pública perdida en una exhibición permanente.

Por el contrario, las estructuras asociativas y públicas que posibilitan la aplicación de penas pedagógicas (como los programas de intervención para maltratadores) o de acompañamiento (que implican un seguimiento médico o social) están faltas de financiación. Debido a la falta de plazas, estas condenas no carcelarias a menudo se reducen en la práctica a unos pocos días o incluso a un día, aun cuando el tribunal ha condenado al agresor a un curso de varias semanas. Medidas insuficientes para hacer frente a problemas de violencia con frecuencia arraigados en el tiempo (el 35% de las personas condenadas en 2015 por un delito de violencia de género eran reincidentes en un sentido amplio (6)) y que se acompañan de diversas adicciones, en particular alcoholismo, o de trastornos mentales (7).

Así, el modelo español, a menudo –y con razón– citado como ejemplo, es reducido con demasiada frecuencia a la ley orgánica de 28 de diciembre de 2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que bastaría con calcar para solventar todas las carencias del sistema francés. En realidad, la superioridad del modelo hispánico estriba en la importancia de los recursos destinados a esas políticas públicas: el Estado español les dedica 16 euros al año y por habitante, frente a los 5 euros de Francia (8). En otras palabras, no es tanto la ley como las condiciones concretas de atención a las denunciantes lo que debe cambiarse si realmente queremos mejorar la eficacia de la lucha contra la violencia machista. Desde

ese punto de vista, dos ejes de mejora resultan evidentes.

En primer lugar, hay margen para la mejora en los procedimientos a la hora de registrar el relato de las víctimas. Como lamenta con regularidad el defensor del pueblo, todavía se deniega la interposición de una denuncia a demasiadas personas, a las que se les ofrece, en el mejor de los casos, la presentación de una declaración, medida informal que no desemboca en ninguna investigación (9). Permitir que cualquier persona denuncie los hechos de los que ha sido víctima supone no solo fortalecer los recursos destinados a tal fin, sino también mejorar la formación inicial y continua de los agentes dedicados a dicha labor. Una orientación que no parece ser la del gobierno: reducida a ocho meses en 2021, la duración de la formación policial solo volvió a ser de un año bajo la presión de los profesionales sobre el terreno.

Reducir la impunidad

El mismo análisis puede hacerse respecto al derecho a una “evaluación personalizada” y a “medidas específicas de protección” oficialmente proclamado por la ley desde 2015 (10). Dada la falta de recursos, este continúa observándose de manera muy desigual, con asociaciones de apoyo a las víctimas faltas de subvenciones e incluso exámenes médico-legales –indispensables para caracterizar la existencia y el nivel de gravedad de la violencia– practicados por servicios hospitalarios con recursos apenas más boyantes. A este respecto, Francia ganaría inspirándose en otro ejemplo extranjero, el de los centros británicos de orientación para víctimas de delitos sexuales (Sexual Assault Referral Center, SARC). Establecidos en 1986 en Mánchester, se generalizaron por el territorio inglés y galés a partir de principios de la década del 2000. Los SARC suelen ofrecer a las víctimas de violación o agresión

sexual un apoyo integral, desde atención médica hasta acompañamiento psicoterapéutico, pasando por asesoramiento jurídico (11). Si bien el enfoque es principalmente sanitario, no desatiende la persecución de los delitos denunciados: el paso de la persona al centro es la ocasión de proceder al conjunto de reconocimientos médicos necesarios para la preservación de las pruebas. Estas muestras se conservan durante un periodo de dos años, tiempo que se deja a las víctimas para decidir si desean presentar una denuncia. Al convertir al personal sanitario, sujeto al secreto médico, en su primer interlocutor, este enfoque permite eliminar la reticencia de muchas mujeres a la hora de denunciar los hechos y contribuye así, de manera concreta, a reducir la impunidad.

La dificultad de ofrecer a las personas las medidas de protección que necesitan fuera de un marco represivo es la otra gran laguna del sistema francés. Parece como si no existiera más camino que la apertura de un proceso penal para poner fin a la situación de violencia. Esta representación, mantenida por los poderes públicos, alimenta lógicamente otra, según la cual toda denuncia debería ir seguida de una condena rápida, si no inmediata. Ahora bien, ese enfoque es sencillamente insostenible en una sociedad democrática. A menos que se sacrifiquen la presunción de inocencia y los derechos de la defensa –objetivo que ninguna feminista suscribe–, la conducción de un proceso penal no puede hacerse reduciendo los tiempos. La imperiosa necesidad de una inmediata protección de las víctimas exige otra clase de respuesta.

En 2010, inspirándose en el modelo español, el legislador introdujo en el derecho francés el mecanismo de la orden de protección que permite al juez de familia prescribir con carácter de urgencia determinado número de medidas cautelares destinadas a poner fin a la violencia o evitar su repetición (orden de

alojamiento, orden de abandonar el domicilio familiar, etc.). Pero esta herramienta aún dista de cumplir su objetivo. La orden de protección “a la francesa” sigue participando de una concepción represiva, ya que el juez debe hallar “motivos fundados para considerar creíble la comisión de los hechos violentos alegados” que, en cierto, modo se le anima a sancionar (12).

Este enfoque conduce, en efecto, a excluir el pronunciamiento de medidas cuando el juez considera que la violencia está insuficientemente caracterizada, en particular en ausencia... de denuncia penal. Convendría atenerse a la noción civil de peligro, bien conocida por los juzgados de menores. La idea es proteger de forma rápida y efectiva a las mujeres expuestas a malos tratos, no solo a actos de violencia física y psicológica sino, de manera más general, a una situación de dominación que suponga un riesgo para su salud o la de los demás miembros del hogar. En las antipodas de la huida hacia delante penal, el rápido acceso a una justicia de calidad especializada en violencia de género es una poderosa palanca para frenar las situaciones de violencia contra las mujeres en el marco de la familia (13).

Protección efectiva

Desvincular la necesaria represión de la violencia, por un lado, de la implantación de medidas civiles de protección de las víctimas, por otro, redundará en su protección efectiva. La respuesta penal ya no estaría conminada a aportar de urgencia una solución duradera ni, peor aún, a tratar de evitar por sí sola la comisión de nuevos hechos delictivos, sino que podría recuperar el lugar que le corresponde: dilucidar y, llegado el caso, sancionar los hechos denunciados. La lucha contra la violencia machista dejaría así de ser rehén de “los ruidosos mensajeros de la víctima invocada, nueva forma de martirio [que] ahoga la voz

de la víctima singular” (14). Ya es hora de liberar esa voz. ■

1. Resolución de la Corte de Casación del 2 de septiembre de 2005 (n.º 04-87-046).
2. Florian Berdeaux, “Harcèlement moral au sein du couple: sévérité des jurisprudences pénale et civile quant à la caractérisation des éléments constitutifs”, AJ Famille, París, septiembre de 2018.
3. Subdirección de Estadística y Estudios – Secretaría General del Ministerio de Justicia, “Le traitement judiciaire des violences conjugales – boîte à outils”, 2020.
4. Maël Löwenbrück y Louise Viard-Guillot, “Le traitement judiciaire des violences conjugales en 2015”, Infostat Justice, París, febrero de 2018.
5. Marie-Liévine Michalik, “Pourquoi les bracelets anti-rapprochements sont si peu utilisés”, *Le Figaro*, París, 12 de mayo de 2021.
6. Maël Löwenbrück y Louise Viard-Guillot, “Le traitement judiciaire des violences conjugales en 2015”, *op. cit.*
7. “Étude nationale sur les morts violentes au sein du couple”, Ministerio del Interior francés – Délégation aux Victimes, 2020.
8. Ludovic Lamant, “L’Espagne en pointe dans la bataille contre les violences de genre”, Mediapart, 30 de noviembre de 2017, www.mediapart.fr
9. “Rapport 2019”, Observatoire du Défenseur des Droits, París, junio de 2020.
10. Artículo 10-5 del Código Penal de Francia.
11. Maeve Eogan, Anne McHugh y Mary Holohan, “The role of the sexual assault centre”, *Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology*, vol. 27, febrero de 2013.
12. Artículo 515-11 del Código Civil de Francia.
13. Elsa Johnstone, “Le JAF, ce meilleur ennemi de la justice familiale”, *Délibérée*, n.º 1, París, 2017.
14. Denis Salas, *La volonté de punir. Essai sur le populisme pénal*, Hachette, París, 2005.

*Elsa Johnstone y Vincent Sizaire
Respectivamente: magistrada y profesora de la Universidad París Nanterre y magistrado, miembro del comité de redacción de la revista *Délibérée*, autor de *Être en sûreté. Comprendre ses droits pour être mieux protégé*, La Dispute, París, 2020.

Los Libros de la Radio que piensa



EDGARDO ENRIQUEZ FRÓEDDEN
TESTIMONIO DE UN DESTIERRO
Jorge Gilbert Ceballos

Ediciones Radio Universidad de Chile presenta el libro “Edgardo Enriquez Fróedden, testimonio de un destierro” de Jorge Gilbert.

Las transcripciones textuales y largas conversaciones entre el autor y Edgardo Enriquez, los silencios, los oídos, nos invitan a vivir de manera íntima procesos históricos fundamentales sucedidos en el Chile previo a la dictadura.



CANTO UNIDO UN ENCUENTRO AMERICANO
David Spener

Un relato en profundidad de la vida de cuatro importantes artistas, sus historias, anécdotas y los testimonios de quienes los conocieron. Violeta Parra, enmarcada en el clima social de su época. Una el relato de la chilena, la historia de Woody Guthrie, músico estadounidense, que nos muestra notables coincidencias. Otro tanto sucede con Víctor Jara y Phil Ochs, personajes que llegan a conocerse durante el Gobierno de la Unidad Popular. Al igual que Guthrie y Violeta, el lector puede apreciar con claridad la similitud entre las miradas de Jara y Ochs sobre la realidad que les tocó vivir.



BUENAS SEÑALES (PARA UN BELLO SINO)
Sergio Jara (Argo Jara)

“Una vez iniciada, es difícil distraerse de la lectura de este conjunto de crónicas, que nos llevan por una ruta que cruza distintos ámbitos de la vida. La del autor, claro está, pero también la del lector: Reflexiones sobre política, amor, libros, música, amistad, viajes, más recuerdos plagados de anécdotas que sin embargo trascienden con mucho lo meramente anecdótico...” “En más de algún pasaje, de pronto, inevitablemente se transportarán a momentos de la propia existencia, haciéndolos viajar hasta ese episodio vivido años ha, y que parecerá inmediatamente olvidado...”



LA POLICÍA EN DEMOCRACIA
Sebastian Roché

Sebastian Roché ha recogido el fruto de varios años de trabajo de campo y múltiples estudios comparados para intentar comprender de mejor manera la relación entre la policía y el público. Los gobiernos de los países que no han sabido adaptar sus policías al giro democratizador, enfrentan con mayor dificultad su relación con la ciudadanía. El interés de este análisis para América Latina es evidente. Los sistemas policiales de Francia y Chile comparten una tradición marcadamente centralizada de escasa transparencia. La policía es, ante todo, una institución al servicio de la comunidad.

102.5 FM

Adquiéralos en:
Miguel Claro 509
Providencia



Viaje al corazón de las finanzas británicas

La City de Londres, un poder parasitario

por Frédéric Lemaire*

El pasado otoño, Londres decidió suprimir el techo a los bonos de los banqueros introducido a raíz de la crisis de 2008. La clase política británica está siempre muy atenta al atractivo de su centro financiero. Su importancia para la economía británica puede convertirse en una maldición, sobre todo en un contexto de gran inestabilidad de los mercados mundiales.

Un haz de rascacielos dibuja la línea del horizonte de la City. Sus singulares formas han inspirado los gra-ciosos apodos de los londinenses: el “Bisturi” o el “Rallador de queso”. Con casi 250 bancos, Londres alberga la mayor concentración de bancos extranjeros del mundo. Se calcula que se negocia allí el doble de dólares que en los mercados de divisas estadounidenses. Con casi 860.000 personas empleadas en el sector de los servicios financieros –incluidos los servicios asociados de consultores, abogados y contables–, las finanzas representan el 18% de la población activa de Londres (1). Gran parte de estos empleos se concentran en un área de una milla (1,6 km) cuadrada –de allí el sobrenombre de Square Mile–, a la que hay que añadir enclaves recientes como Canary Wharf, que bordea el Támesis más al este.

La City no es solamente un distrito de negocios ajetreado durante la semana, que vive al ritmo frenético de los mercados financieros mundiales. También es el antiguo corazón histórico del Imperio Británico, donde las finanzas contemporáneas encuentran sus raíces. En el siglo XVII, los banqueros de Square Mile financiaban expediciones coloniales desde Londres a las Indias Orientales o a las Américas, un negocio tan arriesgado como lucrativo. Tabaco, café, índigo o incluso “oro blanco”, es decir, azúcar, alimentaban la maquinaria colonial. En los cafés o en los callejones ya se negociaban las acciones de las primeras sociedades anónimas, como la poderosa Compañía Británica de las Indias Orientales. Había otra actividad financiera que se desarrollaba en ese entonces: la de los seguros. Comerciantes, capitanes y armadores podían suscribir contratos para cubrirse de posibles pérdidas con un club de inversores conocido como Lloyd’s market, del nombre del propietario del establecimiento, Edward Lloyd. Actualmente, Lloyd’s es una de las mayores compañías de seguros del mundo.

La City fue la gran tesorera del Imperio, pero su estrella empezó a apagarse tras la Segunda Guerra Mundial. Mientras que sus financistas pudieron operar en todo el mundo hasta 1946, la ejecución de los acuerdos de Bretton Woods restringió fuertemente la circulación internacional de dinero. La crisis del Canal de Suez en 1956 marcó la pérdida de influencia del Reino Unido en la escena internacional. La retirada de las tropas británicas de Egipto bajo la presión de Estados Unidos y de la Unión Soviética fue de la mano de una especulación y una fuga de capitales que debilitaron la libra esterlina, piedra angular de la influencia y de las finanzas británicas. Presa de un declive que parecía ineluctable y de la competencia de Wall Street, los financistas de la City encontraron una solución. Para que Londres pudiera seguir desempeñando un papel en el nuevo orden financiero internacional, desarrollaron una verdadera industria de ocultación y encubrimiento de capitales.

Esto llevó al desarrollo de las transacciones con los dólares depositados en bancos europeos, o eurodólares, en Londres: un mercado de divisas desregulado que, a partir de los años 1960, atrajo a bancos de todo el mundo, en particular de Estados Unidos; con el beneplácito de la autoridad supervisora, el Banco de Inglaterra, que hacía la vista gorda ante las actividades de los bancos por cuenta de clientes no residentes. En la misma época, las instituciones de la City crearon filiales en varias jurisdicciones de ultramar, como las Islas Caimán y las Bermudas, para atraer a esos antiguos márgenes del Imperio a capitales que buscaban discreción: petrodólares de Medio Oriente, fortunas de los carteles narco, evasión fiscal, fortunas de dictadores, etc. Los capitales *offshore* no solamente quedaban sustraídos al control de los Estados: podían ser reciclados –o blanqueados– sin dificultad por las instituciones de la City a través el mercado de eurodólares.

Recupera protagonismo

En los años 80 se alcanzó una nueva etapa con la desregulación radical del sector financiero bajo la égida de Margaret Thatcher. Fue el “Big Bang” de 1986, que anuló las normas centenarias que regían la Bolsa de Londres, instauró un sistema de cotización electrónica continua y abrió el mercado bursátil a los grandes bancos. Las instituciones financieras estadounidenses, japonesas y europeas invirtieron masivamente en el centro financiero inglés para aprovechar este nuevo marco favorable al desarrollo desenfrenado de las finanzas. La City recuperó entonces un papel protagonista. Hoy contribuye a convertir al Reino Unido en el primer exportador mundial de servicios financieros, con un superávit comercial de más de 60.000 millones de libras (69.000 millones de euros) en 2020 (2).

Este auge, o más bien, esta renovación, no habría sido posible sin fuertes vínculos con la elite política y administrativa del Reino Unido. Una proximidad de larga data, inscrita en el mármol de instituciones como la City of London Corporation, la autoridad municipal multiseccular de Square Mile. Su sede, el Guildhall, se encuentra a pocas cuadras de la del Banco de Inglaterra. “Somos responsables del gobierno de Square Mile, pero también de defender los intereses de la City ante los gobiernos y de representar y promover el sector financiero británico en su conjunto”, explica Chris Hayward, director ejecutivo de la Corporación.

Los anfitriones del Guildhall se apresuran a ensalzar las virtudes democráticas del funcionamiento de la Corporación, heredado del Medioevo. A la vista de los visitantes se expone un ejemplar original de la *Magna Carta* de 1297, que reafirma las libertades concedidas por la realeza a los comerciantes y artesanos londinenses. “La Corporación es la democracia más antigua del mundo”, dice Hayward con entusiasmo. Aunque efectivamente las elecciones municipales se celebran cada cuatro años, entre los votantes hay representantes de las empresas que operan en la City en proporción a su personal. En otras palabras, son los mayores grupos financieros de la City los que dominan las elecciones del consejo.

Como verdadero órgano representativo de las finanzas londinenses, la Corporación ha acumulado una influencia única en la historia británica. Y recursos para nada despreciables. Los activos del City’s Cash, el fondo municipal destinado a gestionar su patrimonio, se estimaban en 3.400 millones de libras (3.900 millones de euros) en 2021 (3). La Corporación también tiene su propio representante en la Cámara de los Comunes. Este lobista en jefe, el Remembrancer, tiene derecho a sentarse como observador desde 1685. Dirige un equipo de abogados que examina los proyectos de ley que podrían afectar el sector financiero británico.

Para llevar a cabo su misión de promoción de la City, los dirigentes de la Corporación tienen a disposición un presupuesto anual que en 2021 era de 13,7 millones de libras (15,7 millones de euros). Un monto superior al del mayor lobby financiero de la Unión Europea, la poderosa Asociación de Mercados Financieros de Europa (AFME). Esta dotación anual cubre los gastos del Remembrancer; los gastos de representación del Lord Mayor, que es el alcalde de la City y embajador del sector financiero londinense a nivel nacional e internacional; y los gastos del Policy Chair, que dirige el ejecutivo municipal.

Tras la crisis financiera mundial, la venerable Corporación también contribuyó a dotar al sector financiero de una vitrina más “moderna” en 2010. TheCityUK es un grupo de lobby creado con el beneplácito del laborista Alistair Darling y del conservador Boris Johnson, entonces ministro de Finanzas y alcalde de Londres, respectivamente.

La influencia del lobby financiero londinense se extiende mucho más allá de las fronteras del Reino Unido. “Durante décadas, la City y sus batallones de lobistas han contribuido a labrar el debate regulatorio en Bruselas”, explica Kenneth Haar, investigador del Observatorio de la Europa Industrial. Es una de las razones por las que la gran mayoría de las instituciones financieras londinenses, a excepción de algunos ricos propietarios de fondos especulativos, se oponían al Brexit. “De hecho, el último comisario de la UE del Reino Unido antes del Brexit, Jonathan Hill, fue él mismo ex lobista de TheCityUK”. Con una cartera muy oportuna, ya que estaba a cargo de la estabilidad financiera, los servicios financieros y el proyecto de Unión del Mercado de Capitales.

El objetivo es competir

¿El Brexit? “Ya es historia –afirma el portavoz de TheCityUK, Jack Neill-Hall–. El panorama ha evolucionado, el sector se ha adaptado”. Según la consultora EY [Ernst & Young], representaría una pérdida de apenas 7.000 empleos, deslocalizados a París, Fráncfort y Dublín. Sin dudas, estas cifras están subestimadas, pero el Brexit no ha provocado, hasta la fecha, el desastre anunciado. Para Londres, agrega Neill-Hall, constituiría incluso una oportunidad para seguir siendo “competitivo” adoptando una normativa “flexible” y ajustada “a medida” de la industria británica. El objetivo es competir con Nueva York, “el único competidor de Londres a escala mundial”.

El llamado de la City parece haber sido escuchado por el gobierno conservador. El 20 de julio de 2022 presentó una nueva ley con el objetivo de provocar un “Big Bang 2.0” en las finanzas londinenses. Uno de sus impulsores, el actual primer ministro Rishi Sunak, entonces secretario de Hacienda, afirmaba en mayo de 2022 la necesidad de “reducir la carga regulatoria” (4). Esto incluía la introducción de un nuevo requisito para que los reguladores promovieran la “competitividad internacional” de los servicios financieros. En diciembre de 2022, el nuevo secretario de Hacienda, Jeremy Hunt, reafirmó esta dirección al anunciar una serie de reformas destinadas a deshacer la normativa prudencial adoptada tras la crisis de 2008. Esto ha suscitado la preocupación del columnista estrella de *Financial Times*, Martin Wolf, que advierte el riesgo de una “desregulación insensata” en el contexto actual (5).

“Los dirigentes políticos ven a la City como la gallina de los huevos de oro –explica John Christensen, experto en finanzas británicas– pero ya es hora de acabar con este discurso”. Porque el centro financiero es ante todo una forma de parasitismo: “Se dice que la City permite atraer capitales de China, Estados Unidos, Europa e invertirlos en el Reino Unido, pero ¿de qué tipo de in-

versión se trata? Inmobiliaria, bursátil o incluso fusiones y adquisiciones. Es decir, nada que beneficie la economía productiva”.

Para Marieke Beck, especialista de la City en el King’s College de Londres, el problema yace en el arraigo de los intereses de las finanzas en la sociedad, que alimenta su “poder estructural”. Desde el declive de la aristocracia terrateniente del siglo XIX, las finanzas dominan las demás fracciones de la clase dominante, en particular a los partidarios del capitalismo industrial, sobre todo gracias a sus relevos institucionales en el Banco de Inglaterra y el Ministerio de Finanzas (6). Con el retroceso del Estado de Bienestar y de las prestaciones sociales, por añadidura, los británicos tienen que recurrir a los fondos de pensiones para preparar su jubilación, o incluso a préstamos al consumo para asegurar su subsistencia en tiempos difíciles, aunque ello implique endeudarse mucho y muy temprano. Una gran parte de la población se encuentra, así, vinculada al sector financiero, por la fuerza o por elección.

Hoy, la City parece más capaz que nunca de imponer sus puntos de vista a las fuerzas políticas, incluso al Partido Laborista liderado por Keir Starmer. “Con Jeremy Corbyn demostramos que era posible y popular desafiar el poder de las finanzas –afirma James Schneider, miembro del ala izquierda laborista–, pero la actual dirección le ha dado la espalda a cualquier crítica a la City”. Invitada a la conferencia anual de TheCityUK de 2022, la diputada laborista y economista Rachel Reeves murmuró un discurso apaciguador de lobista: “El Reino Unido debería estar increíblemente orgulloso del éxito internacional de su industria de servicios financieros, de los que es el mayor exportador del mundo”.

Sin embargo, el modelo de crecimiento financiarizado promovido por la City podría tambalearse pronto hasta sus cimientos. Depende del flujo de capitales de todo el mundo para alimentar la inversión en actividades no productivas (sector inmobiliario, mercados financieros) y fomentar el consumo suntuario o a crédito. Sin embargo, las crisis recientes podrían contribuir al derrumbe de este castillo de naipes. El encarecimiento de la energía, la inflación en general y la suba de los tipos de interés iniciada por los bancos centrales han provocado una fuga de capitales “hacia la seguridad”, es decir, hacia las acciones estadounidenses. Este nuevo escenario podría agotar la fuente de liquidez a bajo costo de la que se han alimentado las finanzas mundiales desde hace tiempo. Las repentinas caídas del Silicon Valley Bank y del Crédit Suisse son prueba de lo extremadamente febril que es el sector, pero también de las consecuencias explosivas del desmantelamiento de las normas prudenciales en nombre de la competitividad. En este contexto, programar una nueva ola de desregulación financiera –como está haciendo el gobierno de Sunak a través de su proyecto de “Big Bang 2.0”– equivale a jugar con fuego sentado sobre un barril de pólvora. ■

1. “Key facts about the UK as an international financial centre 2022” y “Key facts about UK-based financial and related professional services 2023”, TheCityUK, enero y marzo de 2023 respectivamente, <https://thecityuk.com>

2. “State of the sector: annual review of UK financial services 2022”, informe conjunto del Tesoro Británico y de la Corporación de la City de Londres, julio de 2022, www.gov.uk

3. City’s Cash annual report and financial statements”, Corporación de la City, 2021, www.cityoflondon.gov.uk

4. Rowena Mason y Heather Stewart, “Rishi Sunak to weaken City regulation in post-Brexit nod to Tory donors”, *The Guardian*, Londres, 10-5-22.

5. Martin Wolf, “The UK needs to learn its own lessons from the banking crisis”, *Financial Times*, Londres, 2-4-23.

6. Franck Longstreth, “The City, Industry and the State”, en *State and Economy in Contemporary Capitalism*, Colin Crouch (dir.), Croom Helm, Londres, 1979.

*Economista.

Traducción: Emilia Fernández Tasende

El protagonismo de China en las encuestas

La felicidad, ¿un asunto de Estado?

por Frédéric Lebaron*

Hace quince años, en enero de 2008, el presidente francés Nicolas Sarkozy les encomendó a reputados economistas, entre ellos Joseph Stiglitz, la tarea de reflexionar acerca de la medición de los rendimientos económicos y el progreso social. Su ambicioso informe recomendaba reorientar las políticas públicas hacia el bienestar y la sustentabilidad medioambiental sin descuidar el nivel de vida de las poblaciones (1). Una de las medidas consistía en tener en cuenta los ingresos medianos (el nivel por debajo del cual se sitúa la mitad de la población) en lugar del sacrosanto Producto Interno Bruto (PIB), que mide la riqueza producida en un año, independientemente de su efecto beneficioso o perjudicial para las sociedades.

Como podía esperarse, esta “revolución” estadística no se produjo, y los dirigentes siguen con la mirada fija en el agregado estrella de sus cuentas nacionales. Aunque el informe Stiglitz tuvo escasa repercusión política, contribuyó al éxito de una disciplina: la economía de la felicidad (2). Su indicador se obtiene de manera muy sencilla, ya que cada encuestado determina en un cuestionario su nivel de satisfacción con la vida en una escala que suele ir del 0 al 10. De este modo se pueden clasificar países, regiones o ciudades, pero también grupos sociodemográficos, y correlacionar el resultado obtenido con numerosos factores, sobre todo socioeconómicos.

El “Informe Mundial sobre la Felicidad”, que simboliza este enfoque al más alto nivel, proviene de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y de socios privados como la fundación Izly. Se basa en una encuesta realizada anualmente desde 2012 en 135 países por el Gallup World Poll (3). Cada año, se publica el 20 de marzo, fecha del “Día Internacional de la Felicidad”, proclamado en 2012 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sus promotores, los académicos Richard Layard y Jeffrey Sachs, dirigen una vasta red mundial de economistas, que recurren tanto a la econometría –con la ecuación de la felicidad, que permite determinar el “peso” relativo de los diferentes factores– como a la neurociencia y a la psicología experimental. Los medios de comunicación se centran en el liderazgo mundial de Finlandia, pero la evolución detallada y las conclusiones científicas, aunque a menudo instructivas, pasan a un segundo plano.

Unos bajan, otros suben

Por ejemplo, entre 2012 y 2023, el nivel medio de satisfacción bajó de 7,3 a 7 en América del Norte, Australia y Nueva Zelanda, mientras que tanto en Europa Occidental como en América Latina y el Caribe se mantuvieron estables en 6,9 y 6, respectivamente. En Europa Central y Oriental, así como en Asia Oriental, hubo un aumento de 5,4 a 6,1 y 5,9 respectivamente, comparable al aumento más sorprendente de la Comunidad de Estados Independientes (incluidos Rusia y Ucrania) de 5,1 a 5,6. Mientras que el África subsahariana sube ligeramente, el Sur de Asia baja, al igual que Medio Oriente y Asia Central. Francia, por su parte, lleva muchos años rondando el 6,7 y el vigésimo puesto mundial.

Aunque la prosperidad compartida no conduce a la satisfacción subjetiva, sí contribuye significativamente a ella: los países más ricos e igualitarios muestran los mejores rendimientos globales, mientras que los países en crisis y con desigualdad muestran los peores. De todos modos, los discursos triunfalistas occidentales sobre las virtudes de su modelo no encajan bien con las variaciones abismales que se observan de una región a otra y a lo largo del tiempo.



Loro Coirón, Linograbado (Gentileza Galería Bahía Utópica)

Como una felicidad nunca viene sola, al mismo tiempo que se publicaba el “Informe Mundial sobre la Felicidad”, el instituto Ipsos publicaba los resultados de un “Informe Global sobre la Felicidad”, basado en una encuesta más reducida realizada a 22.508 individuos de 32 países (4). La pregunta era aun más directa: se preguntaba a los encuestados si eran felices, en una escala con menos niveles. Más allá del auge de felicidad pospandémico, lo que llama la atención es la clasificación de los países: con un 91% de individuos que se definen como muy o bastante felices, China domina la clasificación por delante de Arabia Saudita y Países Bajos. Sobre todo, se observa que la felicidad en los países con ingresos medios “ha aumentado más que en los de ingresos altos”, y supera actualmente a la que se siente en los países más ricos. Se acelera, pues, un fenómeno de “recuperación” entre los países emergentes y los desarrollados.

La situación no ha escapado a la atención de la prensa china. “China se ha convertido en el primer país del mundo con la mayor proporción de ciudadanos felices”, presume el diario *China Daily* (4 de abril de 2023). De hecho, el presidente chino, Xi Jinping, lleva varios años haciendo del “bienestar del pueblo” uno de los objetivos oficiales del Partido Comunista. En esta ocasión, se han adaptado los componentes de la beatitud: la noción incluye la confianza en las instituciones, la democracia y el Estado de Derecho (al estilo chino). La felicidad ocupa ahora un lugar central en el discurso universalista difundido por las autori-

dades chinas en todo el mundo, junto con la globalización, el libre comercio, el crecimiento ecológico y la confianza en los gobernantes. Frente a los universalismos estadounidense y europeo, la República Popular ofrece al resto del mundo un tercer polo de atracción ideológica, que niega –también– cualquier forma de imperialismo (5).

Los indicadores

Antes de China, el pequeño reino de Bután había protagonizado un enfrentamiento ideológico muy desigual con los criterios occidentales de felicidad, en forma de promoción de la “Felicidad Nacional Bruta”, establecida en 1972 en torno a la preservación de la naturaleza y el patrimonio cultural budista del reino (6). Un poco más tarde, la creación en 1990 del Índice de Desarrollo Humano (IDH) por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), bajo el impulso del economista indio Amartya Sen, permitió modificar la medición de los rendimientos sociales de los países introduciendo la salud y la educación, lo que hizo algo más compleja la visión de las dinámicas y jerarquías mundiales. Actualizado tras el informe de Stiglitz, con la inclusión de datos adicionales sobre las desigualdades, el IDH muestra claramente la ruptura de 2020: en promedio, la pandemia ha calmado la alegría del mismo modo en que ha reducido la esperanza de vida y los ingresos (7). Pero sus curvas también confirman la fortísima progresión de China y de varios países asiáticos desde 1990. Sin embargo, los paí-

ses más “desarrollados humanamente” siguen siendo los países capitalistas dominantes, sobre todo cuando han corregido mucho más las desigualdades económicas, como en Escandinavia.

Estos índices, indicadores y gráficos confirman también una tendencia fácilmente observable. Tanto en los países occidentales como en los emergentes, la búsqueda de la felicidad está omnipresente en las organizaciones, en las redes sociales o en las librerías. Adopta la forma de una oferta a menudo comercializada, que va desde el yoga globalizado hasta diversas formas de psicología positiva promovidas por profesionales del desarrollo personal (8). Sin embargo, el bienestar sigue estando principalmente asociado a la comodidad material, al rendimiento individual y al crecimiento económico, incluso en las políticas públicas: la actividad económica lleva al empleo, que a su vez lleva al consumo de mercado, la satisfacción, etcétera. Las cifras del PIB y los índices bursátiles, que siguen subiendo a pesar de las perturbaciones cada vez más frecuentes, siguen marcando el ritmo de la vida cotidiana de los ciudadanos.

El neoliberalismo

Basadas hace cuarenta años en la promesa de un futuro individual radiante, las políticas neoliberales promovidas en el Norte adolecen, sin embargo, de defectos varios: no garantizan unos rendimientos macroeconómicos sostenibles y, por el contrario, debilitan el potencial de crecimiento al aumentar las desigualdades, degradar el medioambiente, las infraestructuras públicas y lo que ellas mismas denominan “capital humano”. Acentúan la polarización interna de las sociedades nacionales, provocando una pérdida relativa de confianza por parte de algunos ciudadanos, por no hablar de conflictos sociales cada vez más acalorados, por ejemplo, sobre el reparto de los “esfuerzos” generados por la lucha contra la deuda pública. Con el declive relativo de Occidente en el sistema económico y político mundial, estas políticas fomentan incluso una lógica bélica o de “Guerra Fría”. Incapaces de contrarrestar el cambio climático y la ansiedad que provoca, especialmente entre los jóvenes, degradan gravemente la calidad de la vida social y afectan el sentido de justicia de las personas, empujándolas hacia la búsqueda interminable de los paliativos que ofrece el mercado del bienestar.

Si el séptimo cielo se ha convertido en un “asunto de Estado”, éste sólo puede atribuirse un verdadero triunfo en este ámbito: la felicidad de los accionistas. ■

1. Joseph Stiglitz, Amartya Sen, Jean-Paul Fitoussi, “Informe de la Comisión sobre la Medición del Desarrollo Económico y del Progreso Social”, septiembre de 2009. Véase también la tesis doctoral defendida por Félicien Pagnon, “Après la croissance : Controverses autour de la production et de l’usage des indicateurs alternatifs au PIB”, defendida en la Universidad París Dauphine el 30-11-22, bajo la dirección de Dominique Méda.
2. Claudia Senik, *L’Économie du bonheur*, Paris, Seuil, 2014.
3. <https://worldhappiness.report>
4. “Global Happiness 2023. Life Satisfaction Across the World”, Ipsos, marzo de 2023, www.ipsos.com
5. Véase el último libro de Pierre Bourdieu, *Impérialismes. Circulation internationale des idées et luttes pour l’universel*, Raisons d’agir, Paris, 2023.
6. Thierry Mathou, *Le Bhoutan. Royaume du Bonheur National Brut. Entre mythe et réalité*, L’Harmattan, Paris, 2013.
7. Human Development Index, <https://hdr.undp.org>
8. Para un análisis crítico reciente de inspiración feminista, Camille Teste, *Politiser le bien-être*, Binge Audio-Editions, Paris, 2023.

*Profesor de Sociología de la Escuela Normal Superior París-Saclay.
Traducción: Emilia Fernández Tasende

Teatro

Actuar para la clase obrera

por Nicolas Beauvillain

A principios de la década de 1930, unos grupos de teatro aficionado practicaron este arte al servicio de la lucha revolucionaria. El Grupo Octubre, con textos vigorizantes e intrépidos firmados por Jacques Prévert, uno de sus pilares, reinventó la “agitprop”. Fue una compañía de leyenda prácticamente olvidada hoy.

“Desconfiad... desconfiad... desconfiad / El capital es duro, astuto, hipócrita... / Os pasará la mano por el lomo / Para ponerlos mejor la sogá al cuello” (1). Son palabras de Jacques Prévert. Un Prévert distinto del escritor sentimental al que con frecuencia se le reduce.

En ocasiones, el teatro se despoja de su parafernalia burguesa y se acerca a los espacios frecuentados por el “pueblo”, para hablar a cuanta más gente mejor de la lucha de clases, la revolución, la posibilidad de un futuro mejor (2). Es lo que entre 1932 y 1936 hizo en Francia el Grupo Octubre.

Tras el crac bursátil de 1929, la crisis golpea a toda Europa. Desde 1931, en Francia, las fábricas cierran, los salarios caen, la miseria aumenta, los derechos sociales son inexistentes. Para algunos, el teatro se convierte en un instrumento de lucha. En 1932 abundan las compañías de aficionados. En numerosas ciudades o mediante asociaciones gremiales, los trabajadores se reúnen, ensayan y actúan. Estas compañías, agrupadas en la Federación de Teatro Obrero de Francia (FTOF), nacida en 1931 e impulsada en particular por Léon Moussinac, se ponen al servicio de las organizaciones revolucionarias –el Partido Comunista Francés (PCF) y la Confederación General del Trabajo Unitaria (CGTU)– al entender que su trabajo es un medio de emancipación.

En la FTOF, algunos actores aficionados parisinos del “grupo de choque” Prémices quieren ir más lejos y hacer teatro de “agitprop” (de la contracción de los términos en ruso “agitación” y “propaganda”) representando, allí donde sea posible, textos anclados en la actualidad. Pero necesitan un autor. Moussinac les habla de un “chico muy divertido, que promete y que se llama Jacques Prévert” (3). Prévert tiene 32 años, ha abandonado a los surrealistas de la banda de André Breton y solo ha publicado algunos textos. Pero ha firmado en la revista *La Scène Ouvrière* un artículo que concluye así: “Para los proletarios no hay teatro. En cuanto se presenta a un obrero o un campesino en un escenario francés, es para ridiculizarlo o para mostrarlo rebelde en el primer acto, más reflexivo en el segundo, más tranquilo y traicionando a su clase en el tercero. No es momento de dormirse, hay que criticar rápido, decir ‘no’. Ahora o nunca: es hora de hacer nuestro propio teatro”. Todos estos jóvenes, los disidentes de Prémices y Jacques Prévert, se citan en abril de 1932. Lazare Fuchsmann, Jean Loubes, Raymond Bussièrres y Arlette Besset, a partir de una idea de esta última, le encargan un *sketch* sobre la prensa para las próximas elecciones legislativas. Una semana después, Prévert les entrega el texto solicitado. *Vive la presse* fustiga los vínculos entre el poder –político, religio-

so, económico– y los medios de comunicación. La bufonada destila comentarios mordaces y termina con un coro hablado. Los “comanditarios” están encantados, es justo el tono que están buscando. Prévert no quiere ser solo autor: también quiere participar. Trae consigo a compañeros como Marcel Duhamel, futuro fundador de la colección de novela negra *Série Noire* de la editorial Gallimard, o Paul Grimault, que más tarde firmaría con el poeta la película de animación *La Bergère et le Ramoneur*. Acaba de nacer un nuevo grupo de teatro. En homenaje a la Revolución rusa de 1917, se bautizan como Grupo Octubre, “para que no haya lugar a dudas”, como dice Bussièrres.

Blancos privilegiados

Vive la presse es representada a partir del 25 de abril en los suburbios parisinos ante obreros de la construcción en huelga. El estilo del Grupo Octubre se consolida. A finales de mayo de 1932, pone en escena un nuevo texto para conmemorar la Comuna de París. Obras cortas, coros hablados, noticias de actualidad, canciones o coreografías; Prévert construye día a día un repertorio para el grupo, y cada cual pone al servicio del proyecto su talento como músico, constructor, modisto o mecanógrafo. Esos textos, aprendidos y ensayados con rapidez, los representarán en patios de escuelas, plazas públicas, fiestas populares y fábricas en huelga, con disfraces y accesorios prestados para la ocasión por amigos que frecuentan los platós de cine; denuncian la guerra, la religión, la indecencia de los poderosos, el fascismo que se consolida. El capitalismo y sus condiciones de trabajo son blancos privilegiados, en sintonía con unos movimientos sociales cada vez más activos. Son muchos los escritos de Prévert que datan de la década de 1930, y resultan más que nunca de actualidad. Basta con cambiar los nombres de los prefectos de policía o de los ministros. Los apellidos de las grandes fortunas a menudo siguen siendo los mismos.

Un ejemplo sin duda sorprendente de la reactividad del Grupo Octubre es el texto *Citroën*, escrito en marzo de 1933. Tras un despido improcedente en una fábrica de Citroën, ocho mil obreros inician una huelga de solidaridad que durará tres meses. Raymond Bussièrres, que por entonces trabaja como dibujante en la prefectura de París, está al corriente del asunto. Se pone en contacto con Prévert y este último escribe un texto que ensayan por la tarde; *Citroën* se representará esa misma noche en uno de los piquetes de huelga. “Un obrero es como un viejo neumático, cuando uno de ellos revienta, no se le oye reventar” (4).

Aunque el Grupo Octubre actúa para la clase obrera, sus miembros proceden en ge-

neral de entornos artísticos o intelectuales y, a veces, son de extracción burguesa. Pero quieren cambiar el mundo, en particular con el teatro. Crean, charlan y se pelean, pero luchan unidos. Algunos son miembros del PCF, otros son trotskistas y otros anarquistas o seguidores de alguna de esas corrientes. Prévert, aunque se posiciona, no adopta el carné del Partido. Toda su vida se negará a “ajustarse a un molde”.

La popularidad del grupo crece: la FTOF lo elige, junto con Les Blouses Bleues de Bobigny, para que represente a Francia en las Olimpiadas de teatro obrero en Moscú. El 13 de mayo de 1933, los grupos franceses, británicos, neerlandeses y belgas se embarcan en Londres en un barco fletado por la Unión Soviética. Durante cinco días, el *Koopératzia* navegará al ritmo de los ensayos de cubierta y las fiestas de los camarotes. Para evitar un largo desvío, el barco pasa por el canal de Kiel, en territorio alemán; con su bandera roja, se cruza con barcos alemanes que enarbolan la esvástica. Los estibadores levantan el puño discretamente. Una vez llegado a Rusia, el grupo tiene un apretado programa de representaciones, visitas y encuentros con un guía, el “ojo de Moscú”, que les deja poca libertad de movimiento. Mientras que algunos quedan encantados con lo que ven del sistema soviético, otros, entre ellos Prévert, se muestran más críticos.

Para la gran gala, actúan ante el prestigioso director de escena alemán Erwin Piscator y ante el ruso Konstantín Stanislavski, célebre director de actores y creador del Teatro de Arte de Moscú. Descontento con *La Bataille de Fontenoy*, una farsa de Prévert en un acto substituida *Théâtre aux armées* que se mofa de todos los belicistas, Josef Stalin abandona la sala. Pero la representación (con Prévert, Yves Allégret y Jean-Paul Dreyfus, más tarde conocido como *Le Chanois*) es alabada por el público y el *Pravda* (el periódico oficial del Partido Comunista). Los “octubristas” se negarán a firmar una nota de completa satisfacción con la política de Stalin... Vuelven triunfalmente a Francia, congratulándose por haber obtenido el primer premio –aunque no es del todo cierto ya que no se ha entregado ningún primer premio; pero qué más da, así debería haber sido–.

Luchar en España

Sin embargo, es el final de la edad de oro. Se está gestando un cambio. Algunos miembros abandonan, llegan otros nuevos, como Maurice Baquet, y se acercan algunos “profesionales”. Para mantener su libertad, el Grupo Octubre no recibe ninguna ayuda de partidos o sindicatos. Si bien Marcel Duhamel, de familia acomodada, se hace cargo de cierto número de gastos, sigue siendo necesario trabajar. Algunos comienzan a hacerse un nombre en el cine y le dedican cada vez más tiempo, incluido Jacques Prévert.

Tras los disturbios de extrema derecha del 6 de febrero de 1934, varios miembros firman el manifiesto fundacional del Comité de Vigilancia de Intelectuales Antifascistas, *A los trabajadores*. Hasta julio de 1935, la compañía volverá a estar muy activa, vituperando el fascismo cuyo triunfo en Francia anhelan algunos notables y propietarios, denunciando los beneficios

y fastos de la burguesía mientras los “camionantes del hambre” reclaman trabajo y pan, sublevándose ante los llamamientos a la guerra. “Camaradas, nos acostumbramos demasiado a la muerte de los demás [...] camaradas, cuidado, también quieren vuestra piel [...] estamos vivos, pero ¿por cuánto tiempo? [...] Defendedos. Contra el fascismo y la guerra. Todos unidos. Frente Popular”.

Vuelven las intervenciones en la calle y... en los bailes, donde algunos a veces se suben a una mesa durante la pausa de la orquesta para recitar un texto ante la multitud. Mientras algunos actores de la Comédie Française de gira por Italia hacen el saludo fascista, en junio de 1935, invitado por el Gobierno comunista de Saint-Cyr-l'École, que organiza una “fiesta bretona”, el Grupo Octubre ofrece un gran desfile de carnaval titulado *Suivez le druide, revue bretonne*. La prensa conservadora hablará de una odiosa mascarada de delincuentes. Sin duda, pasar frente a la escuela militar blandiendo pancartas que recuerdan que en esa ciudad “gobiernan los trabajadores” no es algo del gusto de todo el mundo. En julio, Roger Blin, Jean-Louis Barrault y los hermanos Mouloudji se unen a la compañía. Pero el Grupo Octubre, cansado, hará una nueva pausa, que durará hasta mayo de 1936, cuando la coalición de fuerzas de izquierda llegue al poder. La compañía contribuye al alborozo popular actuando en las fábricas y comercios en huelga. El 1 de julio se organiza una velada en la jovenísima Maison de la Mutualité: será la última.

Las diferencias se agudizan. Los límites del Frente Popular, la pertinencia de ir a luchar a España, donde la sublevación militar de julio de 1936 contra el Gobierno republicano desemboca en guerra civil, la mano que el PCF tiende a los católicos... son solo algunas de las cuestiones objeto de discrepancia. El grupo se separa antes de enfadarse, para “intentarse felices, aunque solo sea para dar ejemplo”, como escribirá Prévert más tarde, en *Spectacle*.

Poco queda del Grupo Octubre por lo que se refiere al gran público, pero su acción, aunque obviamente no es recuperable como tal, tiene una fuerza resueltamente incitativa. Porque “la vida todavía no es tan de color de rosa ni tampoco tricolor. La vida es roja, como la sangre que corre por vuestras venas. Es vuestra vida viva, la vida de los trabajadores vivos. Defendedla contra la muerte, contra el mundo de los muertos. El mundo de los tristes y de los amargados”. ■

1. El conjunto de textos citados de Jacques Prévert provienen de Jacques Prévert, *Octobre. Sketches et chœurs parlés pour le Groupe Octobre 1932-1936*, textos reunidos y comentados por André Heinrich, Gallimard, París, 2007.

2. Cf. Olivier Neveux, *Théâtres en lutte. Le théâtre militant en France des années 1960 à nos jours*, La Découverte, París, 2007.

3. Michel Fauré, *Le Groupe Octobre*, Éditions Christian Bourgois, París, 1977.

4. Para ver y escuchar a Prévert recitar *Citroën*, <https://youtube.com/watch?v=p63vCZeSNTQ>

*Corresponsable artístico de la compañía La Chaloupe (Niort), director de escena del espectáculo *Octobre*.

Grandes editoriales controlan el mercado

La literatura, un producto más

por Hélène Ling y Inès Sol Salas

Hace ya más de treinta años que en los saturados estantes de las librerías apenas se ve otra cosa que no sean novelas destinadas al éxito: firmadas por nombres conocidos o envueltas como regalos por la faja de algún premio literario de prestigio. Sin embargo, estos títulos, que ocupan todo el espacio, no son solo un síntoma de la sobreproducción, con frecuencia denunciada y deplorada. Su marcado aire de familia evidencia la uniformización en curso. Las prácticas de escritura están cada vez más codificadas, responden a una lógica de *marketing*, resultando intercambiables. La obra literaria se ha ido transformando paulatinamente en un objeto obsoleto, de contenidos esperables y lenguaje plano, en un academicismo de la trivialidad. ¿De dónde viene esa estandarización, esa uniformización del horizonte colectivo? ¿Es culpa del público, demasiado buen cliente? ¿De la supuesta “democratización de la literatura”? ¿De las políticas de edición?

A pesar de su estatus simbólico, la literatura nunca ha permanecido al margen de la historia económica. Bajo la batuta de conglomerados de la industria y la comunicación, el mundo editorial ha conocido una larga serie de reestructuraciones (1). El doble fenómeno de sobreproducción y concentración afectó de lleno a Francia a partir de la década de 1990. En la actualidad, cuatro grandes grupos (Hachette Livre, Éditions, Médias-Participations y Madrigall) dominan tres cuartas partes del mercado, en un juego de fusiones todavía inestable. Sin duda, cuando en 2022 el jurado del Premio Goncourt tuvo que elegir –cruel dilema– entre *Vivre vite* de Brigitte Giraud y *El mago del Kremlin* de Giuliano da Empoli, sus respectivos autores estaban un poco nerviosos; sus editoriales lo estaban mucho menos, ya que ambas –Flammarion en el caso de la primera, Gallimard en el del segundo– pertenecen a la misma casa matriz, Madrigall. Pero los dos títulos en liza ilustran sobre todo en qué consiste la literatura comercial. Ambos remiten a géneros consolidados: una autoficción, relato íntimo de un duelo; y un libro de actualidad que, según el editor, “revela los entresijos de la era Putin”. Dos categorías exitosas. *El mago del Kremlin* se está vendiendo bastante bien. *Vivre vite*, Premio Goncourt 2022, ya ha sido objeto de varias propuestas de adaptación cinematográfica. También están, por supuesto, los viajes neoeotópicos de Sylvain Tesson o las novelas edificantes, *La elegancia del erizo* de Muriel Barbery o *Estoy mucho mejor* de David Foenkinos. Pero cualquiera que sea su variante genérica, el libro que satura el espacio de las librerías nunca deja de ser un “apéndice del imperio del entretenimiento y los medios de comunicación”, tal y como señala André Schiffrin.

Al mismo tiempo, estas últimas décadas se está librando otra batalla en el ámbito de la recepción. Para captar una atención cada vez más dispersa, más solicitada, las industrias culturales imponen sus formatos –*streaming*, hilos, *stories*– en las redes sociales. Lo que ahora se llama “ficción” abarca novelas, relatos y largometrajes dentro de la industria de la información y el entretenimiento; podrá dar lugar sucesivamente a películas, series y juegos. En la cadena de producción de “contenidos” multimedia, el libro ya solo es un elemento más. La ficción, reducida a una “historia”, a menudo basada en “hechos reales”, propulsada por emociones fuertes y en la mayoría de los casos con “final feliz”, está pensada para ser adaptada por Netflix u otra plataforma, fuente principal de notoriedad y ventas.



Marcela Trujillo, de la serie *Pinturas veganas* (Acrílico sobre tela), 2016 (www.marcelatrujillo.cl)

La evolución de las estructuras tecnoeconómicas, la presión de la rentabilidad y del éxito han transformado rápidamente las propias prácticas literarias, sus formas y lenguaje (siempre políticos) con la concurrencia de las grandes editoriales, la crítica, los medios de comunicación y las políticas públicas. Incluso las voces que se presentan como rebeldes pueden ser fagocitadas. Virginie Despentes, identificada como *punk* y disidente, participó en 2013 en una colección de publirrelatos, *La Malle*, para la casa Vuitton, que poco antes había entrado en el capital de Gallimard, su editorial. En 2015 fue miembro del jurado del Premio Femina. En 2016, ingresó en la Academia Goncourt (que abandonó en 2020). En 2022, con *Cher Connard*, se benefició de una promoción mediática que nada tuvo que envidiar al más consensuado de los *bestsellers*. Generalmente, la posición crítica frente al mercado es convertida en un producto, *mainstream* o de nicho, lo que termina neutralizando toda su carga subversiva.

Estrellato mediático

Del mismo modo, las referencias, las categorías implícitas de la recepción se han desdibujado. Los buenos sentimientos de David Foenkinos se publican en la colección blanca de Gallimard –que todavía vive de su reputación– y las consideraciones mundanas de Jean d’Ormesson ocupan un lugar de honor en la Pléiade, junto a Claude Simon, Jules Vallès, André Breton... Este nuevo consenso es invocado tanto por el novelista de éxito Marc Levy como por el empresario Michel-Édouard Leclerc, que ha abierto “espacios culturales” en sus grandes superficies. Lo que se bautiza como “democratización” de la cultura designa en realidad una diversidad pseudodemocrática, completamente normalizada.

Los autores también están sujetos, personalmente, a los imperativos de rentabilidad del capitalismo tardío. El escritor se ve forzado a trabajar: en el mejor de los casos, como un icono del estrellato mediático, en los programas de entrevistas, con un formato basado en el cotilleo y el entretenimiento, como Yann Moix o Christine Angot, que han generado espectáculo en el programa de televisión *On n’est pas couché* de Laurent Ruquier, en el canal France 2; más a menudo, como neoproletario, a la búsqueda de becas y residencias de autores, animando establecimientos públicos y escolares para sobrevivir. La prescripción del libro se enriquece con multitud de jurados y premios –premios de medios de comunicación, tiendas y lectores (Goncourt des détenus, Prix des lecteurs U, Prix RTL-Lire; fueron más de dos mil en 2022 en Francia). Y se organiza un *marketing* web muy profesionalizado: nombres conocidos se convierten en verdaderas marcas e *influencers*, como la “instapoeta” Rupi Kaur o la novelista Tatiana de Rosnay. La crítica, por su parte, transformada en recomendación, se despliega en forma de crónicas de dos minutos en “booktube”, “bookstagram” o “booktok”, cuando no se reduce simplemente a *hashtags*. También encontramos las nuevas pedagogías digitales, que hacen dialogar al *Bel Ami* de Guy de Maupassant y sus conquisitas en Facebook y otras redes sociales...

Las propias prácticas de escritura participan de ese panorama global. Siguiendo la tendencia general, convergen hacia las categorías de la comunicación y la actualidad, en una serie de registros y estilos reconocibles. Las voces singulares escasean, pues el éxito pasa por la práctica estandarizada de la lengua. De ese modo, la permanente vuelta a formas heredadas de la modernidad hace estragos, alumbrando cuasi pastiches que las transponen sin realmente reconsiderarlas: el relato neodurasiano (*Voy a hablar de Sarah*,

de Pauline Delabroy-Allard), la novela poshistórica vitrificada (*El verano de los cuatro reyes*, de Camille Pascal), el *thriller* artístico-realista (*Canción dulce*, de Leïla Slimani), el folletín infinito de la autoficción (*El reino*, de Emmanuel Carrère), etc. Pero lo que con diferencia domina el conjunto es el tono neonaturalista que, supuestamente, reproduce la realidad con toda transparencia. Asistimos incluso a un renacimiento de la novela de tesis, por ejemplo, en dos escritores que, *a priori*, se oponen en su exploración de los avatares del deseo. Michel Houellebecq, jugando con su figura de multiartista, despliega en su obra una fraseología obsesiva, centrada en las formas de la huida y proyectada sobre la decadencia de Occidente. En el otro extremo del espectro, Édouard Louis (*Para acabar con Eddy Bellegueule*, etc.) parece transcribir ese discurso a través de un prisma de teoría sociológica.

Bienes de consumo

Este mercado del libro-producto, que ha terminado moldeando el gusto e imponiendo sus normas, es lo contrario de una verdadera democratización de la literatura. En determinados periodos, esa aspiración comenzó a materializarse cuando una parte del pueblo se apoderó de la palabra impresa, la poesía, como herramientas de emancipación y recreación de los objetivos colectivos. Así fue, por ejemplo, durante el camino lleno de tensiones hacia la revolución social, como lo demuestran los escritos y diarios obreros de la década de 1840 estudiados por Jacques Rancière (2) o, de manera muy diferente, durante el advenimiento de la contracultura de las décadas de 1960-1970. Treinta años después, las esperanzas de vincular la experiencia estética a un cambio en las formas de vida se vieron reducidas a la gestión neoliberal de la industria del ocio –reforzada por la canalización de la atención mediante algoritmos–.

En la actualidad, emanciparse, como todavía intenta hacer mucha gente del medio –de la escritura, la edición y las librerías independientes– implicaría una profunda ruptura con la esfera productiva, que ha transformado la creación artística en bienes de consumo culturalizados. Este sesgo se impone a cualquier obra, en la actualidad percibida a través del filtro y condicionamiento del *marketing*. El público es constantemente invitado a consumir cultura, como entretenimiento, como tendencia o como “tema” social o de actualidad. Pero para liberarse del lenguaje operativo y normativo, sería necesario redescubrir el sustrato utópico que subyace en el uso poético de la lengua, que hace surgir lo posible, lo impensado, a través del trabajo de los signos y el juego de la interpretación. A contracorriente de esa cadena de productos, que ahora es posible confundir con “los escritos” –los cálculos– de una inteligencia artificial, habría que recrear, según Walter Benjamin, esas utopías intermitentes, “donde algo auténticamente nuevo se escucha por primera vez con la serenidad de un nuevo amanecer” (3). ■

1. Cf. André Schiffrin, *L’Édition sans éditeurs*, La Fabrique, Paris, 1999; así como Thierry Discepulo, *La Trahison des éditeurs*, edición revisada y completada, Agone, Marsella, 2023. Véase también Jean-Yves Mollier, “Édition, le tournis des concentrations”, *Le Monde diplomatique*, octubre de 2022.

2. Jacques Rancière, *La Nuit des prolétaires*, Archives du rêve ouvrier, Pluriel, Paris, 2017 (1ª ed. 1981).

3. Walter Benjamin, *París, capital del siglo XIX*, Olañeta, 2021.

*Profesora y coautora de *Le Fétiche et la plume. La littérature, nouveau produit du capitalisme*, Rivages, Paris, 2022s.



Estados Unidos, del auge a la crisis

Luis Maira
Ediciones F.C.E., 2022, 288 páginas

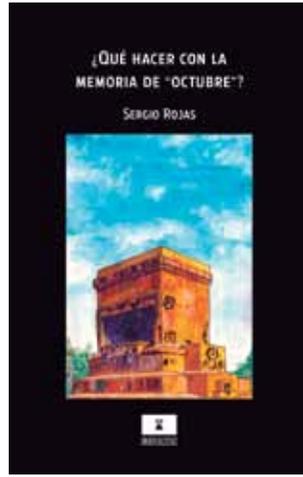
Este es un trabajo muy cuidadoso. Su autor quiere mostrarnos “una perspectiva latinoamericana”, más bien desde nuestra política exterior, de la historia de las instituciones de los Estados Unidos de Norteamérica. Tras un ilustrador resumen de los orígenes coloniales de los EEUU, arremete a la tarea de establecer el marco de la investigación que nos ofrece y entregarnos algunas definiciones políticas, incluidos términos como nación o Estado, aunque no tengo claro si estas distinciones eran necesarias para su trabajo. Este marco es necesario para lograr consistencia política, necesidad que también comprendió su presentador estadounidense. El libro se divide en una Introducción, cuatro partes y catorce capítulos. La primera parte, y sus dos capítulos, nos presentan aspectos propios de las instituciones estadounidenses, sus orígenes, algunos debates relevantes y su consolidación. Aquí la mirada se fija en Norteamérica más que en su relación con Latinoamérica. Desde la segunda parte, crecientemente la mirada se hace desde el Sur. Es importante la “agenda de la crisis actual” que nos presenta en el capítulo seis. La “Doctrina Monroe”, el “Destino Manifiesto” o el “Corolario Roosevelt”, así como los efectos del triunfo de la Revolución Cubana y la derrota estadounidense en Vietnam, nos son mostrados en relación con las instituciones que tienen relevancia para las relaciones con Latinoamérica.

“Desde el fin de la guerra fría, la política exterior norteamericana resulta ser la suma de una ‘colección’ de políticas exteriores especializadas. Entre ellas, muchas veces no existe armonía, sino más bien conflicto”. La conclusión conocida, la falta de unidad de los Estados Latinoamericanos, también está presente.

La relación de estos conflictos institucionales de los EEUU, como respuestas a las situaciones internacionales que les resultan desfavorables, no parece tan clara; los caminos para tomar posición respecto a situaciones de países específicos parecen tener poca relación con la solución de los conflictos internos de EEUU, incluidos temas relevantes como su ley electoral y el control de armas y, más bien, parecen transitar por definiciones doctrinarias. Sus políticas no impidieron el triunfo vietnamita, ni la sobrevivencia de Cuba tras más de sesenta años de bloqueo. En fin. No me queda siempre clara la relación de la política interna con la internacional o la mundial con la local. ¿Cuánto incide en EEUU el voto latino en su política hacia México?

Es un ensayo muy valioso, que nos llama la atención sobre factores reales que inciden en la política exterior de nuestros países, interesante y de sorprendente fácil lectura. Me quedo con su gran aporte a nuestra comprensión de los EEUU, sus instituciones y su presente. ◆

Gonzalo Rovira



¿Qué hacer con la memoria de “octubre”?

Sergio Rojas
Ediciones Inubicalistas, 2023, 134 páginas

En este libro el filósofo chileno Sergio Rojas ha reunido nueve artículos que abarcan un arco temporal que va desde los días posteriores al “18-O”, hasta el clima post 4 de septiembre de 2022. Ese trayecto no fue sólo el de la, al menos aparente, disolución de lo que algunos han llamado “espíritu de octubre”, sino también el de la pandemia. Es un tiempo de perplejidades, de acaecimiento de cosas que llevaban el signo de *lo inédito* y que, por ello, ponían a prueba -con urgencia vital, no como mero ejercicio de ingenio- nuestra habitual forma de pensar. ¿Qué forma de pensar era (es) esa? Rojas sostiene que es una modalidad asociada a lo que en otros trabajos suyos ha denominado “escala humanista de la representación”, es decir, la perspectiva según cual la clave para penetrar lo real consiste en identificar sujetos (individuales o colectivos) e intereses, y de manera tal identificar quienes están a favor y en contra del orden imperante, y allí actuar. Es el modo de representación de la historia, en su acepción tradicional, y ante todo de la comprensión política. La propuesta de Rojas es que este modo de pensar no se corresponde con la magnitud de los fenómenos que se vislumbran, de ahí que la historia quede corta en explicaciones y la política no deje de errar. Propuesta que no aspira a la rectificación de tales perspectivas, sino ante todo a asumir qué es ese mundo de “lo tremendo” que se avizora, en el que quizá la historia y la política, tal como las conocimos, ya no puedan seguir existiendo.

Por ejemplo, la política, como variante más representativa del discurso de la acción, no puede permitirse *no saber* lo que ha pasado. Así vimos como unos se alinearon bajo la idea de que los acontecimientos de octubre del 2019 daban forma a una revolución (o algo así), y otros sobre la afirmación desesperada de que se trataba de un complot de mano foránea, o bien que todo se derivaba de la (mala) salud mental de los chilenos. Eran respuestas rápidas que buscaban rentabilidad política antes que comprensión. Pero esta parece ser la ley de la política hoy. Lo trágico fue ver cómo intelectuales y académicos “comprometidos” renunciaron también a la comprensión para sumarse a la lógica de la rentabilidad (aunque ya venían adiestrados en ella). En medio de estas tempranas certezas y abdicaciones Sergio Rojas se detuvo a formular la más esencial de las preguntas: “¿Qué (nos) está sucediendo?”.

Este libro puede ser considerado como una crónica del pensamiento de uno de los intelectuales más agudos del Chile actual, pero es por sobre todo una fuente de intuiciones y preguntas descarnadas que pueden iniciar el pensamiento también en el lector: “El origen del 18-O no fue la esperanzada convicción de que ‘algo distinto es posible’, sino la desesperada experiencia de un modo de vida que se ha tornado imposible” (p. 49) ◆

Pablo Aravena Núñez



La ética del cuidado

Fabianne Brugère
Metales Pesados, Santiago 2022,
121 páginas

La traducción de *La ética del cuidado* de la filósofa Fabianne Brugère (publicado el 2011 en Francia) aparece en Chile en 2022 por la editorial Metales Pesados. El libro se compone de una presentación escrita por la traductora Natalia Calderón Martínez, una introducción y tres capítulos.

La ética del cuidado es un texto que, si bien es introductorio, muestra la importancia sistemática e histórica de la noción de cuidado (*care*). Es deseable que en este tipo de textos la autora tenga conocimiento de la literatura especializada en torno al tema y Brugère en este texto lo demuestra y con ello ayuda a los lectores a comprender el surgimiento de la ética del cuidado en la década de los ochenta con Carol Gilligan y Nel Noddings, así como sus problemas (las lecturas conservadoras que delimitan la identidad de las mujeres, por ejemplo) y sus desafíos (cómo comprender una ética feminista del cuidado o cómo concebir una democracia sensible a las poblaciones más invisibilizadas o estigmatizadas, entre otros). Como menciona la traductora en la Presentación del libro, el cuidado es un asunto cultural, social y político del todo relevante en nuestra sociedad. En Chile, por ejemplo, distintas políticas públicas apuntan a tomar en cuenta la importancia de los cuidados como con el futuro Sistema Nacional de Cuidados. La propuesta de nueva Constitución —finalmente rechazada— mencionaba en el artículo 50 que “toda persona tiene derecho al cuidado” y en su artículo 49 que “el Estado reconoce que los trabajos domésticos y de cuidados son trabajos socialmente necesarios e indispensables para la sostenibilidad de la vida y el desarrollo de la sociedad”. Las políticas públicas relacionadas con el trabajo doméstico y de cuidados son necesarias y una correcta comprensión del *care* ayudará a frenar un uso neoliberal de este y su instrumentalización.

Brugère ha hecho una importante contribución a los estudios sobre la ética del cuidado con este libro. Faltan, sin duda, referencias a importantes teóricos y teóricas del cuidado. No obstante, destaco en este libro que, aunque es breve, logra posicionar temas relevantes en torno a la ética del cuidado. El envejecimiento de la población en las próximas décadas hará que aumente la necesidad de cuidados por lo que destaco, también, la relevancia de publicar esta traducción considerando que los estudios en torno al cuidado son cada vez más necesarios para ayudarnos a concebir nuevas maneras de comprender y transformar el mundo social. ◆

Daniela Alegría



Traspasar los límites: Haydée Santamaría

Margaret Randall, Aída Bahr (Trad.),
Carmen Avedaño (Ed.).
Ediciones Moneda, Viña del Mar, 2021.
Colección Memoria Colectiva, 330 págs.

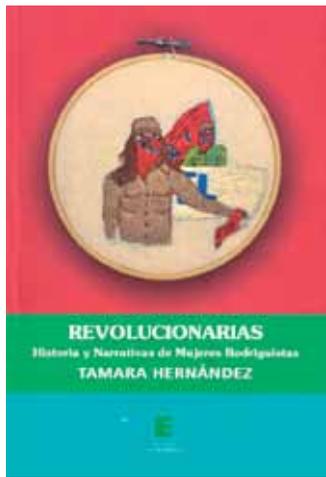
Este ensayo biográfico, de una belleza y fuerza envolventes, se va tejiendo, tan íntimo como político, desde diferentes dimensiones de la vida y contexto de Haydée Santamaría Cuadrado (sobre quien existen pocos libros y a quien conmemoramos en el marco de su natalicio). La autora lo escribe desde el cariño que siente por Haydée, de quien fue cercana mientras vivió en Cuba en la década del '70, y desde una rica y rigurosa investigación de fuentes orales, escritas y fotográficas. Desde este cruce, Margaret Randall va entrelazando una comprensión profunda y empática de los dilemas y contradicciones de Haydée, con un relato lúcido, sensible y crítico del proceso revolucionario cubano, enfatizando el rol (muchas veces invisibilizado) de las mujeres revolucionarias cubanas, desde una perspectiva feminista.

Así, la experiencia de la autora se va amalgamando con una mirada retrospectiva desde el presente, relevando por un lado, el rol fundamental que jugó Haydée como una de las mujeres referentes de todas las etapas del proceso revolucionario, desde las primeras reuniones previas a los asaltos de aquel 26 de julio de 1953 (hace 70 años) en la Provincia de Oriente, hasta su suicidio el 28 de julio de 1980. Una vida intensa llena de grandes satisfacciones y penas muy profundas, pero como ella misma dijera: “la vida es hermosa cuando se vive así”.

Por otro lado, la autora va construyendo un balance del proceso cubano visibilizando, desde la perspectiva de género, las importantes conquistas en relación a los derechos de las mujeres (por ejemplo, al aborto en 1961; incorporación masiva, pero paulatina, de las mujeres en la reorganización del trabajo remunerado, entre otros avances), sin dejar de proponer una lectura feminista de las relaciones de poder y desiguales entre géneros, aún persistentes. Mirada crítica que nos abre nuevas dimensiones para seguir explorando nuestra historia latinoamericana.

Mención aparte merece el rol de Haydée como fundadora en 1959 y presidenta de Casa de las Américas hasta su muerte, y el papel de esta institución político-cultural que ha sido fundamental para construir importantes lazos entre la revolución cubana y el resto de América Latina y el Caribe -Nuestra América-, fisurando, desde el aspecto político-cultural, el feroz bloqueo impuesto por EEUU. Casa de las Américas lleva, en su intensa cotidianidad, la marca de la forma apasionada y sensible de ser de Haydée, como relatan varios testimonios: miradas y praxis generosas, abiertas e independientes, plasmadas en la construcción de este espacio solidario, y en una concepción revolucionaria de la potencia creadora y transformadora del pensamiento crítico y las artes en procesos profundos de transformación social. ◆

Alondra Peirano Iglesias



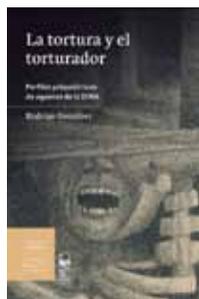
Revolucionarias Historia y Narrativa de Mujeres Rodrigoístas

Tamara Hernández.
Ediciones Escaparate, Concepción, 2021,
269 páginas.

Conocer y reconocer la historia de Chile de estos 50 años post golpe de Estado de 1973, desde la perspectiva de las mujeres organizadas en contra de la dictadura, nos permite ampliar el conocimiento de la historia reciente y de la sociedad. Muchas de estas mujeres han escrito sus testimonios, otras han escrito historia desde sus organizaciones, se han presentado ante la justicia para reclamar sus derechos por haber sido secuestradas, torturadas y encarceladas, también para dar a conocer los últimos tiempos de vida de compañeras y compañeros que vieron asesinar y/o desaparecer desde los lugares de secuestro y detención. Es más reciente la escritura de la historia de la participación organizada en los partidos y movimientos que lucharon en contra de la dictadura. Es el caso de estas militantes rodriguistas, que comparten su historia de militancia enlazada con la historia de su movimiento y del país. Mujeres

que postularon que la liberación de las mujeres pasaba por la liberación de toda la sociedad, mujeres dispuestas a dar la vida para que la vida fuera más plena y justa. Muchas veces pospusieron anhelos y opciones personales, por la lucha colectiva antidictatorial. *Las generaciones de mujeres combatientes y revolucionarias han enfrentado a lo largo de la historia diversas violencias y poderes, siendo tradicionalmente invisibilizadas sus luchas y formas de construcción política.* Mujeres que decidieron tomar las armas, como una expresión de los proyectos políticos de movimientos revolucionarios. Para las mujeres militantes y combatientes, como las del FPMR, del MIR, así como las del MAPU Lautaro u otras organizaciones revolucionarias, militar era una opción que implicaba dar la vida por las ideas y la propuesta de los movimientos en que se encontraron. Movimientos que se encontraban inmersos en un mundo masculinizado de la lucha, que no reconocía las especificidades de las luchas de las mujeres y que, a partir de los años 80, son las mujeres quienes empiezan a hacer valer esta diferenciación, al mismo tiempo que cumplen con las tareas orientadas para todo el movimiento. Usaron las armas en combates, asumiendo los miedos y la disociación muchas veces entre la vida amorosa, familiar, personal, y las obligaciones militantes. Fueron y son mujeres revolucionarias que marcaron un rumbo en la historia de Chile desde sus particularidades, fueron comandantes, guerrilleras e insubordinadas, muchas plantearon las diferencias de ser mujer al interior de sus propias organizaciones, y aunque los proyectos revolucionarios de esos años fueron derrotados, estas mujeres esparcieron semillas de reivindicaciones sociales y personales, así como formas de participación militante para las mujeres contemporáneas. ♦

Margarita Iglesias Saldaña



La tortura y el torturador Perfiles psiquiátricos de agentes de la DINA

Rodrigo Dresdner
Editorial LOM, 2023, 200 páginas

Bajo la pregunta fundamental “El torturador: ¿nace o se hace?”, el reconocido psiquiatra Rodrigo Dresdner, inicia el primer capítulo de su último libro, La tortura y el torturador.

El texto recoge y sistematiza el fenómeno histórico de la política terrorista de Estado aplicada en Chile durante el periodo de la dictadura cívico militar, develando los resultados de los estudios biográficos de tres de sus más emblemáticos y siniestros exponentes, como son: Manuel Contreras Sepúlveda, Pedro Espinoza Bravo y Armando Fernández Larrios.

El autor, dando por descartada la presencia de alguna enfermedad psiquiátrica por ser incompatible con el ejercicio de la profesión militar, indaga sobre las características personales con las que debieron contar los funcionarios torturadores de la dictadura chilena, así como en los criterios de selección que debían superar, más allá de la formación ideológica, su entrenamiento y adoctrinamiento.

Buscando responder a preguntas como: “¿qué rasgos personales fueron determinantes para ser considerados y reclutados para tareas de detención, tortura y exterminio?” se analiza en profundidad el funcionamiento de lo que operó como una verdadera maquinaria de aniquilamiento, esto es la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), que, según Dresdner, se configura como un inmejorable material de estudio sociológico acerca de la instauración e institucionalización de la tortura en Chile.

Se analizan también las doctrinas que han justificado y admitido la tortura como política de Estado en determinados momentos histórico-sociales, resultando reveladoras en ese sentido las declaraciones de la abogada defensora de Pinochet, Clare Montgomery, durante la detención del sátrapa en Londres cuando argumenta: “Las torturas realizadas bajo el régimen de Pinochet pueden considerarse actos oficiales, porque no fueron ejercidas por sadismo”.

Este libro es un aporte trascendental al conocimiento sobre las situaciones límite a las que puede llegar el ser humano, tanto de los que resistieron a la tortura y sobrevivieron dignamente a todo tipo de vejámenes físicos, psicológicos y sexuales, como de aquellos que hicieron lo inenarrable por defender los privilegios de la clase dominante.

A 50 años del quiebre democrático, nos encontramos con que muchas de estas heridas aún siguen dolorosamente abiertas, y, peor aún, en total impunidad, llegando a banalizarlas al extremo de incorporar las visitas a los sitios de memoria, como Villa Grimaldi, a circuitos turísticos de esparcimiento y comerciales, dando muestra de este sistema in-moral, corrupto y decadente. ♦

Jaime Castillo Petruzzi

¡Súmate ya!, a la COMUNIDAD DE LECTORXS LOM

Tenemos 4 modalidades de suscripción,
elige la tuya y recibe tu libro en casa.
Despacho gratuito.



Suscríbete en
www.lom.cl



LOMEditiones



@Lomediciones



@lom_ediciones

Mao Tse-tung Sobre la contradicción

Sobre el tratamiento correcto de las contradicciones en el seno del pueblo



En venta a \$2.950 (Edición digital) \$4.950 (Edición impresa)
en librerías y Le Monde Diplomatique
Por internet: www.editorialauncreemos.cl
mail: espartacoeditions@gmail.com



NUEVO LIBRO

REFLEXIONES

Humberto Maturana, Noam Chomsky, Annie Ernaux,
Pierre Bourdieu, Michel Foucault, Jacques Derrida y Noemi Klein.

¿Cuál es la contribución histórica de la noción de autopoiesis?
por Humberto Maturana

Levantar la cabeza
por Annie Ernaux

La esencia del neoliberalismo
por Pierre Bourdieu

Entrevista de Le Monde Diplomatique a Noam Chomsky
por Federico Kukso

El olvidado Lobo de Maquiavelo
por Jacques Derrida

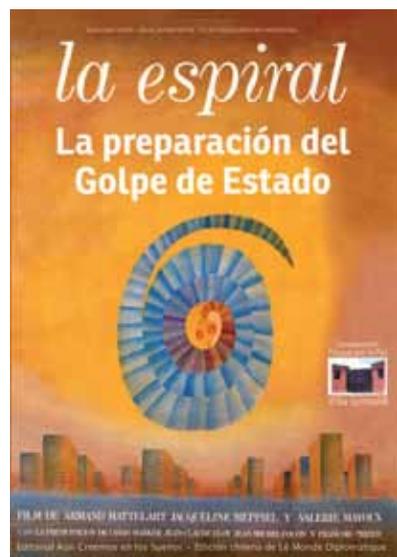
Justicia versus poder
por Noam Chomsky y Michel Foucault

"Esto es un adelanto del calentamiento global"
por Noemi Klein

Disponible impreso a \$4.950 y en versión digital a \$2.950 en:
Librería *Le Monde Diplomatique*, San Antonio 434, Santiago

www.editorialauncreemos.cl

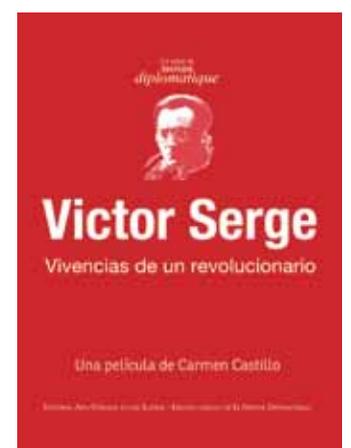
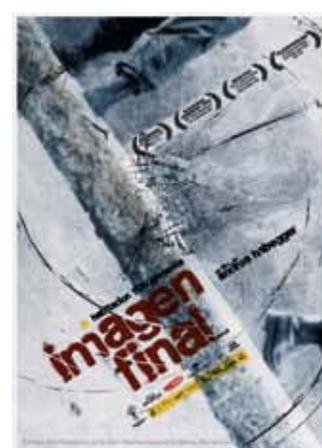
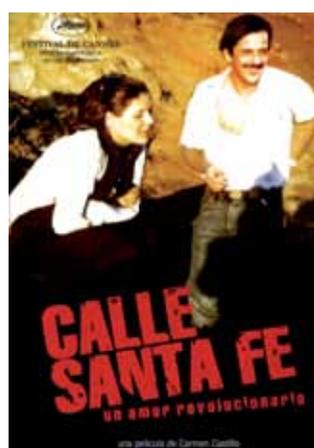
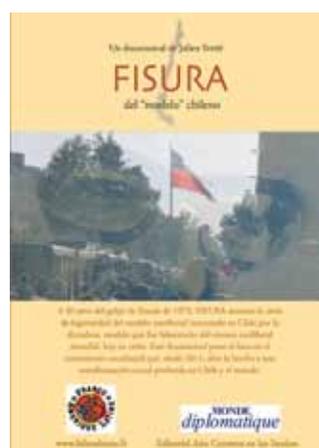
Documentales en DVD \$4.950



LA ESPIRAL, la preparación del golpe de Estado

Un riguroso y apasionante documental, de 140 minutos, que expone los mecanismos del plan destinado a destruir el proyecto de la Unidad Popular encabezado por Salvador Allende. Sus siete capítulos desarrollan el crescendo dramático: el Plan, el Juego, el Frente, el Acercamiento, el Arma, el Ataque y el Golpe.

Un film de Armand Mattelart, Jacqueline Meppiel y Valérie Mayoux.



Librería *Le Monde Diplomatique*, San Antonio 434, Santiago. Teléfono: 22 608 35 24
Compre por internet en: www.editorialauncreemos.cl